



Decreto Supremo Nº 009-2023-JUS

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DEL ADOLESCENTE EN RIESGO Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL AL 2030

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 4 de la Constitución Política del Perú, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono;



G. VALDIVIESO P.

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;



S. MIRANDA F.

Que, asimismo, el referido artículo, dispone que las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas; y se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros;



Que, el artículo 4 de la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, señala que el Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC tiene como parte de sus mandatos y atribuciones, estudiar el fenómeno criminal del Perú y elaborar el Diagnóstico Nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión, así como formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal ya la ejecución de penas y medidas de seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo, entre otros;



Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2013-JUS se aprueba la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, la cual tiene por objetivo principal la disminución del involucramiento de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de la reducción de conductas antisociales, una administración de justicia eficaz y garantista, y la resocialización del adolescente y reparación a la víctima;



E. REBAZA I.

Que, el numeral 6 de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, establece que las políticas nacionales vigentes se adecúan a sus disposiciones y para dicho fin, cada Ministerio aprueba mediante resolución de su titular la lista sectorial de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0290-2019-JUS se aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la que se incluye al Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0030-2023/CEPLAN/PCD, la cual deja sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00047-2018/CEPLAN/PCD, se actualizó la Guía de Políticas Nacionales, instrumento que desarrolla la metodología para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su actualización; siendo que, la decisión de actualizar una política nacional es de competencia del Ministerio conductor o rector y se sustenta en un informe técnico que desarrolle un análisis de la política vigente, los resultados de su implementación y el nuevo contexto que amerita la actualización del documento;



G. VALDIVIESO R.

Que, en ese sentido, el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal requiere ser actualizado, tanto por los retos vinculados a la persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal, como por las oportunidades de mejora identificadas, brindando acceso a servicios y/o bienes que contribuyan a que la población adolescente alcance su bienestar general;



S. MIRANDA F.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0451-2019-JUS, modificado por la Resolución Ministerial N° 0311-2020-JUS, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para actualizar la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal;



Que, en la XIX Sesión del Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC se aprobó el documento de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, elaborado por el citado Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal;



Que, el numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM señala que las Políticas nacionales, previa opinión técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo de el/la titular del sector o sectores competentes;

Que, con Informe Técnico N.º D000008-2023-CEPLAN-DNCPN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) emite opinión técnica sobre la propuesta de Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, señalando que la misma cumple con lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N°029-2018-PCM, y sus modificatorias; así como con los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0030-2023/CEPLAN/PCD;



E. REBAZA I.

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL PERÚ



Decreto Supremo

Que, la presente propuesta no requiere el desarrollo de un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), toda vez que está comprendida en el supuesto del inciso 11 del numeral 28.1 del artículo 28 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, el cual establece que “las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales, planes estratégicos y operativos, o demás planes, estrategias o instrumentos de gestión que se elaboran o aprueban en el marco de las disposiciones que los regulan”, no se encuentran comprendidos en el AIR Ex Ante;



G. VALDIVIESO P.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS;



S. MIRANDA F.

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030

Aprobar la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

2.1. La Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 es de cumplimiento obligatorio para las entidades de la Administración Pública, señaladas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

2.2. Las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias asumen las obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.



E. REBAZA I.

Artículo 3.- Conducción de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030

La Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 constituye una política nacional multisectorial, cuya conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 4.- Seguimiento y evaluación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030

4.1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera técnicamente el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.

4.2. El proceso de seguimiento y evaluación se realiza de conformidad con las pautas metodológicas que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en materia de seguimiento y evaluación de políticas y aquellas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considere pertinentes.

4.3. La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realiza el seguimiento de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, con la información provista oportunamente por las entidades de la Administración Pública responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional, a fin de realizar el seguimiento y evaluación de su implementación.



Artículo 5.- Implementación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030

Las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a sus funciones y competencias, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios, actividades operativas identificadas, así como otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.



Artículo 6.- Financiamiento

La implementación de las medidas y acciones en el marco de lo dispuesto en la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 se efectúa de manera progresiva, con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades del Estado involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.



Artículo 7.- Publicación

El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en las sedes digitales de los Ministerios cuyos titulares lo refrendan, el mismo día de la publicación de la presente norma y del Resumen Ejecutivo de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 8.- Refrendo

El presente decreto supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Interior, el Ministro de Salud, la Ministra de Educación y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.



REPÚBLICA DEL PERÚ



DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA
G. VALDIVIESO P.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS

DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA

OFICINA GENERAL DE ASesoría JURÍDICA
E. REBAZA I.

Decreto Supremo

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación del Decreto Supremo Nro. 014-2013-JUS

Derogar el Decreto Supremo N° 014-2013-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ~~veintidós~~ ^{veintiséis} días del mes de ~~setiembre~~ ^{septiembre} del año dos mil veintitrés.

DINA ERGILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

NANCY TOLENTINO GAMARRA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

DANIEL YSAUR MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

EDUARDO MELCHOR ARANA YSA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

MIRIAM JANETTE PONCE VERTIZ
Ministra de Educación

VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
S. MIRANDA F.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Asuntos Criminológicos

Dirección de Política
Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

POLÍTICA NACIONAL DEL ADOLESCENTE EN RIESGO Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL AL 2030

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CRIMINOLÓGICOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. BASE NORMATIVA	4
2.1. Normas nacionales	4
2.2. Normas e instrumentos internacionales	17
III. DIAGNÓSTICO	26
3.1. Enunciado del problema público	26
3.2. Conceptos clave	27
3.3. Modelo del problema público	28
3.4. Enfoques transversales	31
3.5. Situación actual	33
3.6. Situación futura deseada	74
3.7. Alternativas de solución	76
IV. OBJETIVOS PRIORITARIOS	85
V. LINEAMIENTOS	90
VI. PROVISIÓN DE SERVICIOS	93
VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	138
7.1. Seguimiento	138
7.2. Evaluación	139
VIII. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS	140
IX. Anexos	143
Anexo 01: Metodología	143
Anexo 02: Determinación de la situación futura deseada	145
Anexo 03: Recojo de las aspiraciones de las personas en relación con el problema público	156
Anexo 04: Análisis de costos y beneficios de las alternativas de solución	159
Anexo 05: Fichas técnicas de indicadores	165
Anexo 06: Identificación de políticas relacionadas	172
Anexo 07: Fichas de actividades operativas	185
Anexo 08: Matriz de consistencia	196
X. Bibliografía	212
XI. Resumen ejecutivo	217



I. INTRODUCCIÓN

En el 2013, mediante Decreto Supremo N°014-2013-JUS, en su artículo primero, aprobó el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013-2018) cuyo objetivo es la disminución del involucramiento de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de la prevención, una administración de justicia eficaz y garantista, y la resocialización del adolescente. No obstante, mediante la Resolución Ministerial N°0290-2019-JUS, se identifica la lista sectorial de políticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), estableciéndose en este marco, la necesidad de actualizar el mencionado Plan Nacional mediante una Política Nacional, siguiendo las nuevas disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN y del Reglamento que regula las políticas nacionales aprobado por Decreto Supremo N°029-2018-PCM.

En este sentido, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, se realizaron acciones para la actualización del referido Plan Nacional incorporando más de 10 sectores públicos, asociaciones sin fines de lucro a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes "Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia", expertos nacionales e internacionales, y la participación de los y las adolescentes a nivel nacional en dos espacios de opinión: 1. Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y 2. Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa – Ministerio Público. Finalmente, en la XIX sesión de mayo de 2021 el Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC otorga conformidad del avance del documento de política elaborado por el Grupo de Trabajo Multisectorial para actualizar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.

La política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030 atiende un problema de alta prioridad para el Estado peruano, el cual consiste en las perjudiciales condiciones de desarrollo criminógeno de los y las adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad para involucrarse en la criminalidad¹, de modo que, hay diversas limitaciones para que un grupo vulnerable de adolescentes puedan acceder a un proyecto de vida prosocial garantizando la paz y seguridad en la comunidad.

Ante ello, la mencionada política busca revertir los riesgos sociales delictivos de la población adolescente y de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, estando estos objetivos muy relacionados con diversas políticas y normativas nacionales asociadas a la lucha contra la delincuencia, el desarrollo integral de los y las adolescentes y las convenciones y tratados internacionales en materia de niñez y adolescencia. Por lo tanto, para conseguir dicho propósito, los objetivos cubren dos grandes mecanismos de intervención: La prevención y la reinserción social, evitando en todo momento priorizar las medidas de política penal más reactivas conforme se sugiere en la Observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño.

¹ Cabe señalar que, a nivel nacional, el número total de adolescentes en riesgo de cometer infracciones a la ley penal aún no ha sido identificado debido a la complejidad de los factores comunitarios, educativos, familiares y personales involucrados en su desarrollo social.



Para la prevención se ha determinado **el objetivo prioritario 1: “Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor”**. De este modo, los y las adolescentes que actualmente viven en contextos de riesgo para la delincuencia puedan recibir por parte del Estado múltiples programas y servicios que brinden oportunidades de desarrollo puntual que han demostrado evitar la formación de una trayectoria criminógena. Las acciones se centrarán en un trabajo multisistémico en cuanto es imprescindible, en la mayor medida posible, cambios en sus contextos sociales concreto a nivel familiar, escolar y en su comunidad. Asimismo, la acción multisectorial, así como intergubernamental permitirá garantizar que los servicios del Estado lleguen a la población adolescente de forma focalizada para aquellos que se encuentran en mayor riesgo o no están siendo atendidos sus factores de protección.

En relación con la dimensión de reinserción social, se ha establecido los **objetivos prioritarios 2 “Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil” y 3 “Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal”**. En este sentido, en el caso de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal se priorizarán medidas alternativas a la privación de libertad, aplicación de enfoques restaurativos, así como estrategias con evidencia para la reinserción educativa, familiar, laboral y social que permitan la reducción significativa de los comportamientos antisociales y formación de proyectos de vida prosocial. Cabe resaltar que, esta gran dimensión forma parte del sistema de justicia penal juvenil y por ello, la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348) es fundamental para obtener sus resultados.

II. BASE NORMATIVA

2.1. Normas nacionales

- A) Normas que reconocen, garantizan y protegen el derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Constitución Política del Perú (artículo 1°, artículo 2 incisos 1, 2, 7, 22, 24 h; artículo 4, artículo 7, artículo 14, artículo 44).

Artículo 1.- Defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias.



22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos. - Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Artículo 44.- Deberes del Estado. Son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Artículo 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

Ley N°27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de Niños y Adolescentes.

Título Preliminar. - Artículo I. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.

Título Preliminar. - Artículo II.- Sujeto de derechos. - El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma.

Título Preliminar. - Artículo IV. Capacidad. Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por este Código y demás leyes. La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de esos actos requiere de un



régimen de asistencia y determina responsabilidades. En caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de medidas de protección y el adolescente de medidas socio-educativas.

Título Preliminar. - Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente. En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

Título Preliminar. - Artículo X.- Proceso como problema humano. El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para los niños y adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados como problemas humanos.

LIBRO PRIMERO. DERECHOS Y LIBERTADES.

Capítulo I Artículo 1º. A la vida e integridad. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental.

Artículo 4º. A su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación.

Artículo 5º. A la libertad. El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad. Ningún niño o adolescente será detenido o privado de su libertad. Se excluyen los casos de detención por mandato judicial o de flagrante infracción a la ley penal.

LIBRO SEGUNDO. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Artículo 27º. Definición. El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente es el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los programas y acciones desarrollados para la protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes. El sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones interinstitucionales desarrolladas por instituciones públicas y privadas.

CAPÍTULO VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO QUE COMETA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL

Artículo 242.- Protección. Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las medidas de protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: a) El cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por Instituciones de Defensa; b) Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con



atención educativa, de salud y social; c) Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; y d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial.

LIBRO CUARTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

CAPÍTULO IV ÓRGANOS AUXILIARES

SECCIÓN II POLICÍA ESPECIALIZADA

Artículo 151°. Definición. La Policía especializada es la encargada de auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado en la educación, prevención y protección del niño y el adolescente.

Artículo 152°. Organización. La Policía especializada está organizada a nivel nacional y coordina sus acciones con el PROMUDEH y con las instituciones debidamente autorizadas. Artículo 153.- Requisitos. - El personal de la Policía especializada, además de los requisitos establecidos en sus respectivas normas, deberá: a) Tener formación en las disciplinas propias del derecho del niño y el adolescente y en derecho de familia; b) Tener una conducta intachable; y c) No tener antecedentes judiciales ni disciplinarios.

Artículo 154°. Capacitación. La Policía Nacional coordina con PROMUDEH y con las instituciones de bienestar familiar debidamente autorizadas por éste, la capacitación del personal que desempeñará las funciones propias de la Policía especializada.

Artículo 155°. Funciones. Son funciones de la Policía especializada: a) Velar por el cumplimiento de las normas de protección de niños y de adolescentes que imparten las instituciones del Estado y por la ejecución de las resoluciones judiciales; b) Desarrollar, en coordinación con otras entidades, actividades educativas y recreativas tendentes a lograr la formación integral de niños y adolescentes; c) Controlar e impedir el ingreso y permanencia de niños y adolescentes en lugares públicos o privados que atenten contra su integridad física o moral; d) Impedir la posesión o comercialización de escritos, audiovisuales, imágenes, material pornográfico y otras publicaciones que pueden afectar la formación de los niños o adolescentes; e) Vigilar el desplazamiento de niños o adolescentes dentro y fuera del país, especialmente en los aeropuertos y terminales de transporte; f) Apoyar con programas de educación y recreación a las instituciones encargadas de la vigilancia de adolescentes infractores; g) Cuando las circunstancias lo exijan, encargarse de la vigilancia de los adolescentes infractores en centros especializados; h) Las demás que le competen de conformidad con el presente Código, su Ley Orgánica y las demás normas.

Ley N° 30466 - Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño

Artículo 4. Garantías procesales

Para la consideración primordial del interés superior del niño, de conformidad con la Observación General 14, se toman en cuenta las siguientes garantías procesales:

1. El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos que la Ley le otorga.



2. La determinación de los hechos, con la participación de profesionales capacitados para evaluar el interés superior del niño.

(...)

5. La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los padres, según corresponda.

Decreto Supremo N°002-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño.

Artículo 26.- Aplicación del interés superior del niño en el acceso y administración de justicia

26.1 Derecho de la niña, niño o adolescente a ser informado, escuchado, expresar su propia opinión y que sea tomada en consideración en la administración de justicia

a) Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser informados de manera accesible, sobre el proceso, los servicios judiciales existentes y las posibles soluciones temporales o permanentes, con el fin de dar a conocer su opinión en el marco del proceso judicial en el cual se encuentran involucrados.

b) La opinión de la niña, niño o adolescente es libre y puede expresarse en su propio idioma o lengua originaria, directamente o por medio de su representante legal. Cuando su opinión entre en conflicto con la de su representante, se debe garantizar otra fórmula de representación, tales como un curador procesal, tutela, entre otros.

c) Es fundamental conocer la opinión de las niñas, niños y adolescentes en los procesos y procedimientos judiciales para determinar y evaluar la forma de aplicación del interés superior del niño en cada caso en particular.

(...)

26.10 En el ámbito de la justicia penal juvenil, en concordancia con la protección especial que le asiste a todo adolescente que se le impute haber participado en la comisión de un delito o falta, las y los adolescentes deben acceder a una justicia especializada que cuente con recursos institucionales y una intervención interdisciplinaria, aplicando medidas alternativas a la privación de la libertad y el pleno respeto de los derechos y garantías del debido proceso, debiendo tener presente que el sistema penal juvenil tiene una finalidad educativa y de reinserción social, propiciando que el adolescente repare el daño causado, continúe sus estudios y se capacite profesional o técnicamente. La medida de internamiento se aplica como último recurso y siempre por el tiempo más breve posible. Los Centros Juveniles de adolescentes en conflicto con la ley penal deben garantizar espacios adecuados y condiciones de acuerdo con los estándares de la justicia juvenil restaurativa para la protección, reinserción social y el desarrollo integral de las y los adolescentes. Asimismo, es indispensable garantizar que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan ejercer plenamente sus derechos, tales como los de salud, educación, entre otros.

B) Normas que regulan la competencia, coordinación y función de las leyes

Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Artículo 4, artículo 5, artículo 6, Capítulo II artículo 17; Capítulo III artículo 23 inciso 23.3 a y c).



Artículo 4º. Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades.

Artículo 5º. Competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales. El ejercicio de las competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales está regido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, así como por las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios y las entidades que componen el Poder Ejecutivo, según corresponda.

Artículo 6º. Funciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones: 4. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas.

Capítulo II Presidencia del Consejo de Ministros. Artículo 17º. Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil.

Capítulo III Ministerios. Artículo 23º. Funciones de los Ministerios. Inciso 23.3. Para el ejercicio de las competencias compartidas, en las funciones que son materia de descentralización, corresponde a los Ministerios: a) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas nacionales y sectoriales, y evaluar su cumplimiento. c) Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas.

Ley N°29807, Ley de Creación del Consejo Nacional de Política Criminal (Artículo 1; artículo 4, incisos 1.2.6).

Artículo 1. Creación y finalidad de la Política Criminal encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del estado. Dicho Consejo Nacional estará adscrito al Ministerio de Justicia.

Artículo 4. Mandatos y atribuciones. 1. Estudiar el fenómeno criminal del Perú y elaborar el diagnóstico nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión. 2. Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del programa Nacional Política Criminal, a partir de la información de la realidad nacional, de las conclusiones del diagnóstico nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su expansión, y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y justicia penal. 6. Contribuir con las autoridades regionales y locales en la elaboración de planes de política criminal.

Ley N°29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Artículo 5, artículo 6 b-c).

Artículo 5. Finalidad y principios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la finalidad de promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad.



Artículo 6. Funciones rectoras. b. Formular, ejecutar y supervisar las políticas nacionales que le son propias por su ámbito de competencia. C. Realizar el seguimiento del desempeño y logros alcanzados por las políticas, planes y programas en las materias de su competencia, en los niveles nacional, regional y local, así como tomar las medidas correspondientes.

Decreto legislativo N.º 1266, Ley de organización y Funciones del Ministerio del Interior.

Artículo 5. Funciones

El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:

(...)

2) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana en el marco de sus competencias; prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como vigilar y controlar las fronteras, a través de la Policía Nacional del Perú.

C) Normas que regulan la sanción, reinserción y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

Decreto Supremo N.º 026-2017-IN. - Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú

Artículo 128. División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.

(...)

La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes:

(...)

2) Prevenir, investigar y denunciar el delito contra la indemnidad sexual de menores de edad, en las modalidades de pornografía infantil, propuestas sexuales a niños, niñas y adolescentes a través de medios tecnológicos.

Artículo 195. Dirección de Seguridad Ciudadana

La Dirección de Seguridad Ciudadana

(...)

Asimismo, previene, investiga y denuncia la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la normativa sobre la materia; así como, realiza acciones de protección temporal a niños, niñas y adolescentes en abandono e infractores a la ley penal. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC, coordina con la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

(...)

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes:



(...)

4) Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades, programas y proyectos preventivos de acercamiento al niño, niña y adolescente que ejecuta el sistema policial de seguridad ciudadana a nivel nacional.

Decreto Legislativo N°1299, Decreto que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículo 1, artículo 4-h, artículo 7- e).

Artículo 1. Objeto. La propuesta normativa tiene como objeto transferir el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SINARSAC, que se encuentra actualmente a cargo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 4. Ámbito de competencia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad competente en las siguientes materias: h) Reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Artículo 7. Funciones Específicas Son funciones específicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: e) Orientar y contribuir con el establecimiento de la política criminal y formular la política penitenciaria del Estado, así como implementar la política de reinserción social de las y los adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Decreto Legislativo N.º 1350, Decreto Legislativo de Migraciones (Título Preliminar, artículo VI; artículo 11; artículo 53).

Título Preliminar.

Principios

Artículo VI.- Principio de interés superior del niño y adolescente. En toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través de todas sus instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos.

Artículo 11º.- Personas extranjeras en situación de vulnerabilidad

11.1 MIGRACIONES y el Ministerio de Relaciones Exteriores ponen en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentren las personas migrantes, para la adopción de las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus derechos, en particular las referidas a niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad, o que pertenecen a un pueblo indígena víctima de trata de personas y tráfico de migrantes, víctimas de violencia familiar y sexual, y quienes requieren protección en atención a una grave amenaza o afectación a sus derechos fundamentales.

11.2 MIGRACIONES y Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de sus competencias adoptan los criterios para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad; pudiendo emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal o residencia pertinentes.

Título V



Procedimiento migratorio sancionador

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 53º.- Potestad sancionadora de MIGRACIONES

53.1. MIGRACIONES tiene potestad sancionadora y garantiza la aplicación del principio del debido procedimiento en el procedimiento sancionador. Son sujetos pasibles de ser sancionados:

a. Las personas nacionales y extranjeras, las empresas de transporte, las empresas operadoras o concesionarias o las personas jurídicas domiciliadas en el país que infrinjan las obligaciones del presente Decreto Legislativo.

b. Los servidores civiles de MIGRACIONES que infrinjan lo establecido en la presente norma se le iniciará el procedimiento administrativo disciplinario conforme al reglamento respectivo.

53.2. En ningún caso MIGRACIONES aplicará sanciones a niñas, niños y adolescentes.

53.3 MIGRACIONES puede dispensar el impedimento de ingreso al país por casos excepcionales de oficio o a solicitud de parte, mediante decisión motivada.

Ley Nº 27891, Ley del Refugiado (Capítulo II. Del Refugiado, Artículo 5; Capítulo VI. De las Sanciones, Artículo 32).

Capítulo II.

Del Refugiado.

Artículo 5º.- Derecho a la no devolución

5.1 Toda persona que invoque la condición de refugiado, puede ingresar a territorio nacional, no pudiendo ser reemplazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas por las razones señaladas en el Artículo 3º de la presente Ley.

5.2 El solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en última instancia su situación.

5.3 No puede invocar este derecho quien, por razones fundadas, sea considerado un peligro o haya cometido un delito grave fuera y antes de ingresar al Perú, y constituya una amenaza para el orden público y la seguridad interna.

Capítulo VI.

De las Sanciones.

Artículo 32º.- Expulsión del Refugiado La Comisión Especial para los Refugiados es la única entidad competente para determinar la expulsión del refugiado, de conformidad con, el Reglamento de la presente ley con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Decreto Legislativo N°1348, Decreto que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. (Título Preliminar. Artículo I



inciso 1 y 2, artículo II inciso 1, artículo V incisos 1 y 2, Sección I numeral 1.1, artículo 1. Artículo 5).

Título Preliminar. Artículo I. responsabilidad penal especial 1. El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales. 2. Para la imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar la responsabilidad del adolescente. Está prohibida toda forma de responsabilidad objetiva.

Artículo II.- Principio de interés superior del adolescente.1. Al adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. El desarrollo y ejercicio de sus derechos deben ser considerados como principios rectores. Ningún derecho debe ser perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del adolescente.

Artículo V.- Principio de justicia especializada.1. El proceso de responsabilidad penal del adolescente es un sistema distinto al de adultos por proteger en mayor medida los derechos y garantías de los adolescentes. La aplicación del presente Código está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados en Derechos Humanos, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño, en los instrumentos internacionales ratificados por Perú, que constituyen la doctrina de la protección integral del adolescente y demás estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como en Ciencias Penales. 2. La especialización abarca tanto a los servidores civiles involucrados en el desarrollo del proceso, como aquellos encargados de la ejecución de toda medida socioeducativa dispuesta.

Artículo VIII. Principio de presunción de inocencia. Se presume la inocencia del adolescente sometido al proceso de responsabilidad penal hasta que no se demuestre lo contrario por los medios establecidos en el presente Código.

Sección I. Disposiciones Generales. Artículo 1.- objeto de la norma.1.1. El presente Código regula el proceso de responsabilidad penal que se sigue a los adolescentes por la comisión de infracciones, que constituyen hechos tipificados en el Código Penal o en las leyes especiales como delitos o faltas. Comprende desde las medidas para intervenir sin recurrir al proceso judicial, así como las actuaciones a nivel policial, la investigación del hecho infractor, la atribución de responsabilidad en el proceso judicial, la determinación de las medidas socioeducativas y su ejecución.

Artículo 5.- Normas vinculantes. El proceso de responsabilidad y especialmente la privación de libertad respecto del adolescente se regula por el presente Código, respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú, así como en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño u otros instrumentos internacionales que el Estado peruano haya suscrito o suscriba y sean de aplicación.

D) Normas que aprueba las políticas y reglamentos.

Decreto Supremo N°008-2012-JUS, que aprueba el Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal.



Que, mediante Ley N° 29807, se creó el Consejo Nacional de Política Criminal, el cual está encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado.

Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal creado por ley N°29807. Título I. aspectos generales. Artículo 1°.- Definición El Consejo Nacional de Política Criminal - CONAPOC, creado por Ley N°29807, es la instancia concertadora y coordinadora del Estado encargada de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política pública en materia criminal. Se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2°.- Política Criminal. Se entiende por política criminal al conjunto de medidas dispuestas por el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y función resocializadora), dedicadas especialmente a la prevención, represión y control del delito.

Capítulo II. Funciones y atribuciones. Artículo 10°. Funciones. El Consejo Nacional de Política Criminal en adición a las funciones establecidas en el artículo 4° de la Ley, tiene las siguientes funciones: a. Formular y proponer las acciones relativas al ámbito de su competencia; b. Aprobar las metodologías y técnicas de estudio con base empírica para evaluar los fenómenos delictivos; c. Coordinar acciones con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para el diseño de estrategias y acciones que se plasmen en programas concretos para solucionar la demanda de seguridad; d. Establecer las estrategias de prevención del delito.

Decreto Supremo N°092-2017-JUS, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

EJE 1: Capacidad preventiva del estado frente a los actos de corrupción

EJE 2: Identificación y gestión de riesgos

EJE 3: capacidad sancionadora del estado frente a los actos de corrupción

Decreto Supremo N°011-2020-JUS, que aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030

Objetivo Prioritario N°1: Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario.

Objetivo Prioritario N°2: Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad.

Objetivo Prioritario N°3: Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria.

Objetivo Prioritario N°4: Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre.

Objetivo Prioritario N°5: Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario.

Objetivo Prioritario N°6: Mejorar capacidades para la reinserción en personas que han cumplido sus penas.

Decreto Supremo N°013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Que, la Ley N°29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, define la naturaleza jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y regula su ámbito de competencia, funciones, organización y estructura orgánica básica;

Que, asimismo, el artículo 5° de la Ley N°29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la finalidad de promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad.

Decreto Supremo N°029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N°038-2018-PCM, Decreto Supremo N°023-2019-PCM, Decreto Supremo N°168-2020-PCM, Decreto Supremo N°031-2021-PCM, y Decreto Supremo N°064-2021-PCM.

Artículo 2. Finalidad. El presente Reglamento tiene como finalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio a fin de que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en beneficio de los ciudadanos.

Artículo 5.- Políticas de alcance nacional. Son políticas de alcance nacional, aplicables en todo el territorio, las Políticas de Estado y las Políticas Nacionales

Artículo 8. Políticas Nacionales. 8.1 Constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo.

Artículo 15.- De la conducción de una política nacional multisectorial. 15.1 La conducción de una política nacional multisectorial supone su diseño y formulación de manera conjunta con los ministerios intervinientes, así como la coordinación, articulación intersectorial, seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 15.2 La conducción de la política nacional multisectorial se asigna al Ministerio interviniente cuyas competencias y funciones sectoriales presentan mayor consistencia con los objetivos de la política

Decreto Supremo N°042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente periodo presidencial

Eje 3: Protección social para el desarrollo

3.1 Garantizar la lucha contra la discriminación y el racismo, priorizando los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano, en respeto de la diversidad cultural del país; así como, la prestación de servicios con enfoque intercultural.

Eje 6: Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional

6.3 Fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país.

6.6 Fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú para una mejor prestación de servicios al ciudadano.

Decreto Supremo N°006-2022-IN, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030



Objetivo prioritario 1: Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencia cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población.

Objetivo prioritario 2: Mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana.

Objetivo prioritario 3: Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos.

Objetivo prioritario 4: Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población.

Objetivo prioritario 5: Disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales.

E) Resoluciones que aprueban y modifican las Políticas y Planes.

Resolución Ministerial N°0290-2019-JUS, que aprueba la lista de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, modificado mediante Resolución Ministerial N°0286-2022-JUS en su artículo 1.

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece como función de los Ministerios, entre otros, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N°013-2017-JUS y en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N°029-2018-PCM; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. 2. Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020. 3. Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 4. Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal. 5. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00030-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la actualización de la Guía de Políticas Nacionales.

Que, el artículo 2 de la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los Ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas;

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la citada norma establece como competencia exclusiva de este Poder del Estado el diseño y supervisión de las políticas nacionales, las cuales son formuladas considerando los intereses generales del



Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, y que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y niveles de gobierno.

2.2. Normas e instrumentos internacionales

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1969) (Artículo 1 inciso 1; artículo 2; artículo 5 inciso 1,5; artículo 8; artículo 19; artículo 25). Ratificada el año 1978.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;



f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones Unidas). Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. La Resolución A/Res/70/L1 (Párrafo 3; párrafo 7; párrafo 23; párrafo 24).

La Agenda 2030, que consiste en una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, busca asegurar que todas las naciones y todas las personas en todas partes sean alcanzadas e incluidas en el logro de los ODS.

Ofrece una visión universal, integrada, transformadora y basada en los derechos humanos para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, que se aplica a todas las personas y todos los países, incluidos los más desarrollados.

Párrafo 3. Establece que: Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección



duradera del planeta y sus recursos naturales. Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad.

Párrafo 7. Refiere que: En estos Objetivos y metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social.

Párrafo 23. Establece que: Es necesario empoderar a las personas vulnerables. Por ello, esta Agenda refleja las necesidades de todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad (más del 80% de las cuales viven en la pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes, entre otros. Estamos resueltos a emprender más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar obstáculos y restricciones, fortalecer el apoyo a las personas que viven en zonas afectadas por emergencias humanitarias complejas y en zonas afectadas por el terrorismo y atender sus necesidades especiales.

Párrafo 24. Promete que: Nos comprometemos a poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lo que incluirá erradicar la pobreza extrema de aquí a 2030. Todas las personas deben disfrutar de un nivel de vida básico, incluso mediante sistemas de protección social. También estamos decididos a poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria como prioridad, y a eliminar todas las formas de malnutrición. A este respecto, reafirmamos el importante papel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y su carácter inclusivo, y acogemos con beneplácito la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción.

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. (Artículo 1; Artículo 2, inciso 1.2, Artículo 40). Ratificada el año 1990.

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2. 1. Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 40



1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considere que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;



b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Nueva Agenda Urbana. (Párrafo 20; párrafo 39; párrafo 57, párrafo 61; párrafo 155). Resolución aprobada por la Asamblea General en el 2016

La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo.

Párrafo 20. Establece que: Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié en poner fin a las múltiples formas de discriminación a que se enfrentan, entre otros, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los habitantes de barrios marginales y asentamientos informales, las personas sin hogar, los trabajadores, los pequeños agricultores y pescadores, los refugiados, los repatriados, los desplazados internos y los migrantes, independientemente de su situación migratoria.

Párrafo 39. Refiere que: Nos comprometemos a promover un entorno seguro, saludable e inclusivo en las ciudades y los asentamientos humanos que permita a todos vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor a la violencia y la intimidación, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes y las personas en situaciones vulnerables suelen verse especialmente afectados. Trabajaremos también en pro de la eliminación de las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Párrafo 57. Refiere: Nos comprometemos a promover, según corresponda, el empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y las oportunidades de subsistencia en las ciudades y los asentamientos humanos, prestando especial atención a las necesidades y posibilidades de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes, en particular los más pobres y aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y promover un acceso sin discriminación a las oportunidades de generación de ingresos legales.

Párrafo 61. Promete: Nos comprometemos a aprovechar los dividendos demográficos urbanos, cuando sea posible, y promover el acceso de los jóvenes a la educación, el desarrollo de competencias y el empleo para lograr el aumento de la productividad y una prosperidad compartida en las ciudades y los asentamientos humanos. Las niñas y los niños, los jóvenes y los jóvenes son fundamentales para lograr el cambio y crear un futuro mejor y, cuando se los empodera, tienen un gran potencial para tomar la palabra en nombre propio y en el de sus comunidades.



Párrafo 155. Establece que: Promoveremos las iniciativas de desarrollo de la capacidad para empoderar y fortalecer las aptitudes y capacidades de las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como de las personas en situaciones vulnerables, para la conformación de los procesos de gobernanza, el establecimiento de diálogos y la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, a fin de asegurar su participación efectiva en la adopción de decisiones sobre el desarrollo urbano y territorial.

Reglas de Naciones Unidas sobre la administración de Justicia de Menores. Reglas de Beijing. (1. Primera parte. Orientaciones 1 numeral 1.2 – 1.4; 5 Objetivos de la justicia de menores; 7 Derechos de los menores, numeral 7.1; Clausulas de salvedad 9 numeral 9.1). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

1. Primera parte. Orientaciones Fundamentales. - 1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento de delito y delincuencia posible. 1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad.

5. Objetivos de la justicia de menores

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.

7. Derechos de los menores 7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.

9. Cláusulas de salvedad 9.1 Ninguna disposición de las presentes Reglas podrá ser interpretada en el sentido de excluir a los menores del ámbito de la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas reconocidos por la comunidad internacional relativos al cuidado y protección de los jóvenes.

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los días 4 a 6 de marzo de 2008.

Capítulo I: Preliminar Sección 1ª.- Finalidad. 1. Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. 2. Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de



vulnerabilidad. 5. Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad (3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Sección 3ª. Comparecencia en dependencias judiciales 4.- Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad (76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja.

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). (Párrafo 1; párrafo 2; párrafo 3; párrafo 4; párrafo 5-a-c; párrafo 52). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

I. Principios Fundamentales.

Párrafo 1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

Párrafo 2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.

Párrafo 3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control.

Párrafo 4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.

Párrafo 5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir: a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales. c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes.



VI. Legislación y administración de la justicia de menores

52. Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes.

Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Reglas de La Habana (párrafo 1; párrafo 3; párrafo 11; párrafo 66; párrafo 67). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

I. Perspectivas fundamentales.

Párrafo 1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.

Párrafo 3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.

II. Alcance y Aplicación de las Reglas.

Párrafo 11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las definiciones siguientes: a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley; b) Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

L. Procedimientos disciplinarios

66. Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignidad inherente del menor y con el objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimiento de justicia y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona.

67. Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo será considerado siempre un instrumento de educación y un medio de promover el respeto del menor por sí mismo, como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de una vez por la misma infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las sanciones colectivas.

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 24 (2019) CRC/C/GC/24. Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil.



IV. Elementos fundamentales de una política integral de justicia juvenil

A. Prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal.

B. Intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales. Intervenciones en el contexto de procedimientos judiciales.

C. La edad y los sistemas de justicia juvenil. Edad mínima de responsabilidad penal. Sistemas con excepciones a la edad mínima. Sistemas con dos edades mínimas. Niños que no tienen responsabilidad penal por motivos relacionadas con retrasos en el desarrollo o con trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico. Aplicación del sistema de justicia juvenil. Certificados de nacimiento y determinación de la edad. Continuación de las medidas de justicia juvenil. Delitos cometidos antes y después de cumplir 18 años y delitos cometidos con adultos

D. Garantías de un juicio imparcial. Justicia juvenil no retroactiva (art. 40, párr. 2 a)). Presunción de inocencia (art. 40, párr. 2 b) i)). Derecho a ser escuchado (art. 12). Participación efectiva en los procedimientos (art. 40, párr. 2 b) iv)). Información sin demora y directa de los cargos (art. 40, párr. 2 b) ii)). Asistencia jurídica u otra asistencia apropiada (art. 40, párr. 2 b) ii)). Decisiones sin demora y con la participación de los padres o los tutores (art. 40, párr. 2 b) iii)). Derecho a no ser obligado a declararse culpable (art. 40, párr. 2 b) iv)). Presencia e interrogatorio de testigos (art. 40, párr. 2 b) iv)). Derecho de recurso o apelación (art. 40, párr. 2 b) v)). Asistencia gratuita de un intérprete (art. 40, párr. 2 b) vi)). Pleno respeto de la vida privada (arts. 16 y 40, párr. 2 b) vii)).

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Regla 36 al 39; Regla 61). Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/65/229 del 21 de diciembre de 2010.

Regla 36. Las autoridades penitenciarias adoptarán medidas para satisfacer las necesidades de protección de las reclusas menores de edad.

Regla 37. Las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso a la educación y la formación profesional que los reclusos menores de edad.

Regla 38. Las reclusas menores de edad tendrán acceso a programas y servicios correspondientes a su edad y su género, como los de orientación sobre los problemas de abuso o violencia sexual. Recibirán educación sobre la atención de salud para la mujer y tendrán el mismo acceso permanente a servicios de ginecología que las reclusas adultas.

Regla 39. Las reclusas menores de edad embarazadas recibirán apoyo y atención médica equivalente a la que se presta a las reclusas adultas. Su estado de salud estará sujeto a la vigilancia de un especialista médico, teniendo en cuenta que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo.

Regla 61. Esta regla toma en consideración el historial típico de muchas mujeres infractoras. Una gran proporción de las mujeres que cometen delitos violentos, los comenten contra sus esposos o compañeros en respuesta a un abuso sistemático. A nivel mundial, un gran número de mujeres infractoras son encarceladas por delitos menores relacionados con drogas, a menudo como



resultado de manipulación, coerción y pobreza. Si están involucradas en tráfico de drogas, las mujeres son rara vez juegan un papel principal. Sus ofensas criminales son a menudo una consecuencia de su propia adicción o debido a la pobreza y otras presiones. Un número significativo de mujeres son utilizadas como mulas para transportar drogas a través de las fronteras por pequeñas sumas de dinero. Proceden de los países pobres y, a veces, no entienden los riesgos y consecuencias de los actos que acuerdan llevar a cabo.

Directrices sobre la Administración de Justicia de Menores (Directrices de Viena), (Párrafo 15; párrafo 21; párrafo 36). Celebrada en Viena del 23 al 25 de febrero de 1997.

Párrafo 15. Hay que proceder a un examen de los procedimientos existentes y, cuando sea posible, preparar iniciativas para no recurrir a los sistemas de justicia penal en el caso de jóvenes acusados de delitos. Deben tomarse las medidas oportunas para ofrecer por conducto del Estado una amplia serie de medidas sustitutivas en las fases previas a la detención, prejudiciales, judiciales y postjudiciales, para prevenir su reincidencia y promover su rehabilitación social.

Párrafo 21. Debe crearse un órgano independiente que, de ser necesario, verifique las condiciones en los establecimientos de detención y presente informes periódicos. La verificación debe realizarse en el marco de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de justicia de menores, en particular las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Párrafo 36. Debe hacerse hincapié en formular planes amplios de prevención, tal y como lo exigen las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Los proyectos deben centrarse en estrategias encaminadas a socializar e integrar a todos los niños y jóvenes, en particular a través de la familia, la comunidad, los grupos de pares, las escuelas, la formación profesional y el mundo del trabajo.

III. DIAGNÓSTICO

3.1. Enunciado del problema público

"Persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal".

Determinada población adolescente habita en contextos de socialización violenta y en delincuencia ocasionando que, siendo una de las etapas del desarrollo humano más sensibles y vulnerables para su bienestar futuro, haya una presencia constante de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de involucrarse en infracciones a la ley penal; de igual modo, cuando un/una adolescente ingresa a un proceso dentro del sistema de justicia penal juvenil se enfrenta con insuficientes espacios para su resocialización o integración a la vida familiar, educativa y social.



3.2. Conceptos clave

- Contexto criminógeno: Está relacionada con la exposición continua a entornos de riesgo delictivo los cuales no son inherentes al individuo, sino que forman parte de su ambiente físico y social en el cual se desarrolla y son la fuente principal de su proceso de socialización a lo largo de su vida (Berniell, 2014; Wikström, 2009).
- Factores de riesgo criminógeno: Es un correlato que precede al comportamiento antisocial y predice aumento u ocurrencia de comportamiento antisocial a través de un efecto directo o principal (Morizot y Kazemian, 2015).
- Factores protectores: Es un factor que actúa como moderador que disminuye la magnitud de un predictivo relacionado a un factor de riesgo y el comportamiento antisocial (Morizot y Kazemian, 2015).
- Adolescentes: Todo ser humano de entre 12 y hasta cumplir los 18 años (Código de los Niños y Adolescentes - Ley N° 27337).
- Comunidad: Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines (Montero, 1998).
- Familia: La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Minuchin, 1986).
- Competencias parentales: Relacionada con la capacidad de adaptación que tienen los padres a las diversas circunstancias y crisis, formando un nivel de parentalidad, asimismo, es multidimensional en la medida que involucra el ejercicio de habilidades educativas, sociocognitivas, autocontrol, manejo del estrés y de relación social (Azar y Weinzierl, 2005).
- Pares sociales: Grupo de dos o más personas con un estatus similar, que interactúan y comparten normas y metas (Craig y Baucum, 2009).
- Socialización: Es el proceso general por el cual el individuo se convierte en miembro de un grupo social: una familia, una comunidad, una tribu. Abarca el aprendizaje de actitudes y creencias, costumbres y valores, expectativas y roles del grupo social (Craig y Baucum, 2009).
- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal: Adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales (Decreto Legislativo N°1348)
- Trayectoria delictiva: evolución o curso de los comportamientos delictivos y antisociales a lo largo de un periodo de tiempo desde su inicio temprano o tardío hasta su finalización o desistimiento (Farrington y Ttofi, 2015).



- Justicia Penal Juvenil: remite a las normas, los procedimientos y las instituciones destinadas a la atención de los niños sospechosos, acusados o convictos de infracción a la ley penal (Terre des hommes, 2014).
- Prevención social: entendida como la intervención a los factores tempranos que impidan la configuración de personas involucradas en el delito (Dammert y Lunecke, 2004).
- Gestión del riesgo: Es el enfoque de predicción del riesgo, basada en la evidencia actual sobre los factores de riesgo y protección, que consiste en determinar una metodología de pasos de intervención posterior a la evaluación que permite reducir o minimizar los riesgos evitando la futura ocurrencia de violencia (Loinaz, 2017).
- Justicia Juvenil Restaurativa: Designa el tratamiento cuyo objetivo es la reparación del daño ocasionado al individuo, al vínculo social y a la sociedad. Este objetivo supone la participación activa y conjunta del niño autor, de la víctima y de otros individuos miembros de la comunidad, a fin de resolver los problemas que dimanen del conflicto (Terre des hommes, 2014).
- Violencia: Acción contraria a las normas y a las reglas sociales. Se subraya el carácter coactivo, ya que el ejercicio de la violencia implica obligar al otro, por medio de la fuerza física, psíquica o moral, a hacer algo en contra de su voluntad, y puede ser dirigida contra personas, animales, naturaleza o cosas. (Murqueta y Orozco, 2015).
- Riesgo de violencia: Condición que actúa como moderador que aumenta la magnitud de una relación predictiva entre un factor de riesgo y el comportamiento antisocial (Morizot y Kazemian, 2015).

3.3. Modelo del problema público

El involucramiento en conductas infractoras a la ley por parte de los y las adolescentes se origina y consolida por la presencia de múltiples factores de riesgo criminógenos social, individual y familiar los cuales acompañan al adolescente desde su niñez favoreciendo la construcción de un trayecto de vida vinculado al crimen principalmente a las infracciones a la ley penal vinculadas a los delitos patrimoniales, tráfico ilícito de drogas, violencia sexual, homicidio y otros delitos violentos; asimismo, los factores varían de forma significativa para los casos de violencia sexual priorizándose los riesgos a nivel de la formación psicosexual toda vez que esta población adolescente no necesariamente presenta condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, encontrándose este problema en el marco de la política criminal peruana para fortalecer la justicia juvenil a nivel de la prevención y reinserción social.

Cabe resaltar que, todas estas condiciones de riesgo a nivel de la delincuencia se desarrollan en un espacio urbano en condiciones de desigualdad social y económica, provocando el incremento de la violencia y delincuencia general en todas las regiones del Perú, particularmente en los núcleos urbanos. A nivel nacional, múltiples factores de riesgo criminógeno se agrupan reproduciendo



escenarios o contextos criminógenos los cuales conllevan a que un número importante de adolescentes realicen conductas antisociales y violentas. Al mismo tiempo, ello conlleva a que en algunos casos ingresen al sistema de justicia penal juvenil el cual presenta diversas limitaciones para garantizar los derechos fundamentales; asimismo, estas personas vulnerables pueden llegar a los servicios de los Centros Juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, los cuales no tienen las condiciones suficientes para garantizar la reinserción social efectiva o menguar las condiciones de riesgo criminógeno, entre diversas razones por la falta de cobertura nacional de dichas estrategias y mejora en la efectividad de su intervención. En consecuencia, un número importante de adolescentes transitan por los contextos en riesgo delictivo de desarrollo social primario y secundario, sistema de justicia penal juvenil, y centros juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa manteniendo, en diversos casos, una trayectoria orientada a continuar con actividades criminales durante su juventud y adultez en las diversas modalidades de conducta delictiva o infracción a la ley penal: delincuencia común, y violencia sexual.

Bajo este marco de comprensión del problema público, y tal como se describe en la Figura 1, la estructuración de dicho problema público obedece a la interacción entre tres causas directas: Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes, deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil y limitada intervención para la reinserción social.

Por tanto, el problema general posee tres dimensiones: 1) Los sistemas de socialización más importantes del sujeto no cumplen su función generando factores de riesgo criminógeno y no promoviendo factores protectores; 2) El sistema de justicia penal juvenil tiene un carácter sancionador y no orientado hacia la resocialización vulnerando derechos fundamentales; y 3) Los servicios de reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal poseen diversas limitaciones a nivel de las estrategias y recursos humanos-materiales conllevando a la debilidad en la efectividad de sus intervenciones en los centros juveniles, así como en la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa.

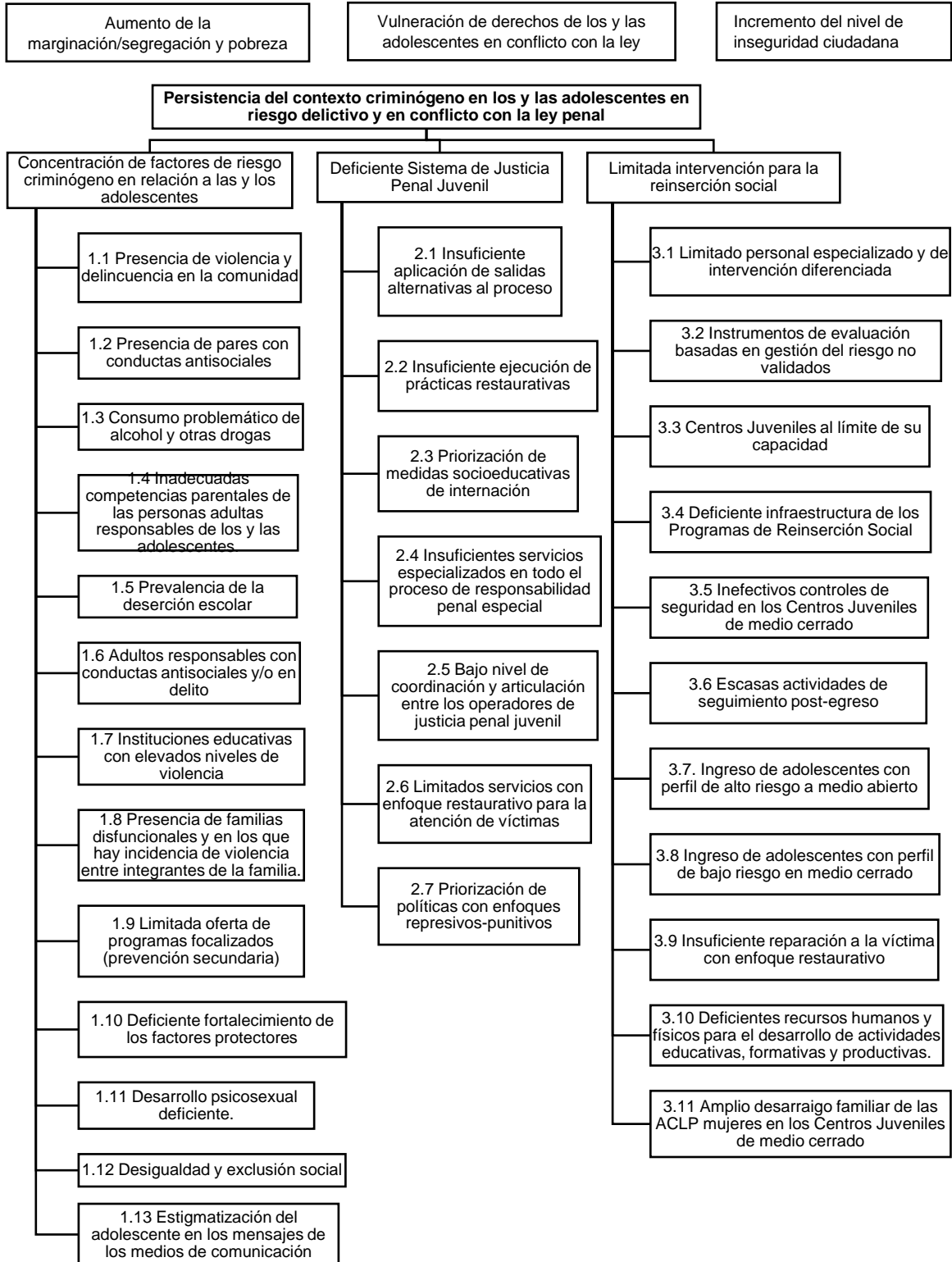


Figura 1. Árbol de problemas del problema público. Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC



3.4. Enfoques transversales

- **Género:** Herramienta de análisis que permita identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Al observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia de género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación sexual e identidad de género, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad.
- **Interseccional:** Plantea que las desigualdades y la discriminación que enfrentan las personas son complejas, múltiples, simultáneas y que afectan a todas las personas de manera heterogénea. Existen grupos que experimentan discriminaciones particulares (por razón de sexo, género, origen, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole) y quienes pueden estar más expuestas al menoscabo de sus derechos con base a la concurrencia de más de un factor de discriminación. La heterogeneidad al interior de la población responde a que cada persona expresa una combinación de identidades que, en muchos casos, da como resultado una experiencia única de subordinación y exclusión.
- **De curso de vida:** Implica que cada etapa del ciclo de vida está relacionada con el siguiente e identifica factores claves o críticos que trascienden una etapa particular influyendo en el desarrollo integral a futuro del niño, niña y adolescente.
- **Derechos Humanos:** Los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer responsables a los diversos sectores del Estado.
- **Inclusivo:** Pretende que se dispongan y transformen la organización, recursos, diseño curricular y otros contextos para poder aceptar, acoger y educar a toda a la población, con todas sus diferencias. Un enfoque inclusivo moviliza a todo el sistema y a toda la escuela.
- **Intercultural:** Establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso de adaptación de las diferentes instituciones, a nivel normativo,



administrativo y del servicio civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos étnico-culturales del país.

- **Restaurativo:** Durante el proceso, se debe promover la participación de la víctima para lograr su reparación adecuada, así como la aceptación de responsabilidad del adolescente por el daño causado, como forma para superar los efectos negativos de la infracción y prevenir la comisión de otras futuras.
- **Perspectiva de discapacidad:** Esta perspectiva evalúa las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones.
- **Desarrollo positivo adolescente:** Busca asegurar un proceso continuo en el cual los y las adolescentes puedan desarrollar las habilidades que les permitan crecer y enfrentar los desafíos que se les presentan en la vida. Desarrollar sus capacidades y habilidades y disponer de oportunidades para participar y expresar sus opiniones.
- **Enfoque preventivo para la reinserción social:** Es crucial prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y mediante otros mecanismos preventivos.
- **Justicia Terapéutica:** Este enfoque prioriza la implementación de alternativas menos perjudiciales para las personas involucradas en los procesos judiciales, asimismo, se fortalece por diversas ciencias humanas proponiendo medidas terapéuticas que aporten en el bienestar y atacando las causas del problema, de modo que, este enfoque se ha concretado en el ámbito del derecho de familia, drogas y la justicia penal juvenil.
- **Enfoque preventivo social del delito:** Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños, niñas y jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización.
- **Enfoque colectivo de la prevención del delito:** Implica crear, mantener y promover un contexto en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la función que les corresponde en la prevención del delito.

3.5. Situación actual

3.5.1. Causas

Causa 1: Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes

En el Perú, el último Censo Nacional Poblacional, de Vivienda y Comunidades Indígenas (INEI, 2017) registra que los y las adolescentes representan el 10% (3,018,836) de la población total, además, la proporción de adolescentes mujeres equivale al 49,4% y en caso de los varones un 51,6% (Figura 2), siendo de dimensiones similares.

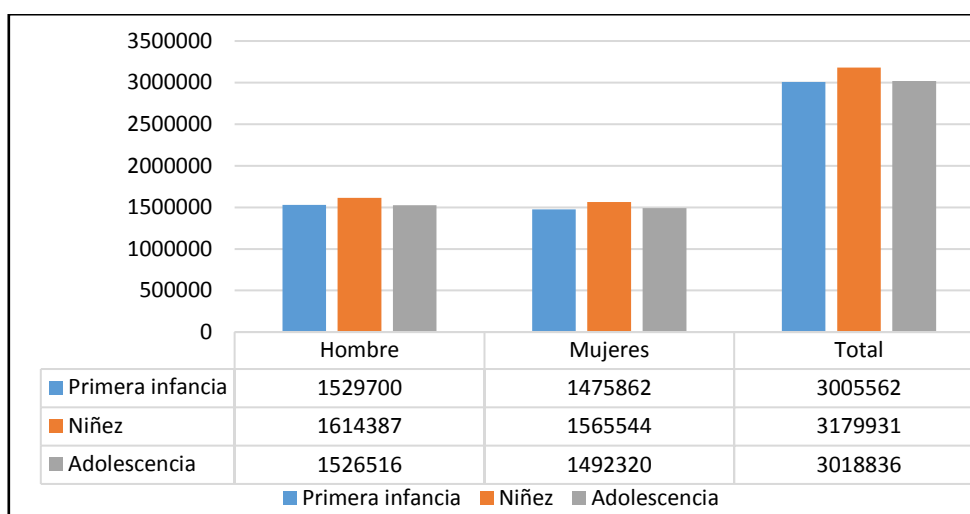


Figura 2. Población adolescente (12 a menos de 18 años) por sexo a nivel nacional al 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI

Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC

No obstante, conforme al mencionado Censo, la distribución a nivel nacional es heterogénea, de este modo, solamente 5 de los 25 departamentos (Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco) abarcan el 51% de todos los y las adolescentes, asimismo, los departamentos con mayores tasas de adolescentes por cada 100,000 habitantes son Huancavelica, Loreto, Huánuco, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Ucayali y San Martín.

El Código de los Niños y Adolescentes² considera adolescente a todo ser humano de entre 12 y hasta cumplir los 18 años de edad, adoptando una visión del ciclo de vida el que divide el desarrollo humano en etapas con funciones diferenciadas. De este modo, se considera que la adolescencia está caracterizada por atravesar un proceso de reestructuración de las relaciones familiares, con los pares sociales y la comunidad (Krauskopf, 2011), y donde se deben conseguir objetivos educativos, familiares y personales. Sin embargo, en el caso del Perú, así como en diversos países a nivel mundial, un conjunto importante de adolescentes trabaja, no se desarrollan en su grupo familiar, tienen hijos, y/o son responsables de familiares, realizando actividades correspondientes a otras etapas de desarrollo UNICEF (2011) afectando sus proyectos de vida.

² Ley N° 27337 que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.



Esta frecuente situación perjudicial para el desarrollo psicosocial de los y las adolescentes en el Perú se enmarca en un contexto social con elevados niveles de violencia y criminalidad expresado en la alta percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía (Carión, Zárate y Zechmeister, 2015), lo cual favorece que la inseguridad ciudadana se establezca como uno de los problemas más importantes del país en los últimos años (INEI, 2018).

Por otro lado, respecto a los antecedentes, las principales acciones desde el Estado que se llevaron a cabo para poder intervenir sobre factores de riesgo criminógeno y protección de delincuencia fueron las intervenciones y programas del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público, no obstante, aún la cobertura y el impacto de dichas acciones son limitadas ya que ninguna se desarrolla en todas las regiones a nivel nacional. El Programa de prevención estratégica del delito ha obtenido resultados importantes a nivel preventivo en la disminución del porcentaje de adolescentes en condiciones altas o moderadas de riesgo criminógeno que fueron atendidos por la línea de acción Jóvenes Líderes y Padres Construyendo Hijos de Éxito (Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2019). No obstante, la capacidad de intervención directa en los factores de riesgo y la cobertura de dichos programas aún se muestra como un reto para continuar su impacto a nivel nacional.

En este sentido, respecto al PNAPTA, se han logrado desarrollar diversas acciones multisectoriales entre los años 2013 y 2018, sin embargo, aún queda pendiente la mejora del diseño de estrategias que articulen con mayor efectividad con la comunidad, instituciones públicas y organismos privados, expresado en la leve asociación o alineamiento con los objetivos estratégicos de las entidades involucradas en la prevención. Por ende, es necesario diseñar indicadores con mayor nivel de verificabilidad para mejorar el seguimiento y evaluación. Ante ello, es necesario garantizar la articulación y compromisos de los actores a nivel regional y central, la aplicación de programas de prevención con mayor evidencia criminológica y plantear nuevos diseños para los indicadores de evaluación.

Por lo tanto, las condiciones desfavorables para el desarrollo de los y las adolescentes, en el Perú, están influenciadas por un entorno de elevada violencia caracterizada prioritariamente por la presencia de diversos factores de riesgo criminógenos en los primordiales contextos de desarrollo social (familia, institución educativa y comunidad), los cuales están en interacción con las particularidades de la etapa evolutiva adolescente. Ante el mantenimiento o incremento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes hasta la actualidad, implica que la intervención social realizada por el Estado peruano en los contextos de desarrollo de riesgo no ha provocado una disminución significativa de los factores de riesgo criminógeno a lo largo de la vida del sujeto, contribuyendo en el incremento de la conducta violenta y antisocial.

Por otro lado, con relación a la etapa adolescente, los múltiples cambios y reestructuraciones en las relaciones con su entorno configuran una etapa muy sensible para la aparición de comportamientos transgresores o antisociales con las principales reglas sociales; asimismo, la formación de una identidad social



y conciencia del rol social posibilita el acercamiento a colectivos antisociales de edades similares o mayores; las dificultades en el desarrollo de la sexualidad conllevan a realizar acciones que vulneren la integridad de otra persona. En este sentido, la evidencia indica que frecuentemente los núcleos de socialización más importantes para la persona tales como la comunidad, familia, escuela y pares sociales no cumplen su rol, generando espacios para la aparición de violencia y comportamientos disruptivos (Redondo, Martínez y Andrés, 2011).

En este sentido, respecto a la delincuencia común las investigaciones en criminología del desarrollo identifican que los y las adolescentes que atraviesan por un proceso de socialización en contextos de riesgo criminógeno son influenciados por factores de riesgo criminógeno a nivel individual (impulsividad, actitudes violentas, bajo compromiso escolar y consumo de drogas), familiar (competencias parentales, maltrato infantil, padres antisociales y exposición a la violencia) y social (rechazo de amigos, deserción y fracaso escolar, grupo de pares antisociales, y violencia y delincuencia comunitaria) (Andrews y Bonta, 2010; Wasserman et. al., 2003); los cuales intervienen en la incorporación del adolescente a una trayectoria delictiva, la cual es definida como la presencia de conductas antisociales-delictivas durante periodos de tiempo que atraviesan diversas etapas de desarrollo debido a la exposición a diversos factores de riesgo específicos (Farrington y Ttofi, 2015).

Cabe resaltar que, si bien esta multiplicidad de factores incrementa la probabilidad de que los y las adolescentes se involucren en infracciones a la ley penal, los y las adolescentes en condiciones de riesgo criminógeno no constituyen un grupo homogéneo. Por tanto, se debe realizar una primera importante diferenciación: 1) aquellos que tempranamente presentan diversas conductas antisociales y violentas, con una proyección a mantenerlas hasta la juventud y adultez, denominada trayectoria persistente, y 2) quienes muestran conductas punibles y menos violentas desde la adolescencia con un pronóstico de no continuar con estas conductas más allá de la etapa adolescente, categorizada como trayectoria limitada a la adolescencia, siendo este grupo aproximadamente el 90% del total de los casos (Moffitt, 2018; Morales, 2014; Oliveros, Kawashita y Barrientos, 2018; Nina y Loayza, 2017; Pérez-Luco, Lagos, y Baes, 2012; y Rey, Mogui, Zulma y Paitán, 2015).

De este modo, se ha evidenciado que los y las adolescentes pertenecientes a una trayectoria persistente son influenciados por una gran multiplicidad de factores de riesgo criminógeno tanto en la niñez como en la adolescencia lo cual genera un perfil de mayor riesgo, asimismo, aquella/os adolescentes que forman una trayectoria limitada a la adolescencia o de perfil de bajo riesgo están afectados con un menor número de factores de riesgo particularmente durante la adolescencia, principalmente el de pares sociales antisociales (Moffitt, 2018; Morales, 2014).

La mayoría de los y las adolescentes en riesgo criminógeno presentan un perfil de riesgo leve, es decir, sus conductas punibles están asociadas a un conjunto limitado de factores de riesgo criminógenos de los cuales resalta la capacidad que tiene el grupo de pares en contextos de socialización cercana, como la comunidad, la familia o la institución educativa, para promover actividades antisociales o violentas, siendo muy factible que las acciones de prevención y reinserción social sean muy efectivas. Por otro lado, el número de adolescentes



con perfil de riesgo alto es mucho menor, no obstante, su intervención es más importante ya que permite disminuir los niveles de delincuencia adulta o juvenil debido a su alta probabilidad de continuar con su trayectoria delictiva durante muchos años e incluso formar parte de organizaciones criminales, requiriendo una intervención más intensa y múltiple.

Cabe señalar que, dentro de la delincuencia común, el inicio de la adolescencia (12 a 14 años) constituye un periodo fundamental para la conformación de trayectorias delictivas (Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, 2018 e INDAGA, 2020b). Por lo tanto, los diversos factores de riesgo criminógeno actúan con una intensidad más alta durante la adolescencia temprana, constituyéndose como un periodo importante de acercamiento a condiciones criminógenas por parte de los y las adolescentes. Al consolidarse las trayectorias delictivas durante la adolescencia, ello permite que los y las adolescentes se involucren en infracciones a la ley penal, involucrándose en un nuevo contexto: el sistema de justicia penal juvenil.

Por otro lado, en relación con el género las investigaciones sobre las trayectorias delictivas sugieren que muchos de los factores de riesgo predictores del comportamiento antisocial de los varones se relacionan o son semejantes al de las mujeres (Gorman-Smith, 2004; Bartolomé, Montañés, Rechea, Montañés, 2009; Weerman y Hoeve, 2012). En este sentido, la información registrada en el Censo nacional de población en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (INEI, 2016) indica que en diversas características de riesgo las mujeres presentan un porcentaje similar, respecto a la educación (primaria completa 18% para varones y 15 % para mujeres), pares antisociales (no se relacionaron 67% en varones y 84% para mujeres), consumo de drogas (consumieron 59% en varones y 58% para mujeres), maltrato infantil (siempre y a veces le pegaban 37% en varones y 30% para mujeres), familiares que estuvieron en delito (39% en varones y 31% para mujeres), amigos en conflicto con la ley penal (59% en varones y 53% para mujeres), pertenencia a banda criminal (18% en varones y 16% para mujeres), sanción penal previa (no ha tenido 82% en varones y 93% para mujeres). En efecto, los factores de riesgo criminógenos se presentan en forma similar dentro de la socialización de tipos de género derivando en un número de conducta infractora no necesariamente similares, pues tal como se evidencia solo 6% de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal que cumplen una medida socioeducativa para el 2022 son mujeres (PRONACEJ, 2022). Consecuentemente, el género no impide que las personas desarrollen conductas altamente violentas o de riesgo bajo, a pesar de que la frecuencia de casos sea evidentemente desigual.

Por otro lado, respecto a la diferenciación por tipo de infracción, la violencia sexual presenta ciertas particularidades que la distinguen de la delincuencia común debido a que los factores de riesgo criminógenos suelen diferir ampliamente (Ruiz-Hernández, García-Jiménez, Llor-Estebana, y Godoy-Fernández, 2015). De este modo, a partir de los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal que ingresan por infracciones sexuales a los centros juveniles de medio cerrado se registra que el 91% tiene secundaria completa e incompleta, 23% una o más personas del entorno familiar en prisión, 11% manifiesta violencia física constante en la familia antes de los 12 años, 89% se consideraba un buen o regular estudiante, y 55% no consumía sustancias antes de ingresar (INDAGA, 2019a).



Por tanto, las características que definen al agresor sexual están asociadas a un perfil de diversas dificultades de carácter psicosexual y de habilidades sociales (Heffernan y Ward, 2015) lo cual implica influencia de factores de riesgo criminógenos diferentes a las del adolescente que se involucra en formas de infracciones comunes como el robo, venta-consumo de drogas, homicidio, entre otros. Ello implica que, tanto al final de la niñez y al inicio de la adolescencia han padecido experiencias de violencia y abandono familiar, victimización sexual, acercamiento o educación sexual temprana no guiada, débiles capacidades de comunicación y habilidades de relación interpersonal contribuyendo en la vulnerabilidad para adquirir conductas sexuales desviadas o antisociales (Martínez-Catena y Redondo, 2016).

En este sentido, INDAGA (2019a) identifica que, respecto a los jóvenes internos por agresión sexual en centros juveniles de medio cerrado, el 81% ha tenido experiencia sexual previa, la edad promedio de inicio de la vida sexual es de 13,5 años, el número de parejas promedio es de 6,35% ha tenido sexo con prostitutas, 45% consumía frecuentemente pornografía, habiendo iniciado a la edad promedio de 13 años, y respecto a las cogniciones sobre la sexualidad (40,5% considera que "Los hombres siempre buscan tener sexo, pero la mujer no debería hacer lo mismo", 52,9% que "Es mejor que el hombre se dedique a trabajar y que la mujer se quede en la casa", 65,2% que "La mujer que usa ropa apretada o minifaldas es fácil o quiere provocar a los hombres", 39,8% que "Hay mujeres que provocan que las violen, por cómo se comportan o por la ropa que usan", 31,5% que "No existe violación si la mujer antes ya ha tenido sexo con varios hombres", 59,6% que "A veces una mujer acusa a un hombre de violación, pero ella lo ha provocado" y 42,3% que "Una mujer no tiene la culpa de que un hombre la viole").

De igual modo, continuando con la exploración de los factores de riesgo en casos de agresión sexual, se exploraron los antecedentes de 37 internos sentenciados por feminicidio del establecimiento penitenciario Castro Castro, donde se registró lo siguiente: el 90% tiene nivel secundario o superior, 59% de los feminicidios se dieron durante las fases de conflicto, inestabilidad, alejamiento y separación, es decir, en una fase de ruptura de la relación, y 97% de los encuestados, previo a la comisión de feminicidio, no tuvo antecedentes en Centros Juveniles o Establecimientos Penitenciarios (INDAGA, 2019b).

En efecto, la construcción de las trayectorias delictivas tiene diversos factores de riesgo criminógeno y de protección que los subyacen. Una aproximación más concreta del problema público conlleva a desarrollar, inicialmente, los principales factores criminógenos involucrados en la construcción de las trayectorias delictivas. A continuación, se describen diversas subcausas³.

1.1. Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad

Respecto a los factores de riesgo criminógenos que se encuentran a nivel social-comunitario, a partir del Censo Nacional a los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (INEI, 2016) se ha obtenido

³ Es importante precisar que, la fuente de información más completa sobre los antecedentes y perfil de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal es el Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, no obstante, el último año en que se realizó dicho Censo fue el 2016.



que el 52,9% de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal vivía en un barrio con presencia de pandillas.

Asimismo, durante los últimos años se ha mantenido un porcentaje importante de población de áreas urbanas que es víctima de actividades delictivas en sus comunidades a nivel nacional, de modo que, entre el 2017 y 2020 se ha mantenido que el 29% aproximadamente ha sido víctima en ciudades de más de 20 mil habitantes (INEI, 2020). Ello implica una persistencia de fenómenos como violencia y delincuencia en las ciudades a nivel nacional.

1.2. Presencia de pares con conductas antisociales

A partir del Censo Nacional a los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (INEI, 2016a) se ha obtenido que el 59% tiene mejores amigos que cometen infracciones. De igual modo, alrededor del 35% de la población penitenciaria tenía mejores amigos en delincuencia antes de sus 18 años (INEI, 2016b).

1.3. Consumo problemático de alcohol y otras drogas

Se ha determinado que la prevalencia anual de consumo de marihuana en la población escolar de nivel secundario es de 2,6% a nivel nacional, manifestándose un índice significativo, todo lo cual, configura un factor de riesgo; asimismo, el consumo de pasta básica de cocaína tiene un inicio cada vez más temprano llegando hasta los 13 años, asimismo, el alcohol y diversos fármacos son las principales, no obstante las drogas médicas (tranquilizantes) son las más consumidas por debajo del alcohol y el tabaco (DEVIDA, 2017). En este sentido, en la siguiente Tabla N°1 se presenta la prevalencia del consumo de drogas ilegales en adolescentes a nivel de las regiones para el 2017.

Tabla N°1: Prevalencia anual del consumo de drogas legales, según dominios regionales.

Regiones	Porcentajes
Lima Provincias	31.7
Moquegua	28.7
Callao	24.4
Tumbes	22.7
Arequipa	22.5
San Martín	22.1
Lima Metropolitana	22
Ica	21.1
Ancash	20.4
La Libertad	20.3
Cajamarca	19.9
Loreto	19.6
Cusco	19.1
Piura	18.9
Ucayali	18.8
Madre de Dios	18.6
Lambayeque	17.2
Tacna	16.1
Junín	15.1



Amazonas	13.7
Huánuco	12.7
Ayacucho	11.6
Pasco	8.9
Apurímac	8.8
Huancavelica	8.6
Puno	7.1

Fuente: Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria DEVIDA (2017)

Además, se registró que la edad promedio de consumo tiende a los 15 años (CEDRO, 2018). Por último, se ha identificado el 55,3% ha consumido algún tipo de droga (INEI, 2016). Por otro lado, el estudio de INDAGA (2020b) sobre las condiciones de riesgo de escolares de educación secundaria de la región Callao evidencia la asociación significativa entre las conductas antisociales asociadas a las infracciones y el consumo de diversas drogas ilegales.

1.4. Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes.

Para el 2018 existen 17,221 niños y adolescentes con diversas condiciones de riesgo de desprotección familiar han ingresado a las Unidades de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (UPE- MIMP, 2018). Asimismo, en relación con el factor de riesgo maltrato infantil, se ha identificado que para el 2019 el 78% de los y las adolescentes a nivel nacional alguna vez han sido víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que vive (ENARES, 2019).

Se ha registrado que el 46,2% de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal (ACLP) dentro de los Centros Juveniles fue agredido físicamente por sus cuidadores entre los 5 a 12 años (INEI, 2016). Por último, si bien el incremento de la denunciabilidad tiene múltiples causas es un indicador a considerar en los índices de criminalidad, ante ello, la Policía Nacional del Perú registró que el número de denuncias por violencia contra los integrantes del grupo familiar ejercidas hacia los y las adolescentes entre 11 a 17 años se ha incrementado (de 6,083 casos a 9,030 entre el 2013 y 2018). En la Tabla N°2 se puede identificar el porcentaje de adolescentes que padecen violencia en su familia a nivel nacional.

Tabla N°2: Violencia dirigida a los y las adolescentes

Nacional	Violencia en el hogar
Alguna vez en su vida	63.2%
En los último 12 meses	34.9%

Fuente: ENARES, 2019

Elaboración: Dirección de Política Criminal (2020)

Por lo tanto, estos datos conllevan a considerar que un porcentaje considerable de familias en el Perú presenta diversas deficiencias en sus competencias parentales. Por tanto, siendo los padres o cuidadores



responsables del desarrollo psicosocial de los y las adolescentes, la presencia de dificultades en la protección para asegurar entornos no violentos o en la inadecuada disciplina y supervisión parental constituyen factores criminógenos que debilita los vínculos familiares contribuyendo con el incremento de la probabilidad para que los y las adolescentes accedan a otros contextos de socialización en violencia o delincuencia.

1.5. Prevalencia de la deserción escolar

El estudio de INDAGA (2020b) sobre las condiciones de riesgo de escolares de educación secundaria de la región Callao evidencia la asociación significativa entre las conductas antisociales asociadas a las infracciones y el desarraigo escolar, así como, las variables de fracaso escolar y la falta de motivación o interés a la vida en la institución educativa.

De igual modo, la deserción escolar en la población adolescente ha experimentado una leve disminución del 4,35% al 2,70% entre el 2015 y 2020, no obstante, aún representa un indicador importante a considerar (MINEDU, 2021). En este sentido, se ha identificado que el 60,8% de adolescentes con medidas socioeducativas de los Centros Juveniles tienen un nivel educativo de secundaria incompleta (INEI, 2016). En la siguiente Tabla N°3, se observan los niveles de deserción escolar secundaria por región entre el 2015 y el 2020.

Tabla N°3: Tasa de deserción interanual del nivel secundario por región

Región	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amazonas	6.10%	5.94%	6.20%	5.61%	6.08%	3.68%
Ancash	4.87%	4.10%	4.35%	4.15%	3.66%	2.70%
Apurímac	3.45%	3.33%	3.09%	2.92%	2.23%	1.72%
Arequipa	2.35%	2.04%	1.89%	1.78%	1.64%	1.13%
Ayacucho	5.27%	4.82%	4.63%	4.33%	3.61%	2.72%
Cajamarca	5.17%	4.95%	4.54%	4.71%	4.27%	2.72%
Callao	4.19%	3.96%	3.91%	4.14%	3.70%	2.80%
Cusco	3.77%	3.35%	3.29%	3.31%	2.73%	1.83%
Huancavelica	5.17%	4.06%	3.93%	3.30%	3.10%	2.63%
Huánuco	6.27%	5.36%	5.48%	6.22%	4.93%	3.27%
Ica	4.05%	3.71%	4.05%	3.52%	3.37%	2.54%
Junín	4.33%	3.76%	4.03%	3.79%	3.51%	2.76%
La Libertad	5.04%	4.86%	4.54%	5.00%	4.24%	3.70%
Lambayeque	4.21%	3.86%	4.02%	3.99%	3.52%	2.64%
Lima Metropolitana	3.43%	3.53%	3.51%	3.26%	3.05%	2.60%
Lima Provincias	4.08%	4.20%	4.16%	3.83%	3.48%	2.62%
Loreto	7.90%	8.28%	7.76%	7.89%	6.74%	4.75%
Madre de Dios	5.26%	5.06%	5.26%	5.17%	4.39%	3.06%
Moquegua	2.53%	2.64%	2.52%	1.79%	1.78%	1.12%
Pasco	4.40%	3.94%	3.59%	3.61%	3.17%	2.49%
Piura	4.56%	3.74%	3.99%	4.11%	3.61%	2.74%
Puno	3.40%	2.74%	2.58%	2.25%	2.03%	1.47%
San Martín	6.08%	5.68%	5.88%	5.33%	4.93%	2.91%
Tacna	2.60%	1.91%	1.87%	1.90%	1.61%	0.74%



Tumbes	4.85%	3.99%	3.91%	3.68%	3.50%	3.58%
Ucayali	9.27%	8.22%	7.84%	7.89%	7.15%	5.46%

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 2021

Cabe resaltar que, a nivel nacional al 2019, las principales razones por las cuales los estudiantes dejan de estudiar son los problemas económicos (42.7%), problemas familiares (13.6%), se dedica a quehaceres del hogar (15%), y no quiso estudiar (21.3%), según la última Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2019).

1.6. Adultos responsables con conductas antisociales y/o en delito

Además, se ha patentado que el 39,5% de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal dentro de los Centros Juveniles ha tenido un familiar en un Establecimiento Penitenciario, los cuales principalmente son tíos, primos, padres o hermanos (INEI, 2016).

Por último, un estudio de INDAGA (2020b) sobre las condiciones de riesgo de escolares de educación secundaria de la región Callao evidencia la asociación significativa entre las conductas antisociales asociadas a las infracciones y el exceso de consumo de alcohol y drogas por parte de los padres.

1.7. Instituciones educativas con elevados niveles de violencia

Por otro lado, para el 2018, se ha identificado que aproximadamente un 40% de los escolares a nivel nacional reconoce ser víctima de acoso escolar o violencia en su escuela, asimismo, el 45% ha observado violencia física entre compañeros (Young Voice Perú. Save the Children, 2018). Del mismo modo, para el 2019 la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar (MINEDU, 2019) identifica que el 47% de los estudiantes de secundaria ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica en la institución educativa, siendo la violencia psicológica la más frecuente.

A través de la plataforma SISEVE del Ministerio de Educación, entre el 2020 al 2021, se presentan 1,377 casos los cuales se registran a nivel de todas las regiones destacando la multiplicidad de casos relacionados con la violencia físicas, psicológica y sexual, tal como sigue en la siguiente Tabla N°4.

Tabla N°4: Reporte de tipos de violencia en instituciones educativas

Tipo	2020	2021
Psicológica	408	329
Sexual	260	244
Ciberacoso	97	115
Verbal	102	83
Trato humillante	108	70
Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos	85	64



Física	89	47
Violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos	55	71
Discriminación	63	36
Violación sexual	45	44
Hostigamiento sexual	41	37
Castigo físico	48	29
Acoso sexual a través de medios tecnológicos	32	28
Sin lesiones	20	10
Intimidación	14	16
Con lesiones	21	8
Acoso escolar	20	7
Aislamiento	4	2
Acoso sexual	2	0

Fuente: Casos reportados en el SÍSEVE 2020 – 2021

En relación con el análisis a nivel nacional, en la siguiente Tabla N°5 se puede observar los porcentajes de violencia en las instituciones educativas hacia los y las adolescentes.

Tabla N°5: Violencia dirigida a los y las adolescentes en el entorno escolar

Nacional	Violencia en la I.E.
Alguna vez en su vida	68.5%
En los último 12 meses	44.7%

Fuente: ENARES, 2019

Elaboración: Dirección de Política Criminal (2020)

- 1.8. Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia.

Diversas condiciones de riesgo criminógeno de escolares de educación secundaria de la región Callao evidencian la asociación significativa entre las conductas antisociales asociadas a las infracciones y ser una víctima constante de violencia física y psicológica por parte de los padres (INDAGA, 2020b).

Respecto a los factores de riesgo criminógenos que se encuentran a nivel familiar, se tiene que la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el periodo de enero a setiembre 2019, de los 133,123 casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer el 30,2% involucra a las niñas, los niños y adolescentes, revelando que este grupo etario representa un conjunto importante de población víctima de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; además, estando el 21.4% de los casos en riesgo severo; asimismo, los departamentos de Lima y Arequipa son aquellos que tienen más índices de casos por violencia (Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual. De enero a setiembre del 2019).



En la Tabla N°6, se puede identificar el porcentaje de casos de violencia contra los integrantes del grupo familiar por regiones.

Tabla N°6: Incidencia de casos de violencia familiar (2018)

Región	Porcentaje
Huancavelica	51.6
Apurímac	50.7
Cusco	49.3
Piura	45.7
Puno	45.6
Tumbes	44.5
Áncash	44.0
Huánuco	43.0
Pasco	42.5
Cajamarca	40.6
Prov. Const. del Callao	40.3
Arequipa	39.2
Junín	38.0
Madre de Dios	36.8
Ica	36.5
Lima	36.3
Moquegua	35.8
Loreto	34.7
Amazonas	34.2
San Martín	33.3
Ayacucho	32.6
Ucayali	32.4
La Libertad	32.2
Lambayeque	28.8
Tacna	18.4

Fuente: ENDES, 2018

Elaboración: Dirección de Política Criminal (2020)

1.9. Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria)

Siendo los programas y estrategias de prevención social y comunitaria las que intervienen los factores de riesgo y fortalecen los programas de prevención, a nivel nacional, solo se han desarrollado en los últimos años dos programas especializados en prevención social y/o comunitaria del crimen. Estas acciones se desarrollaron en el marco del Programa de Persecución Estratégica del Delito del Ministerio Público los cuales actúan a nivel nacional, no obstante, aún es necesario generar diversos programas ya que son muy escasos en relación con la amplia acción para el control situacional o centralmente punitivo del delito juvenil o crimen en general, todo lo cual impacta en el incremento del riesgo de infracción a la ley penal cuando aún no se han desarrollado suficientemente programas de prevención.



1.10. Deficiente fortalecimiento de los factores protectores

A nivel nacional, hay una presencia insuficiente de programas especializados para atender los factores protectores para disminuir el involucramiento en la delincuencia por parte de los y las adolescentes desde la intervención de factores como la resiliencia, competencias sociales, actitudes prosociales, entre otros.

En este sentido, únicamente se vienen promoviendo programas de desarrollo psicosocial desde DEVIDA, así como los Centros de Desarrollo Juvenil del MINSA, donde se fortalecen las habilidades sociales de los y las adolescentes, no obstante, son necesarias la ampliación en la cobertura y diversidad de estrategias de intervención.

1.11. Desarrollo psicosexual deficiente.

El desarrollo en la sexualidad presenta diversas dificultades durante el desarrollo adolescente, de este modo, en la siguiente Tabla N°7 se puede observar los porcentajes de violencia sexual hacia los y las adolescentes a nivel nacional.

Tabla N°7: Violencia sexual dirigida a los y las adolescentes

Nacional	Víctima de violencia sexual
Total	31.8%
Mujeres	57.98%
Hombres	42.1%

Fuente: ENARES, 2019

Elaboración: Dirección de Política Criminal (2020)

Del mismo modo, para el 2019 la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar (MINEDU, 2019) identifica que el 13% de los estudiantes de secundaria ha sufrido algún tipo de violencia sexual en la institución educativa, por encima de la violencia física (11%).

1.12. Desigualdad y exclusión social

Aquellos/as adolescentes que se encuentran en contextos de riesgo criminógeno no logran consolidar trayectorias de vida positivas las cuales deberían de culminar en el logro de ciclo escolar o académico, consolidar las relaciones familiares y el desarrollo de competencias afectivo-sociales adaptativas.

Asimismo, el proceso de socialización adolescente se desarrolla en un macrosistema compatible con una condición de violencia estructural entendida como injusticia social, es decir, una desigualdad y exclusión social entre diversos grupos sociales, de modo que, algunos grupos menos favorecidos tengan menos acceso a oportunidades de desarrollo integral o cumplimiento pleno de los derechos fundamentales (Baratta, 1991; Galtung, 2003).

Por tanto, para el año 2017, el 18,9% de los jóvenes no estudia ni trabaja, el acceso a educación universitaria para la población de 15



años a más no supera el 8% en el caso de condición de pobreza, a diferencia del 35 % del no pobre y para el 2017 se mantiene los niveles de desigualdad de gastos (0,35), siendo más amplio en las zonas urbanas del Perú (INEI, 2017).

1.13. Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación

Con el objetivo de evitar criminalizar a determinados grupos sociales dentro del marco de una política criminal (Crawford, 1998), tal como se evidencia cuando más de 30% de menciones sobre los y las adolescentes se refieran a ellos como infractores a la ley (Unicef, 2017), se debe considerar que la violencia y las condiciones sociales locales y macrosociales que la originan, forman parte de los diversos grupos sociales.

Así mismo, tal como se viene señalando dentro de los que se considera delincuencia común, es prioritario solo considerar los casos de mayor gravedad dentro de todo el análisis tanto a nivel de la prevención como en el sistema penal juvenil, con el objetivo de no estigmatizar el periodo de la adolescencia como una etapa de riesgo, sino de oportunidades de desarrollo y contribución con la sociedad en su conjunto.

Todo ello implica que, el enfoque del adolescente debe estar sustentado en un modelo no centrado en los déficits, sino en el desarrollo positivo el cual precisa que lo más importante para que exista una adecuada transición a la etapa adulta es el bienestar mediante la entrega de oportunidades para desarrollar competencias de éxito para la vida social, académica y profesional (Oliva, et al. 2010).

En efecto, los y las adolescentes que no cuentan con los medios necesarios para desarrollar un proyecto de vida en bienestar, establecen vínculos con diversos grupos antisociales desde la niñez y adolescencia.

En suma, a nivel nacional, determinados adolescentes están expuestos a diversos factores de riesgo criminógeno que pueden derivar en formas de delincuencia común y violencia sexual, siendo estos posibles de concretizarse durante la adolescencia y compatibles con condiciones de exclusión social y violencia en la comunidad. Esta amplia complejidad de factores de riesgo delictivo a nivel individual, familiar y social en cada una de las regiones, principalmente en los núcleos urbanos de los diversos estratos socioeconómicos, influye en la incorporación del adolescente a una trayectoria antisocial, y, por tanto, necesitan de lineamientos del Estado para su reducción e intervención.

Causa 2: Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil.

La legislación peruana precisa que las infracciones a la ley penal constituyen conductas punibles cometidas por adolescentes, entre 14 y menos de 18 años de edad, con una responsabilidad penal especial por sus actos⁴. De este modo,

⁴ Decreto Legislativo N° 1348 Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.



a nivel del sistema de justicia penal juvenil, se identifica un número relevante de adolescentes por infracciones como el robo, homicidio, venta de drogas y violencia sexual (PRONACEJ, 2019). Para el año 2019, 1435 adolescentes cometieron infracciones a la ley penal relacionadas al robo agravado, 638 violación sexual, 520 hurto agravado y 175 al tráfico ilícito de drogas.

En este sentido, respecto a la incidencia de actividades ilícitas, a nivel de sentencia o medida de coerción procesal, en los departamentos del país realizadas por los y las ACLP, tal como se muestra en la Tabla N°8 hay mayor frecuencia en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura.

Tabla N°8: Incidencia de infracciones a la ley penal por los y las ACLP por departamento

Departamento donde se cometió la infracción	Número
Amazonas	22
Ancash	78
Apurímac	28
Arequipa	38
Ayacucho	67
Cajamarca	43
Callao	47
Cusco	54
Huancavelica	16
Huánuco	57
Ica	97
Junín	100
Madre de Dios	46
La Libertad	221
Lambayeque	88
Lima	366
Loreto	53
Pasco	25
Piura	108
Puno	63
San Martín	48
Tacna	22
Ucayali	92

Fuente: UAPISE – PRONACEJ - MINJUSDH, 2022

Elaboración: Dirección de Política Criminológica / DGAC – MINJUSDH

Durante los últimos años, se ha evidenciado un incremento gradual de los y las adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal. Tal como se refleja en el acrecentamiento de denuncias ingresadas al Ministerio Público (Figura 3).

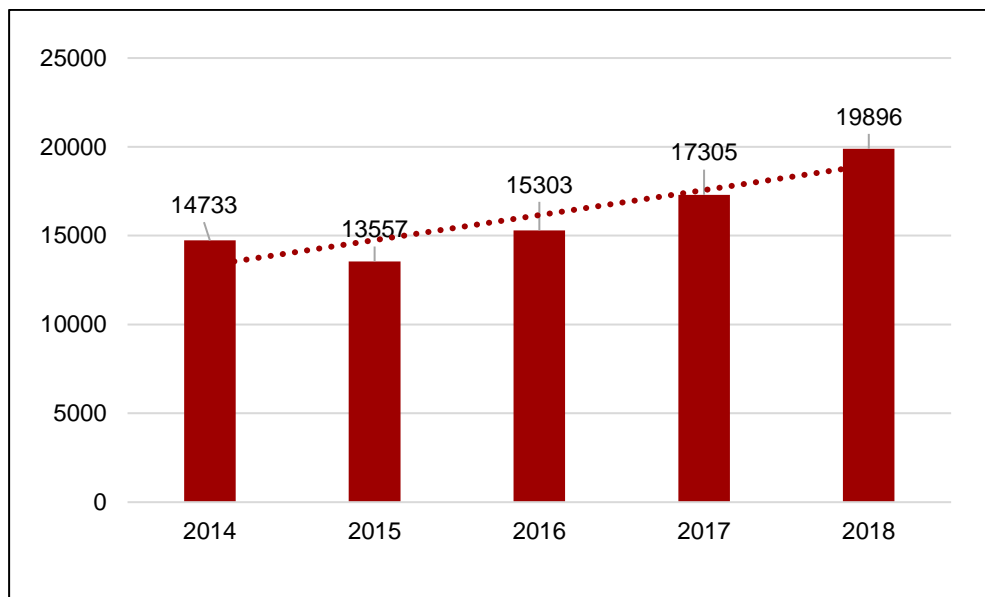


Figura 3. Denuncias Ingresadas por Infracciones a la Ley Penal Adolescente al Ministerio Público

Fuente: Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal – Ministerio Público.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica / DGAC – MINJUSDH

De igual modo, se evidencia un aumento gradual del número de ACLP con sentencias o quienes son atendidos en los Centros Juveniles (de medio abierto y cerrado) entre los años 1997 y 2017, tal como se muestra en la Figura 4.

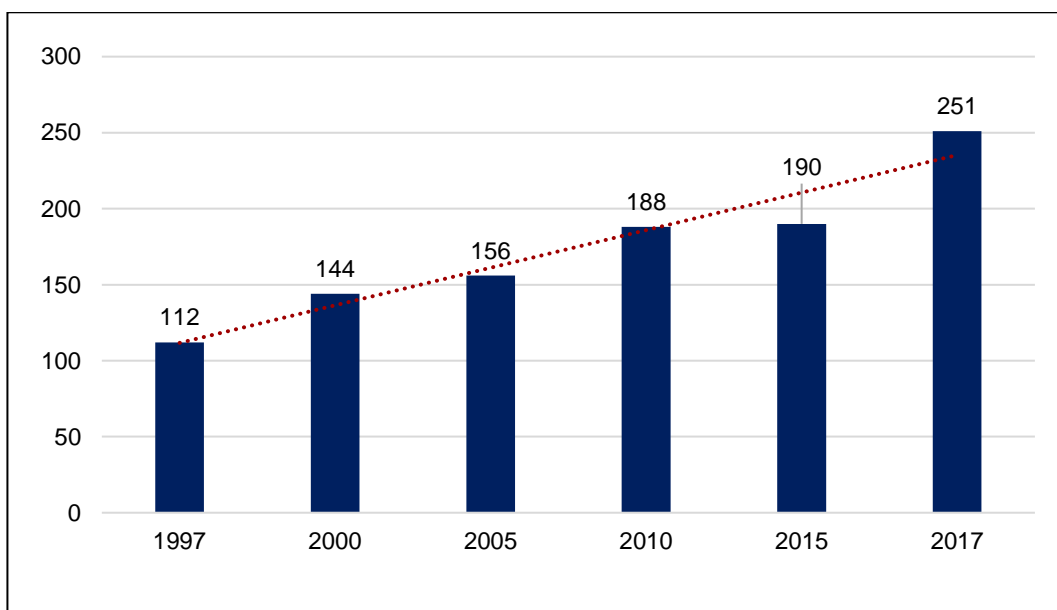


Figura 4. Evolución de la tasa de adolescentes atendidos en los Centros Juveniles, por cada 100,000 mil adolescentes a nivel nacional (1997-2017)

Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles e Instituto Nacional de Estadística e Informática (Estimaciones y proyecciones de Población Departamental por año calendario y edades simple 1995-2025).

Elaboración: Dirección de Política Criminológica / DGAC – MINJUSDH.

Otro indicador de la amplia demanda es el incremento gradual de la atención de ACLP en los últimos años por parte de cada una de las instituciones involucradas en el sistema de justicia penal juvenil, lo cual determina que dicha población se encuentre en constante aumento. En este sentido, la Policía



Nacional del Perú registra un aumento en el número de adolescentes atendidos por casos de infracción a la Ley Penal entre el 2016 y 2019, y una disminución en el 2020 en el contexto de la pandemia por el COVID-19 (Figura 5).

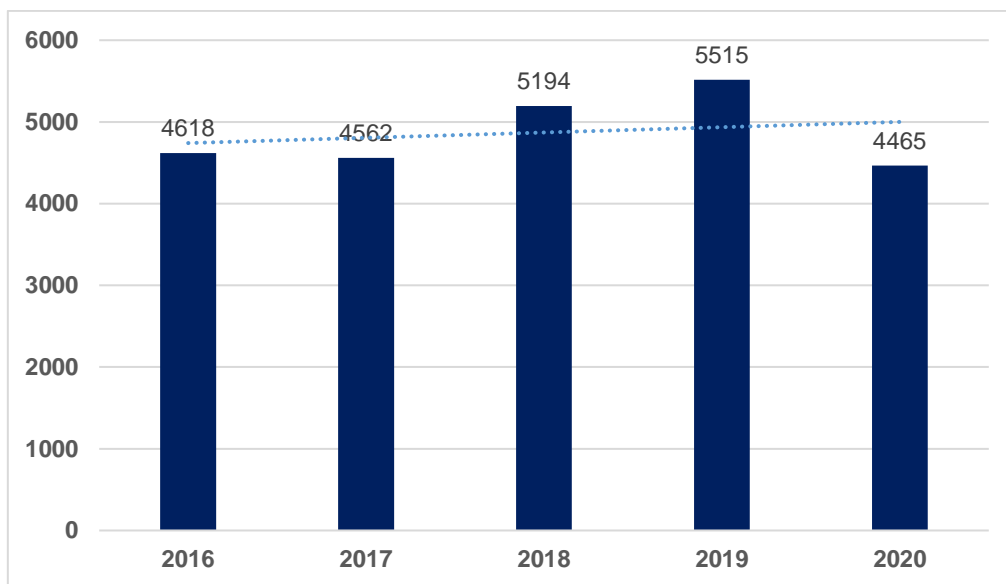


Figura 5. Direcciones territoriales y frente policiales PNP
Elaboración: DIRNAGEIN-PNP/DIRETIC - DIREST

Por otro lado, las atenciones desde la Defensa Pública tanto a los ACLP como a las víctimas también se han ido incrementando en todas las Direcciones Distritales a nivel nacional hasta el 2019, no obstante, en el contexto de la pandemia por el Covid-19 hay una disminución entre el 2020 y 2021. (Figura 6).

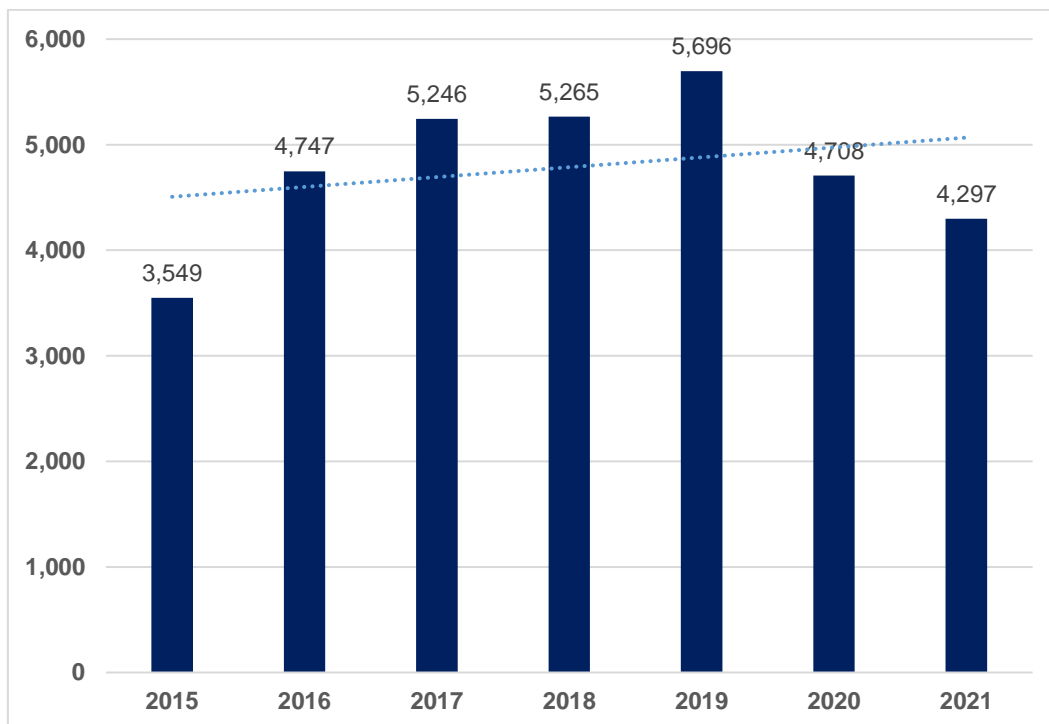


Figura 6. Número de patrocinios a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y las víctimas a nivel nacional, 2015 al 2021.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart DGPAJ - MINJUSDH



Finalmente, los casos por infracciones a la Ley Penal registrados en el Poder Judicial también se han acrecentado en los últimos años (Figura 7).

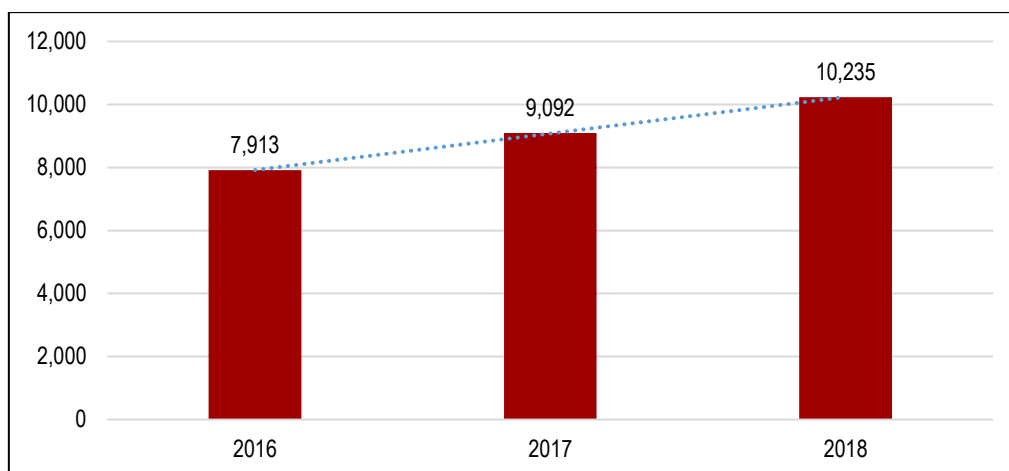


Figura 7. Número de Expedientes por ACLP por el total de Especialidad de Familia, 2016 – 2018.

Fuente: Subgerencia de Estadística de la Gerencia de Planificación del Poder Judicial, 2019
Elaboración: Dirección de Política Criminológica – MINJUSDH

Se han realizado diversos avances en el marco de la justicia penal juvenil con la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013-2018), donde se buscó instaurar un sistema de justicia garantista y con enfoque restaurativo a fin brindar una atención diferenciada y que respete el derecho de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal, particularmente con la formulación del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

En este sentido, se incrementó la priorización de medidas socioeducativas de medio abierto, sin embargo, el resto de los indicadores no presentó un comportamiento favorable con los resultados de la política, además, cabe resaltar que, no fue posible obtener el registro del indicador referido a las remisiones judiciales debido a que este servicio no se consiguió implementar y fueron muy escasas. Por otro lado, se promovió la reforma de la administración de justicia penal juvenil mediante la aprobación del Nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes - CRPA (Decreto Legislativo N°1348). Por lo tanto, la implementación del CRPA en los próximos años asegurarán el cumplimiento de los logros establecidos en este eje de intervención.

A continuación, se describen las causas o factores que pretenden explicar las dificultades que aún presenta el sistema de justicia penal juvenil en el Perú, teniendo como principal reto la implementación del CRPA.

2.1. Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso

De los 34 Distritos Fiscales solo 19 de ellos (Ica, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Este (San Juan de Lurigancho y El Agustino), Lima Sur (San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo), Santa, Ayacucho, Callao, Cusco, Lima noreste, Loreto, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, y Piura cuentan con servicios de la Línea de Justicia Juvenil Restaurativa los cuales permiten acceder a la figura de remisión en casos de infracciones a la



Ley Penal que ameriten menor gravedad (Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, 2022).

2.2. Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas

El incremento de los casos de los ACLP debió impulsar que el sistema de justicia penal juvenil genere estrategias para orientar su atención hacia la reinserción social de los y las adolescentes, aplicando un enfoque prioritariamente educativo y constructivo, así como evitar procesos de judicialización. No obstante, se ha identificado que la cantidad de aplicaciones de salidas alternativas al proceso son muy bajas, siendo para el 2020, el número de remisiones desde el Ministerio Público representa un número bajo (681 casos), siendo para el 2019, 1183 remisiones de los más de 19,000 casos de adolescentes en conflicto con la ley penal para el 2020 ingresados a nivel nacional (Ministerio Público, 2021).

2.3. Priorización de medidas socioeducativas de internación

Actualmente, aún se priorizan las medidas socioeducativas de internación, debido a que, entre los años 2013 y 2021, se ha mantenido una elevada proporción de ACLP privados de libertad en los Centros Juveniles de medio cerrado en comparación de los Centros Juveniles de medio abierto conforme a lo que se observa en la Figura 8. Cabe resaltar que en el contexto de la pandemia por el Covid-19 hay una proporción mayor de ACLP en medio abierto durante el 2020, sin embargo, al 2021 se ha retomado la priorización de medidas privativas de libertad.

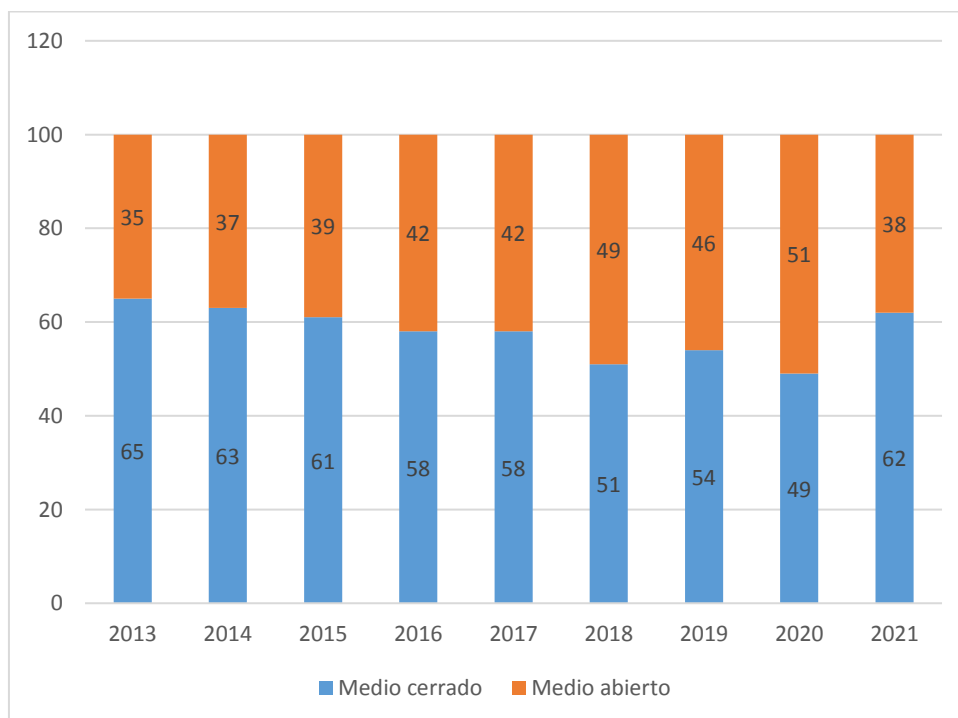


Figura 8. Evolución del porcentaje de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal atendidos en los Centros Juveniles de medio cerrado y abierto 2013-2021

Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles (2021) – MINJUSDH.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica – MINJUSDH



Cabe resaltar que, hasta octubre de 2021 el número de ACLP con medidas socioeducativas en medio cerrado se ha reducido drásticamente debido a la aplicación del Decreto Supremo N°006-2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta situación especial ha producido que la proporción de ACLP de medio cerrado sea menor al de medio abierto, sin embargo, esta frecuencia ha cambiado al 2022.

Finalmente, existe un porcentaje importante de ACLP con bajos niveles de riesgo en centros juveniles de medio cerrado y medio abierto, lo cual se desarrolla como resultado del vigente proceso de responsabilidad penal adolescente.

2.4. Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial

Por otro lado, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige que la atención a los niños, niñas y adolescente tenga un carácter adaptado, en este sentido, la atención diferenciada para los ACLP aún es insuficiente debido a que solo existen tres Módulos Especializados en dependencias policiales (Mininter, 2019), solo la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia que tiene asignado a cuatro (04) defensores públicos penales que patrocinan exclusivamente a adolescentes en conflicto con la ley penal en el Distrito Judicial de Lima y a los y las adolescentes recluidos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y el Centro Juvenil Santa Margarita, respectivamente (DGPAJ, 2021). Además, al 2022 aún no se han implementado fiscalías y juzgados especializados en justicia penal juvenil en el marco del CRPA.

2.5. Bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil

Aún no se aprueba el Plan nacional de interoperabilidad del sistema de administración de justicia penal mediante un Decreto Supremo, de modo que, no se ha puesto en marcha un sistema articulado de información o interoperabilidad en el proceso de responsabilidad penal adolescente y ejecución de la medida socioeducativa el cual reúne las acciones de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ello implica que, aún no se realizan intervenciones concretas para implementar el referido Plan Nacional el cual ha sido aprobado por el Consejo Nacional del Política Criminal en el 2018 (Defensoría del Pueblo, 2020).

2.6. Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas

Aún no se ha implementado la figura del mediador penal especializado en el proceso de responsabilidad penal especial del adolescente conforme establece el CRPA por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa no abarca el total de Distritos Fiscales; y, respecto a la



Defensa Pública para atender a las víctimas todavía no se implementa un servicio especializado.

2.7. Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos

La edad de responsabilidad penal adolescente está entre los 14 y menos de 18 años, en este sentido, según la última Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño sugiere que no sea de menor de 14 años y en la medida de lo posible se sugiere ir aumento la edad mínima, por ejemplo, hasta los 16 años. Asimismo, se invoca que no debe de privarse de libertad a un adolescente en conflicto con la ley penal menor de 16 años.

Además, aún persiste el tiempo de medida socioeducativa de alrededor de 10 años lo cual aún no recoge las observaciones del mencionado Comité realizadas en el 2016, siendo un tiempo sumamente elevado. Finalmente, debido a que aún no se implementa el CRPA persiste el modelo inquisitivo con características que no permiten brindar una atención diferenciada y especializada al ACLP.

Causa 3: Limitada intervención para la reinserción social.

Una vez determinada la responsabilidad penal del o la adolescente, se establece un tipo de medida socioeducativa en un centro juvenil de medio cerrado o abierto. Este servicio del Estado debe desviar al adolescente de la trayectoria delictiva para reintegrarlo a las actividades prosociales en su comunidad, así como en las dimensiones educativas, labores y familiares. Sin embargo, se ha identificado diversas dificultades que impiden lograr de forma óptima estos objetivos.

Mediante Decreto Legislativo N°1299, de fecha 29 de diciembre de 2016, se transfirió el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SINARSAC y la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus Órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N°0483-2018-JUS, con fecha 08 de noviembre de 2018, se encargó dicho Sistema a la Dirección General de Asuntos Criminológicos. Luego de ello, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, con fecha 01 de febrero de 2019, se creó el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), con el objetivo de fortalecer la reinserción social de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, a través de la atención especializada, ejecución de programas de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas socioeducativas por medio de los Centros Juveniles, a nivel nacional.

La condición de los Centros Juveniles cuando se realizó la transferencia a cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, durante noviembre de 2018, incluye la atención total de 3,745 adolescentes mujeres y varones en todo el Perú bajo un total de 856 trabajadores teniendo un déficit o brecha de -72%. En este sentido, respecto a los niveles de sobrepoblación los Centros Juveniles de medio cerrado presentaban un total de 40% y 80% para los Centros Juveniles de medio abierto. Asimismo, los ambientes y equipamiento de gran parte de los Centros Juveniles relacionadas con la salud, educación y



seguridad mostraban diversos déficits y falta de mantenimiento lo que dificultaba sus niveles adecuados de operatividad.

En este sentido, el proceso de encargatura del referido Sistema a la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, implicó la elaboración de un nuevo Modelo Integral de Intervención y Tratamiento Diferenciado para el ACLP, el mismo que plantea el trabajo con el adolescente desde el inicio de la medida socioeducativa, el proceso de su cumplimiento hasta el acompañamiento posterior al externamiento. Además, es un modelo que propone la participación constante de la familia y la comunidad, como fuente importante y fundamental para la adecuada reinserción social del menor. Dicho modelo trabaja coherentemente con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. N°1348).

Este modelo presenta una intervención integral y diferenciada del ACLP, no sólo de acuerdo con la infracción que se cometió, sino fundamentalmente en base al nivel de riesgo del adolescente, asimismo, se plantean programas específicos para cada medida socioeducativa. No obstante, este modelo aún no se ha implementado y ello implica que aún no se logra brindar un servicio integral, diferenciado y basado en gestión del riesgo hacia los y las adolescentes en conflicto con la ley penal dentro de los centros juveniles.

En relación con la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, 892 adolescentes en conflicto con la ley penal han concluido su Programa de Orientación durante el año 2019; de los cuales 569 adolescentes en conflicto con la ley penal corresponden al registro de la Base de Datos 2018 y 323 adolescentes en conflicto con la ley penal corresponden al registro de la Base de Datos 2019. Asimismo, se ha avanzado en la elaboración de documentos de trabajo, de modo que, se construyó el Protocolo de actuación institucional, con enfoque de justicia terapéutica, para Fiscales de Familia y Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa para su aprobación por las instancias superiores del Ministerio Público a través de la respectiva Resolución de la Fiscalía de la Nación, de este modo, dicho protocolo ya fue aprobado el día 01 de octubre del 2020, mediante Resolución de La Fiscalía de la Nación N°1077-2020-MP-FN Lima, aprueban el protocolo denominado: "Actuación Institucional de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, en la atención de adolescentes en conflicto con la Ley Penal que presentan consumo problemático de drogas".

Respecto al proceso de reinserción social de los y las adolescentes de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa para el 2019, en la Figura 9 se evidencian los siguientes avances. De modo que, un porcentaje alto de casos de los atendidos en el programa de orientación pueden acceder a una intervención en diversos componentes del desarrollo de los y las adolescentes que acceden a la remisión.

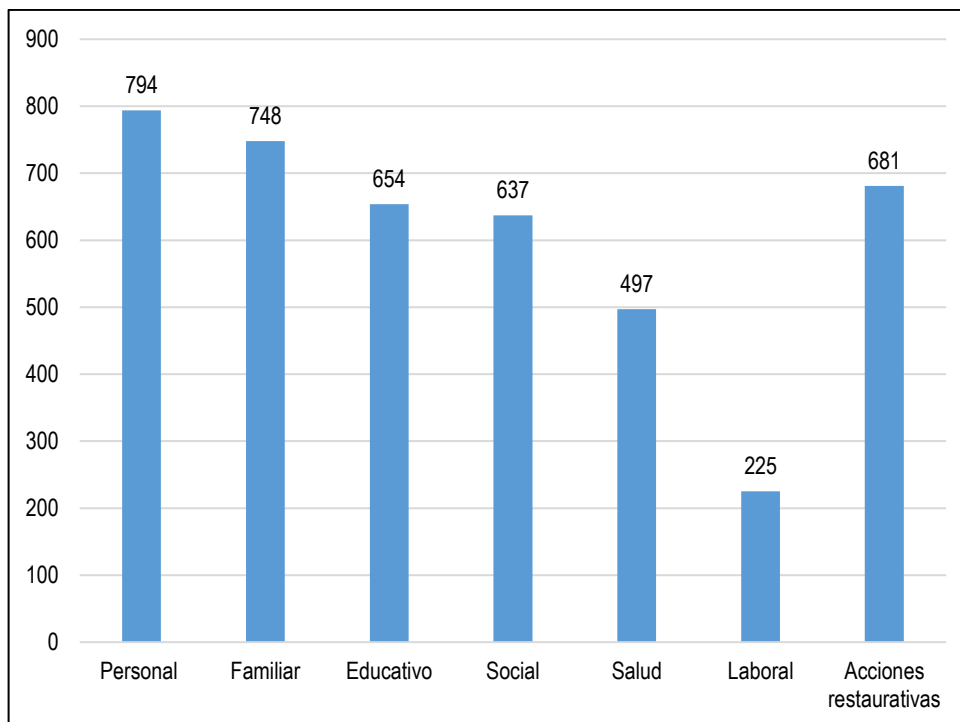


Figura 9. Proceso de reinserción social de los y las adolescentes de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa para el 2019

Fuente: Informe de gestión anual - 2019. Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa - Coordinación de Enlace

Finalmente, durante el 2019 se amplió la cobertura de atención de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en los Distritos Fiscales de Lima Norte y Lima Este, a efecto que los y las adolescentes en conflicto con la ley penal denunciados en las Fiscalías Provinciales de Familia de Condevilla y San Juan de Lurigancho respectivamente sean atendidos a nivel prejudicial con un enfoque de justicia restaurativa y con el apoyo de profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario. Asimismo, en el 2022, se incrementa la presencia de la referida Línea de Acción a Lima noreste, Loreto, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, y Piura⁵.

A continuación, en las figuras 10 y 11 se describen las ubicaciones de los Centros Juveniles a nivel nacional. De igual modo, en la Tabla N°9 se observa la cobertura de la presencia de los Centros Juveniles a nivel nacional en los Distritos Judiciales.

⁵ Esta ampliación en la cobertura es consecuencia de la reorganización del Programa de Prevención Estratégica del Delito (Resolución de la Fiscalía de la Nación N°196-2022-MP-FN con fecha 17 de febrero de 2022).



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



Figura 10. Centros Juveniles de medio cerrado a nivel nacional.
Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles (2021) – MINJUSDH.



Figura 11. Centros Juveniles de medio abierto a nivel nacional.
Fuente: Programa Nacional de Centros Juveniles (2021) – MINJUSDH.

**Tabla N°9: Presencia de Centros Juveniles en los Distritos
Judiciales a nivel nacional**

Distritos Judiciales	Medio abierto	Medio cerrado
Lima Centro	P	P
Ancash	P	A
Cañete	P	A
La Libertad	P	P
Lima Este	P	A
Ucayali	P	P
Amazonas	P	A
Ayacucho	P	A
Callao	P	A
Cusco	P	P
Huancavelica	P	A
Junín	P	P
Lambayeque	P	P
Lima Norte	P	A
Lima Sur	A	A
Madre de Dios	P	A
Puno	P	A
Sullana	P	A
Tumbes	P	A
Ventanilla	P	A
Arequipa	P	P
Huánuco	P	A
Huaura	P	A
Ica	P	A
Moquegua	A	A
Pasco	A	A
Piura	P	P
Tacna	A	A
Apurímac	A	A
Cajamarca	A	A
Santa	A	A
Loreto	A	A
San Martín	A	A
Selva Central	A	A

Nota. P: Presencia, A: Ausencia.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica – MINJUSDH (2021)

En efecto, para el año 2021 la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos en los Centros Juveniles a nivel nacional es de 2649 (1005 de medio abierto y 1644 para medio cerrado), así mismo, aún se mantienen niveles considerables de sobrepoblación.

De igual modo, en la Figura 12 se identifican los Distritos Fiscales a nivel nacional donde se desarrolla la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. Tal como se puede apreciar aún está pendiente el incremento de la cobertura de dicha Línea de Acción a lo largo del todo el Perú para la atención diferenciada de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

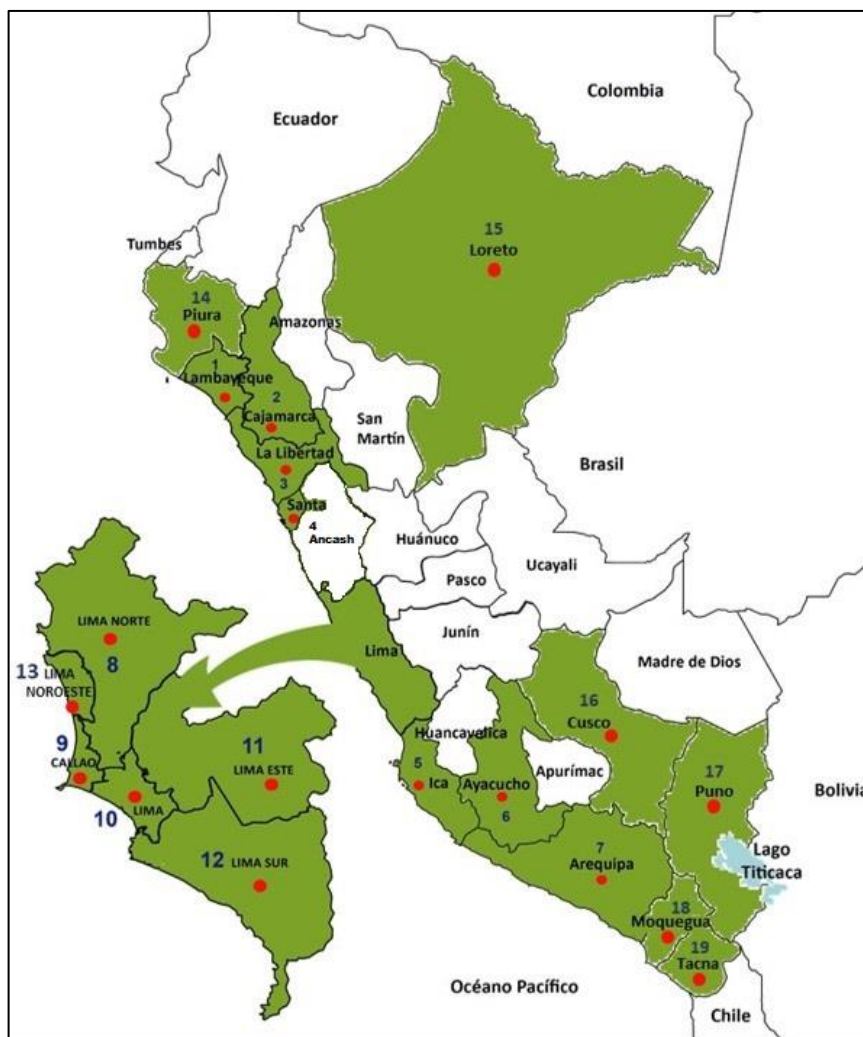


Figura 12. Distritos Fiscales a nivel nacional donde se desarrolla la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa al 2022.

Fuente: Programa de Prevención Estratégica del Delito – Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (2022)

A continuación, se desarrollan las causas o factores que explican la persistencia de las dificultades que presentan los servicios de resocialización a nivel nacional.

3.1. Limitado personal especializado y de intervención diferenciada

Actualmente, el número de servidores en Centros Juveniles de Medio Cerrado es insuficiente considerando el número total de ACLP que son atendidos en cada Centro Juvenil (1005 para medio abierto y 1644 para medio cerrado), por tanto, tal como describe la información de las Tablas N°10 y N°11 todos los Centros Juveniles disponen de un número limitado de profesionales de los Equipos Técnicos Especializados (Educador social, Psicólogo y Trabajador Social) para la reinserción social.

**Tabla N°10: Brecha de profesionales en los Centros Juveniles de medio cerrado**

Centros Juveniles	Profesionales de los Equipos Técnicos Especializados
Lima	33
S. Margarita	6
Piura	16
Chiclayo	20
Trujillo	20
El Tambo - Huancayo	6
Pucallpa	11
Marcavalle - Cusco	26
Alfonso Ugarte - Arequipa	17
Total	94

Fuente: UGMSI – PRONACEJ - MINJUSDH (2021)

Tabla N°11: Brecha de profesionales en los Centros Juveniles de medio abierto

Centros Juveniles	Profesionales de los Equipos Técnicos Especializados
SOA Ayacucho	3
SOA Callao	1
SOA Cañete	1
SOA Cerro Colorado - Arequipa	1
SOA Chiclayo	2
SOA Chimbote	1
SOA Cusco	4
SOA Huancavelica	2
SOA Huancayo	3
SOA Huánuco	2
SOA Huaraz	3
SOA Huaura	2
SOA Iquitos	4
SOA La Tinguíña	3
SOA Lima	1
SOA Lima Este	4
SOA Lima Norte	2
SOA Madre de Dios	3
SOA Paucarpata - Arequipa	1
SOA Pucallpa	4
SOA Puno	2
SOA Sullana	2
SOA Trujillo	3
SOA Tumbes	2
SOA Ventanilla	0
Total	56

Fuente: UGMSI – PRONACEJ - MINJUSDH (2021)



Al respecto, según el documento normativo Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SRSALP (Resolución Administrativa 129-2011-CE-PJ), en medio abierto un equipo de profesionales sólo podría brindar atención a entre 25 y 40 adolescentes; por otro lado, el CRPA en el Artículo 25 de su Reglamento indica que los equipos técnicos interdisciplinarios de los Centros Juveniles deben estar compuestos por un psicólogo(a), un trabajador(a) social, un educador(a) social y, adicionalmente, un apoyo administrativo para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Teniendo en consideración lo descrito en el párrafo anterior, y la población de adolescentes en medio abierto, a noviembre de 2021, la brecha de personal para los Centros Juveniles de Medio Abierto a nivel nacional asciende a 56 profesionales para los equipos técnicos interdisciplinarios, y 94 para los Centros Juveniles de Medio Cerrado.

Respecto a la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa aún queda pendiente incrementar los recursos a efecto de que los profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios pueden realizar su trabajo de manera eficiente. En este sentido, es necesario evaluar la ampliación del número de profesionales para la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en los Distritos Fiscales de Lambayeque – Chiclayo, Ica y Callao, toda vez que en el año 2019 atendieron a 229, 268 y 193, respectivamente.

De igual modo, es importante mejorar las condiciones de capacitación de los profesionales que integran los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y Fiscales de Familia a efecto de mejorar sus competencias en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

3.2. Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados

En los centros juveniles y la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa los procesos de intervención no se ajustan de forma completa a modelos basados gestión de riesgo y criminología del desarrollo, de este modo, el instrumento SAVRY, aplicado sin una adaptación peruana y los permisos correspondientes, es utilizado por los Equipos Interdisciplinarios de los Centros Juveniles con el objetivo de contribuir con la elaboración del informe de evaluación en el proceso de determinación de la medida socioeducativa, sin embargo, es necesario ampliar el número de instrumentos para obtener un perfil más completo de los ACLP y con ello elaborar programas de intervención más efectivos.

En los centros juveniles de medio cerrado, el Equipo Interdisciplinario viene aplicando los siguientes instrumentos: 1. SAVRY (Instrumento de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes); y 2.HCR-20 (Guía de valoración del riesgo de comportamientos violentos). Cabe señalar, que se necesita seguir capacitando al personal existente; así como, adaptar y validar nuevos instrumentos para futuras evaluaciones a los ACLP.



De igual modo, en relación con los centros juveniles de medio abierto, actualmente, la valoración del nivel de riesgo de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas socioeducativas no privativas de libertad se realiza mediante los siguientes instrumentos: 1. SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) y 2. HCR-20 (Historical Clinical Risk Management-20). [RDE N°027-2019-JUS/PRONACEJ].

De igual modo, respecto a la mencionada Línea de Acción está pendiente contar con Instrumentos Técnicos que midan el nivel de riesgo de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

3.3. Centros Juveniles al límite de su capacidad

Actualmente, se cuenta con una población total de 1644 adolescentes en los Centros Juvenil de Medio Cerrado a nivel nacional. Respecto a la sobrepoblación, los Centros Juveniles que la presentan son las Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Pucallpa y Trujillo. En la siguiente Tabla N°12 se observan los niveles de sobrepoblación al 2021.

Tabla N°12: Capacidad de Albergue vs población interna de Centros Juveniles de medio cerrado.

Centro Juvenil	ACLP	CAPACIDAD TOTAL	SOBREPOBLACIÓN
LIMA	531	560	-5.2%
ANEXO ANCON	65	192	-66.1%
SANTA MARGARITA	67	88	-23.9%
ALFONSO UGARTE - AREQUIPA	111	92	20.7%
JOSE QUIÑONES - CHICLAYO	155	126	23.0%
MARCAVALLE - CUSCO	118	96	22.9%
EL TAMBO - HUANCAYO	147	110	33.6%
MIGUEL GRAU - PIURA	137	185	-25.9%
PUCALLPA	150	110	36.4%
TRUJILLO	163	106	53.8%
TOTAL GENERAL	1644	1559	5.5%

Fuente: UAPISE – PRONACEJ (2021)

En relación con los Centros Juveniles de Medio Abierto, a nivel nacional tenían una población de 1613 adolescentes; al respecto, considerando lo contemplado por el documento normativo Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – SRSALP y según lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento del CRPA, 927 adolescentes de los 1613 no podrían ser atendidos adecuadamente si no se cuenta con el personal mínimo necesario. En la siguiente Tabla N°13 se observan los niveles de sobrepoblación al 2020.

**Tabla N°13: Capacidad de Albergue vs población interna de Centros Juveniles de medio abierto.**

N	CENTRO JUVENIL	PROFESIONALES ETI	POBLACIÓN DE ACLP	SOBREPOBLACIÓN DE ACLP
1	SOA Ayacucho	0	17	17
2	SOA Callao	4	51	9
3	SOA Cañete	3	34	2
4	SOA Cerro Colorado - AQP	5	45	0
5	SOA Chiclayo	2	73	53
6	SOA Chimbote	3	51	19
7	SOA Cusco	2	81	61
8	SOA Huancavelica	1	13	3
9	SOA Huancayo	3	97	65
10	SOA Huánuco	2	96	76
11	SOA Huaraz	0	16	16
12	SOA Huaura	2	42	22
13	SOA Iquitos	2	175	143
14	SOA La Tinguina	1	70	60
15	SOA Lima	11	106	0
16	SOA Lima Este	4	136	94
17	SOA Lima Norte	7	96	22
18	SOA Madre de Dios	0	17	17
19	SOA Paucarpata - AQP	2	22	2
20	SOA Pucallpa	3	124	92
21	SOA Puno	2	47	27
22	SOA Sullana	2	27	7
23	SOA Trujillo	1	74	64
24	SOA Tumbes	1	66	56
25	SOA Ventanilla	5	37	0
TOTAL		68	1613	927

Fuente: PRONACEJ (2021)

3.4. Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social

Actualmente, los 25 Centros Juveniles de Medio Abierto cuentan con locales para su funcionamiento, sin embargo, 17 funcionan en las instalaciones de otras instituciones y sólo 8 funcionan en locales independientes. Asimismo, de los 25 locales, sólo 14 tienen acceso independiente mientras 11 dependen de otra institución para tener acceso a sus instalaciones. Por otro lado, respecto a los ambientes independientes, 18 cuentan con ambientes independientes y 7 cuentan con un solo ambiente.

Cabe resaltar que algunos de los Centros Juveniles de Medio Abierto no disponen de servicios higiénicos independientes y equipados, y en 5 el servicio de agua potable no es permanente. Por otro lado, 20 carecen del servicio de internet, y 3 cuentan con un servicio de internet limitado y/o restringido, ya que el servicio de internet es proporcionado por las instituciones en donde se encuentran ubicados, y sólo 1 cuenta con el servicio de internet subvencionado por el PRONACEJ.



Actualmente, más del 50% de Centros juveniles de medio cerrado requieren mejoras físicas en la infraestructura a nivel de seguridad, vigilancia y otros ambientes para la reinserción social; a pesar de ello, se sigue gestionando el mantenimiento respectivo a fin de contribuir con el proceso de reinserción de los ACLP (Pronacej, 2020).

Respecto a la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, aún queda pendiente la mejora de los ambientes donde trabajan los Equipos Técnicos Interdisciplinarios para la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, particularmente en Distritos Fiscales como Lambayeque - Chiclayo, Ica, El Santa - Chimbote, Callao, Lima, Lima Este y Lima Norte.

3.5. Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado

Actualmente en los Centros Juveniles de Medio Cerrado, se vienen realizando operativos de control, para poder registrar debidamente las instalaciones con la finalidad de garantizar y salvaguardar la integridad de los ACLP. Realizándose visita inopinada a los Programas, rondas nocturnas, monitoreo por las cámaras de videovigilancia, revisiones corporales, y revisión de bolsas destinadas para los y las adolescentes y otros.

No obstante, aún existen dificultades en cuanto a la realización de un formato estandarizado para reportar la información de los operativos de control, el número ideal de agentes de seguridad para la custodia de los centros juveniles, el Mantenimiento oportuno de las cámaras de seguridad, y el mantenimiento oportuno del cerco perimétrico de seguridad en algunos centros juveniles.

3.6. Escasas actividades de seguimiento post-egreso

Dentro de los programas de los Centros Juveniles, aún no se cuenta implementado un proceso de acompañamiento post internación que garantiza la efectiva inclusión del ACLP a la comunidad, escuela y trabajo, conforme dispone la aprobación del Decreto Legislativo N°1348 Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Debe realizarse bajo el consentimiento de la o el adolescente, busca brindarles atención y seguimiento una vez culminada la medida socioeducativa impuesta.

Este programa, llevado a cabo por la Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención – UAPISE, se ha ido desarrollando de manera paulatina debido a los limitados recursos logístico y humanos en la Unidad. A la fecha, el programa de egresados cuenta con una población de 209 usuarios, a 20 de los cuales se ha logrado establecer su continuidad educativa a través del convenio establecido entre el PRONACEJ y CEBA Cristo Joven.

No obstante, la ausencia de Equipos Técnicos Interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) en la Unidad sesga la posibilidad de brindar un tratamiento especializado y orientado a las necesidades específicas que cada adolescente presente de acuerdo con



la evaluación de sus factores de riesgo y protectores. La asistencia post internación es aún un reto que PRONACEJ, en la medida de sus capacidades, está afrontando en con el objetivo de realizar la reinserción social.

En relación a los centros juveniles de medio cerrado, no se cuenta con un plan de tratamiento diferenciado para la preparación del egreso en la cual se evalúe el avance realizado en el tratamiento de la/el adolescente en el transcurso del cumplimiento de su medida y las acciones pendientes a realizar post-egreso. Asimismo, las limitadas actividades extramuros, como las visitas domiciliarias, dificultan identificar a las redes de soporte familiar como factores de riesgo o factores protectores. De acuerdo al CRPA, el seguimiento post internación requiere del consentimiento de la/el adolescente. Se ha identificado una mayor resistencia por parte de adolescentes egresados del centro juvenil en acogerse a esta asistencia (Pronacej, 2020).

No se cuentan con los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de adolescentes egresados. Se requiere contar con actores identificados y comprometidos (ya sea del Estado, sociedad civil o empresa privada) para la reinserción social de las y los adolescentes que contribuyan a su inserción educativa y laboral, así como con el Programa de Residentado Juvenil para cubrir la necesidad de una vivienda en el caso de egresados/as sin redes de soporte familiar. La Unidad encargada del seguimiento post internación no se encuentra adecuadamente implementada, requiriendo de recursos humanos y recursos materiales para su efectiva intervención, la misma que debe partir del plan de tratamiento individual propuesto por el ETI.

En relación a los centros juveniles de medio abierto, respecto a la etapa posterior al egreso, el CRPA en su Artículo 181 refiere que se debe incluir como parte del tratamiento del adolescente, el seguimiento y asistencia que se le debe brindar al menos durante los seis meses posteriores a haber cumplido la medida socioeducativa. Asimismo, el seguimiento y asistencia incluye la atención por los profesionales del Centro Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente en las necesidades sociales, psicológicas, legales, médicas, educativas y laborales del adolescente.

En ese sentido, existen algunas experiencias de seguimiento post egreso que se han implementado en los Centros Juveniles de Medio Abierto de Ventanilla, Callao, Huaura, Cañete, entre otros; que, si bien sólo se han realizado en la práctica, presentan una propuesta de intervención que da luces sobre la metodología que debe aplicarse para el tratamiento de los(as) adolescentes en la etapa posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa no privativa de libertad.

Cabe mencionar, que esta práctica no se ha podido fortalecer en los Centros Juveniles de Medio Abierto que ya lo vienen desarrollando y tampoco se ha podido implementar en otro por falta de recursos humanos. El personal con el que se cuenta apenas se da abasto para brindar tratamiento a los y las adolescentes durante el cumplimiento de la medida socioeducativa, realizar el seguimiento post egreso les resulta imposible.



3.7. Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto

Actualmente, la población de los Centros Juveniles de Medio Abierto ascendía a 1688, los cuales presentaron los niveles (SAVRY) de riesgo como se detalla a continuación al ingresar al centro juvenil. Por tanto, se muestra un conjunto importante de adolescentes con niveles de riesgo moderado o alto a pesar de encontrarse en una medida no privativa de libertad, tal como se observa en la siguiente tabla.

Tabla N°14: Niveles de riesgo al ingresar al centro juvenil de medio abierto

Nivel de riesgo	Cantidad	Estructura (%)
Alto	259	15
Bajo	776	46
Moderado	653	39
Total	1688	100

Fuente: PRONACEJ (2020)

3.8. Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado

En relación con los niveles riesgo de los y las adolescentes en los Centros Juveniles a nivel Nacional, se cuenta con el reporte realizado en agosto de 2019, debido al estado de emergencia sanitaria del 2020, por tanto, el 15% de los y las adolescentes presentaban niveles de riesgo alto, el 41% niveles de riesgo bajo, el 24% niveles de riesgo moderado y el 20% restante sin evaluación, como se puede apreciar en la siguiente Tabla N°15. De este modo, existe un porcentaje importante de casos con niveles bajos de riesgo en general, en un centro privativo de libertad, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N°15: Niveles de riesgo al ingresar al centro juveniles de medio cerrado

Centros juveniles	Nivel de riesgo			Sin evaluación	Total
	Alto	Bajo	Medio		
Lima	147	271	164	169	751
Anexo Ancón II				130	130
Santa Margarita	20	46	30	3	99
Miguel Grau - Piura	17	130	48	5	200
José quiñones Gonzáles	6	106	38	7	157
Trujillo	17	11	36	81	145
El tambo - Huancayo	22	69	72	8	171
Pucallpa	62	64	61	2	189
Marcavalle - cusco	10	101	30	25	166
Alfonso Ugarte - Arequipa	31	72	31	6	140
Total	332	870	510	436	2148
%	15%	41%	24%	20%	100%

Fuente: PRONACEJ (2020)



3.9. Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo

Actualmente, no se realiza estas actividades en los centros juveniles. Sin embargo, desde el año pasado se viene desarrollando el programa "Trabajando por mi comunidad" (RDE N° 024-2020-JUS/PRONACEJ) que desde el enfoque restaurativo busca reparar el daño ocasionado a la víctima y a la comunidad, de forma indirecta, realizando actividades en favor de la Comunidad. De modo que, se espera que a futuro se puedan incorporar este tipo de intervenciones con una mayor cobertura en todos los centros juveniles a nivel nacional (Pronacej, 2020).

3.10. Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas

En cuanto, a los centros juveniles de medio cerrado, las actividades educativas, formativas y productivas se han mantenido en este estado de Emergencia Nacional; en ese sentido, se describen algunos inconvenientes en cuanto al equipamiento y la metodología.

- Equipamiento: Para la realización de clases virtuales en los CEBAs y/o CETPROs, se cuenta con equipos multimedia de variada antigüedad; sin embargo, en algunos centros juveniles existe una conectividad de internet inestable por lo que la señal no llega a todos los ambientes de los mismos.
- Metodología: También, se ve afectada la metodología, ya que el desarrollo de talleres como: carpintería metálica, panadería, metal mecánico, confecciones textiles, y otros; debido a que, son actividades que requieren una guía presencial y directa en lugar de una orientación virtual.

Respecto a la intervención con los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas socioeducativas no privativas de libertad, actualmente la principal dificultad es la falta de recursos humanos; por otro lado, podría considerarse como una segunda dificultad los recursos físicos, específicamente materiales que se requieren para el desarrollo de los programas de intervención y su aplicación con los y las adolescentes (libros, cuadernillos, manuales, folletos, entre otros, de guías de intervención y fichas de trabajo), sobre todo en el caso de aquellos que viven en las zonas más alejadas de las regiones y presentan inconvenientes para asistir continuamente a los Centros Juveniles para recibir tratamiento en el marco del cumplimiento de su medida socioeducativa.

Finalmente, sobre la metodología de intervención, es importante mencionar que la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de Libertad del PRONACEJ viene desarrollando los siguientes programas:

- Justicia terapéutica con enfoque restaurativo para adolescentes que consumen drogas.



- Trabajando por mi comunidad: guía para la aplicación de técnicas restaurativas en la reparación del daño ocasionado a la víctima y a la comunidad.
- Programa de intervención con familias "ADN familiar".
- Programa de intervención para adolescentes agresores sexuales.
- Programa de intervención "firmes y adelante: entrenándonos para la vida".
- Programa de intervención terapéutica para adolescentes de riesgo alto y moderado.

Por otro lado, en relación con la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, queda pendiente fortalecer y mejorar diversas Guías Metodológicas para la utilización de los instrumentos técnicos tales como: Ficha de atención inicial, Informe de apreciación inicial, informe técnico interdisciplinario, programa de orientación, acta de compromiso de los y las adolescentes y sus padres o apoderados, ficha de acompañamiento y seguimiento del adolescente con Programa de Orientación

3.11. Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado

Se debe considerar que solo existe un Centro juvenil de medio cerrado (Lima-Centro) dirigido para ACLP mujeres, ello incrementa las dificultades de reinserción debido a que se deben de trasladar desde las diversas regiones del Perú hacia Lima Metropolitana. De este modo, en la siguiente Tabla se muestra el último departamento de residencia del ACLP del Centros juveniles Santa Margarita (INEI, 2016).

Tabla N°16: Último departamento de residencia de ACLP en el centro juvenil de Santa Margarita.

Departamento	Número
Ancash	4
Ayacucho	2
Callao	2
Huancavelica	1
Huánuco	1
Ica	7
Junín	3
La Libertad	10
Lambayeque	1
Lima	37
Loreto	1
Madre de Dios	1
Moquegua	1
Pasco	2
Piura	1
Puno	2



San Martín	1
Tacna	3

Fuente: PRONACEJ (2020)

Estas tres dimensiones psicosociales, de justicia penal juvenil y reinserción social, previamente desarrolladas, describen básicamente casi todos los elementos de socialización por los cuales puede atravesar un ser humano, educación, salud, familia, acceso a justicia, entre otros, todo lo cual, permiten comprender la profundidad compleja del problema público en torno a los y las adolescentes en riesgo y conflicto con la ley penal.

De este modo, la naturaleza multifactorial y la afinidad con el gran problema de la violencia e inseguridad a nivel nacional desarrollan un problema público multisectorial y con la necesidad de que se involucren todos los niveles del gobierno para su solución.

3.5.2. Efectos

1. Aumento de la marginación/segregación y pobreza

La falta de inversión en política que mejoren las condiciones de desarrollo integral de los y las adolescentes genera que múltiples grupos sociales se mantengan o ingresen a condiciones de pobreza y violencia.

De igual modo, los y las adolescentes en riesgo y conflicto con la ley penal constituyen grupos en situación de vulnerabilidad que favorece la ampliación del número de jóvenes que no estudian ni trabajan. En este sentido, estos grupos no pueden desarrollarse en condiciones que favorezcan una ciudadanía activa y productiva contribuyendo en el mantenimiento de las brechas sociales.

2. Vulneración de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley

Actualmente, los y las adolescentes en conflicto con la ley penal no atraviesan un proceso de responsabilidad penal adolescente basados en un modelo de justicia penal juvenil especializada, que recoge la doctrina de la Protección Integral; y, garantizando la reinserción social constructiva.

En este sentido, no son atendidos por defensores, policías, fiscales y jueces especializados que garanticen un proceso que respete sus derechos fundamentales diferenciados de los procesos penales adultos; asimismo, tal como evidencia el segundo informe del Mecanismo nacional de prevención de la tortura de la Defensoría del Pueblo (2018) la atención en los centros juveniles aún presenta diversas situaciones de violencia y vulneración de la integridad.

3. Incremento del nivel de inseguridad ciudadana

El mantenimiento de indicadores de delincuencia juvenil genera que un grupo de adolescentes con conductas antisociales transite a la edad juvenil y adulta continuando con sus actividades delictivas, especialmente en los casos de adolescentes con perfiles más graves. Por tanto, el crimen organizado y las diversas formas de criminalidad se mantendrían cuando persista un contexto criminógeno a nivel de la comunidad, familia, escuela, en el propio sistema de justicia penal juvenil y cuando los servicios de reinserción social aún tengan diversas limitaciones.

Entre los años 2010 y 2019 los porcentajes de victimización se han mantenido elevados a nivel nacional, lo cual se corresponde con el incremento de población adolescente que se encuentra en riesgo o ha realizado infracciones a la ley penal, tal como se observa en la Figura N°13.

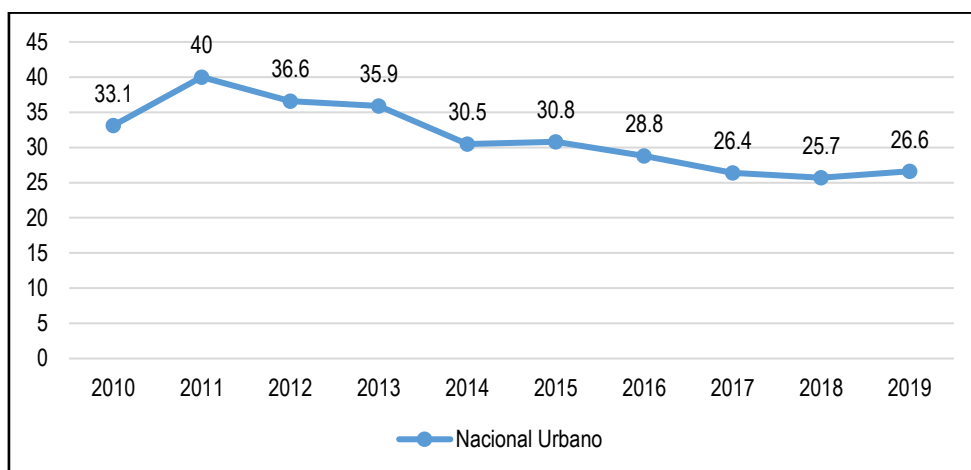


Figura 13. Porcentaje de población de 15 años a más de edad del área urbana, víctima de algún hecho delictivo a nivel nacional (2010-2019).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales-ENAPRES

3.5.3. Participación multi-actor

3.5.3.1. Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA)

Con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se desarrolló una consulta virtual a nivel nacional con todas las regiones que forman parte del CCONNA, obteniéndose los siguientes resultados a nivel cualitativo en cuanto a las causas de la delincuencia juvenil y la solución desde la perspectiva de los y las adolescentes a nivel nacional, tal como se aprecia en la figura N°14 y 15.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

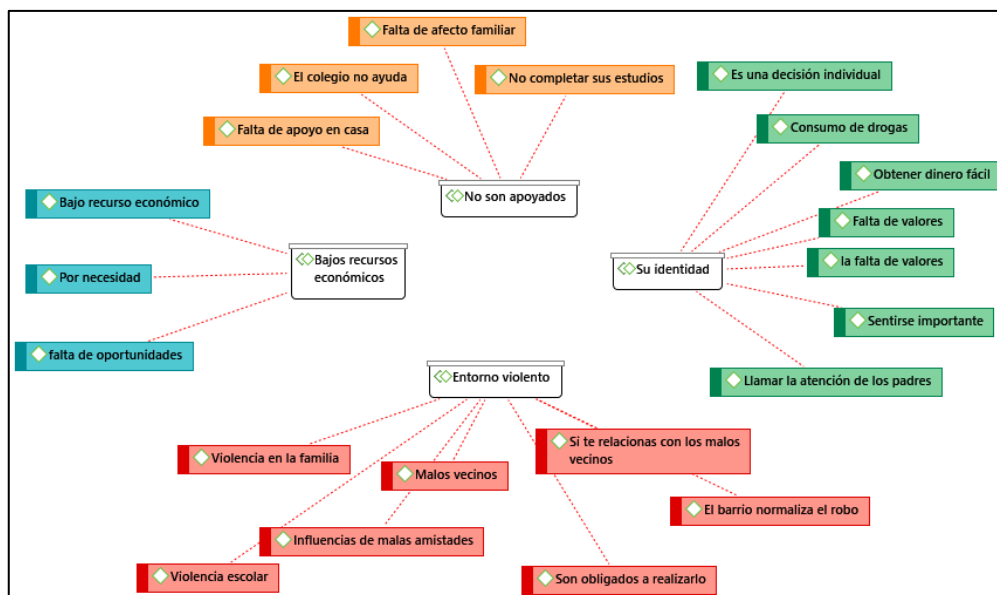


Figura 14. Representaciones sobre las causas de la delincuencia juvenil
Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC

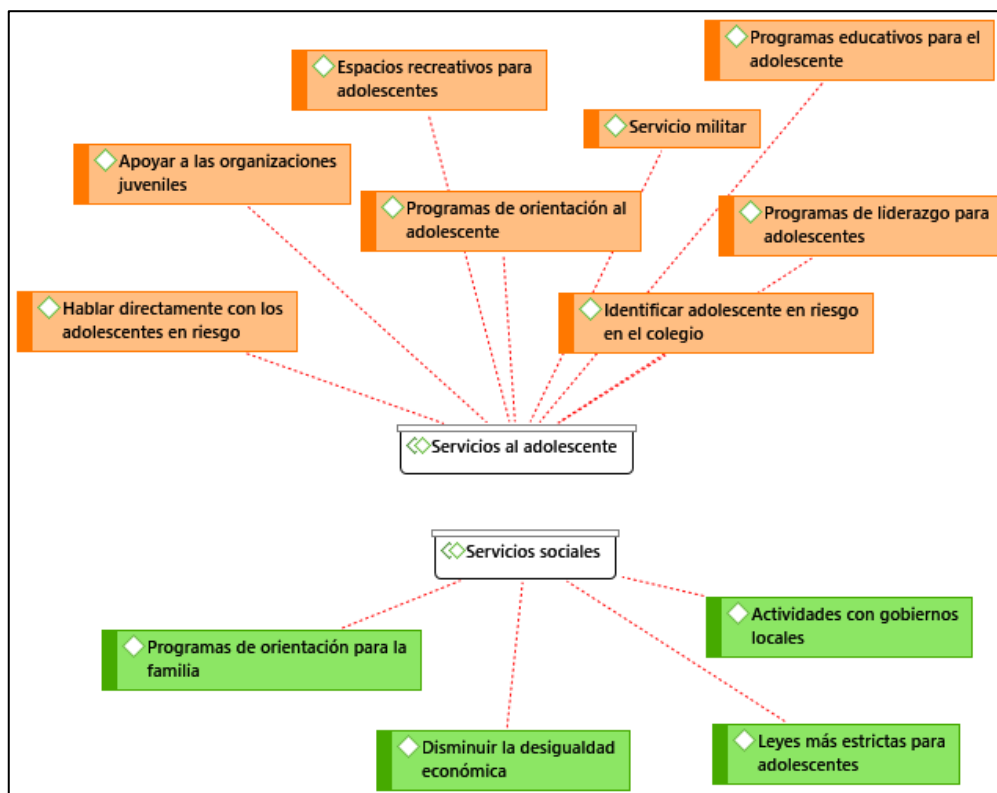


Figura 15. Representaciones sobre las soluciones de la delincuencia juvenil
Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC

Conforme desarrollan las dos anteriores figuras, los y las adolescentes tienen una percepción muy afín con la noción de multicausalidad del problema público. En este sentido, respecto a las causas hacen referencias no solo a un elemento como la familia o la comunidad, sino a todas ellas incluyendo la propia identidad



del adolescente o su personalidad respecto a las conductas de riesgo que va tomando en su vida.

De igual modo, en relación con las soluciones de la violencia y delincuencia juvenil, también plantean acciones multidimensionales espacios de socialización positivo, colegio, familia y trato psicológico directo con los y las adolescentes en riesgo. No obstante, respecto a esta última dimensión aún se evidencian representaciones sociales vinculadas a una cultura punitiva al sugerir elementos como la obligatoriedad del servicio militar e implementar leyes más estrictas hacia los y las adolescentes que están en riesgo o conflicto con la ley penal.

3.5.3.2. Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Con el apoyo de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, se desarrolló un taller participativo con el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia el cual reúne a diversos actores sociales muy importantes para promover, vigilar y realizar propuestas en torno al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en todo el Perú. De este modo se recibieron importantes aportes para la prevención y la justicia penal juvenil, tal como se desarrollan en la Tabla N°17 y 18:

Tabla N°17: Participación del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la construcción de la Política Nacional – Prevención

Prevención: Construcción del problema público y soluciones.
<p>Problema público:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abordaje ecológico y enfoque de curso de vida (entender el continuo de la vida y sus diversos contextos que lo influyen). Definición operacional del problema público (cómo medir). - Tomar en cuenta las directrices de Riad. - Incluir el enfoque de prevención social. - El problema está en el entorno del adolescente (familia, colegio y comunidad), no en el adolescente, pues esto sería criminalizar. - En el sistema de protección también debe estar vinculada con esta política de ACLP. NNA sin cuidados parentales. Pues también acoge factores de riesgo. - Diferenciar la trayectoria delictiva común (del proceso adolescente) poca gravedad y con un curso breve; y la trayectoria distintiva la cual es la más grave (diversos factores de riesgo) y responsable de la mayor parte de delincuencia. - Mejorar la definición de riesgo delictivo. - Se debe diferenciar en la definición del problema público general de los y las adolescentes en riesgo y conflicto con la ley penal. - Es importante la inclusión del enfoque preventivo, este es muy complejo y debe priorizarse. - La percepción de la sociedad sobre el problema: miran a la familia del adolescente la cual no lo apoya o cuida, la familia no se hace responsable de lo que le pasa al adolescente, los y las adolescentes son estigmatizados (todos son sicarios) pero no es así, en general a los y las adolescentes se los percibe como problemas o situación de crisis,



- Sobre la medición (operacionalizar): índice de vulnerabilidad social (diversos factores) a nivel regional.
- Aclarar los niveles de prevención en la política, para poder definir mejor las estrategias de intervención.

Soluciones:

- Incluir la labor del DL 1297, y que deben ser intervenciones más completas a modo de restitución de derechos. En la exposición de motivos incluye la prevención social. Mejorar las responsabilidades parentales.
- Fortalecer a las DEMUNA para la prevención.
- Garantizar el trabajo de implementación local a través del liderazgo en la gestión.
- Garantizar la focalización y priorización de zonas de riesgo (de forma más objetiva). Explicar el modo.
- Orientar y acompañar a los y las adolescentes en los colegios y apoyar en las familias.
- Adultos referentes o para ayudar fuera de la casa, modelos sociales que se convierten en factores protectores (prevención).
- Garantizar los servicios básicos (prevención primaria).
- Garantizar las posibilidades de empleo para las familias y los y las adolescentes al salir del colegio o los Centros de Atención Residencial, ello reduce los riesgos.
- Medios de comunicación para evitar que presenten de modo estigmatizante a los y las adolescentes.
- Que los factores de riesgo sean reconocidos por los diversos factores (identificación multisectorial de los factores de riesgo delictivo) Estrategia de identificación general temprana para cometer infracciones a la ley penal. Los sectores de salud, educación y otros deben generar algún protocolo. En otros países a esos niños le dan una atención especial (matan animales, son violentos, Etc.).
- Intervenir sobre la resiliencia familiar, sobrevivir a condiciones de riesgo. Vulnerabilidad laboral. Es muy importante pues esto expone a situaciones de riesgo para el adolescente. De todos los servicios básicos cubiertos el empleo es muy relevante. La pobreza es elemental.
- Intervenir sobre los elementos de desigualdad social, adolescentes que tienen dinero no ingresan al proceso de responsabilidad penal especial.
- Intervenir en los momentos críticos del desarrollo.
- Un punto relevante es la intervención en la reinserción social de los y las adolescentes, minimiza la exposición a condiciones de riesgo.
- Que participe el MIMP o el MINEDU.
- Incluir las mándalas de la resiliencia (prevención del crimen) intervenciones.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica – MINJUSDH

Tabla N°18: Participación del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la construcción de la Política Nacional – Justicia Penal Juvenil

Justicia Penal Juvenil: Construcción del problema público y soluciones.
<p>Problema público:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de educadores sociales para los ACLP. - Falta de atención diferenciada en los Centros Juveniles. - No hay articulación entre los servicios para la reinserción social. - No hay un post-seguimiento implementado para los y las adolescentes externados. - No hay información de emprendimiento para los ACLP. - Dificultades del sistema de protección. - Hacinamiento de los Centros Juveniles. - Estigmatización de los y las adolescentes. - Falta de priorización del trabajo en las familias para la reinserción social, por parte del Estado. - Falta de capacidad de respuesta de los servicios - No hay protección a los Derechos a la Salud en los Centros Juveniles. - Problemas con la defensa pública. - Se debe de tener en cuenta la edad de la mayoría

**Soluciones:**

- Falta de capacitación al personal.
- Realizar incidencia en el enfoque de la nueva justicia penal juvenil del CRPA.
- Se aplica una mirada punitiva tal como si fueran adultos.
- Considerar intervenciones particulares para la población LGTBI
- Se debe realizar una intervención diferenciada.
- No se toma en cuenta las poblaciones vulnerables
- Las medidas socioeducativas deben ser efectivas y reales. Que resocialicen.
- Se debe de cambiar la percepción que se tiene de los ACLP.
- Implementar una estrategia comunitaria de intervención preventiva.
- Tener un post seguimiento eficaz.
- Garantizar la formación en ACLP
- Se debe de tener un análisis sistemático actual de la información de los ACLP.
- Articular PRONACEJ con la intervención en general de los y las adolescentes.
- Ejecución de un modelo diferenciado con enfoque de derechos y de género.
- Ver que los servicios son los que realmente funcionan y deben ser replicados a nivel nacional.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica - MINJUSDH

Cabe resaltar que, estas observaciones y recomendaciones incluyen diversos compromisos recíprocos de la política nacional con la sociedad civil en el proceso de implementación nacional, regional y distrital.

3.5.3.3. Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa

Con el apoyo de la coordinación de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa se llevó a cabo una encuesta nacional virtual a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en los 12 Distritos Fiscales donde se desarrolla la dicha Línea de Acción respecto a sus percepciones sobre la participación de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la causas del problema pública de la presente política pública; asimismo, sobre el papel de la mencionada Línea de Acción en la reinserción social positiva de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal .

De este modo, tal como se describe en la figura 16 y 17, los y las adolescentes que participan de los programas de orientación perciben una contribución positiva del Ministerio Público con el problema social, aunque se evidencia una actitud más ambigua, en algunos casos positiva y otras negativas, en relación con la Policía Nacional del Perú. De igual modo, las representaciones que participan en la Línea de Acción consideran que este programa tiene un impacto positivo en la solución del problema social.

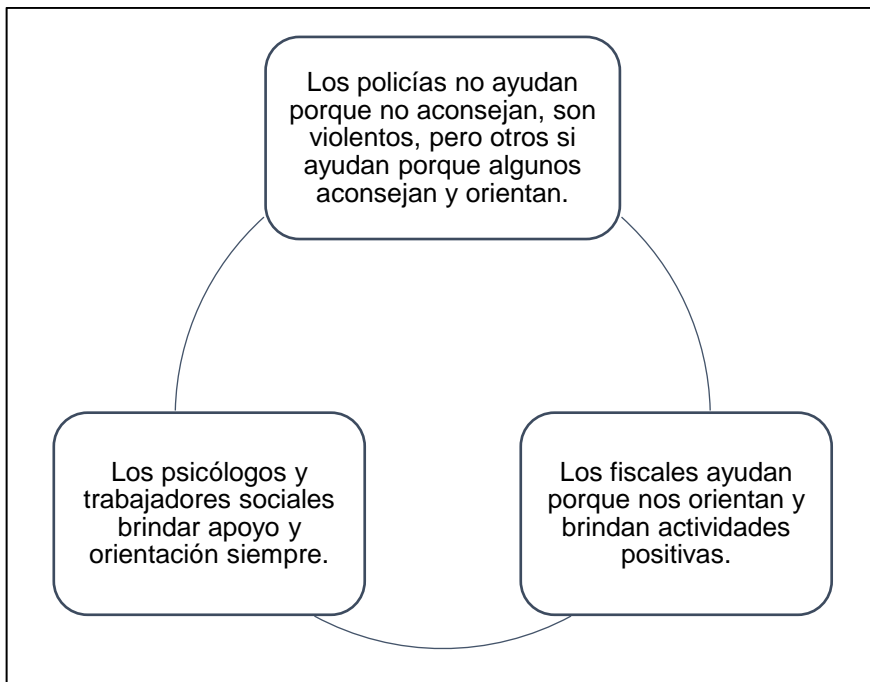


Figura 16. Representaciones sobre las causas del problema social en la Justicia Penal Juvenil

Fuente: Encuesta virtual a los ACLP de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa

Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC

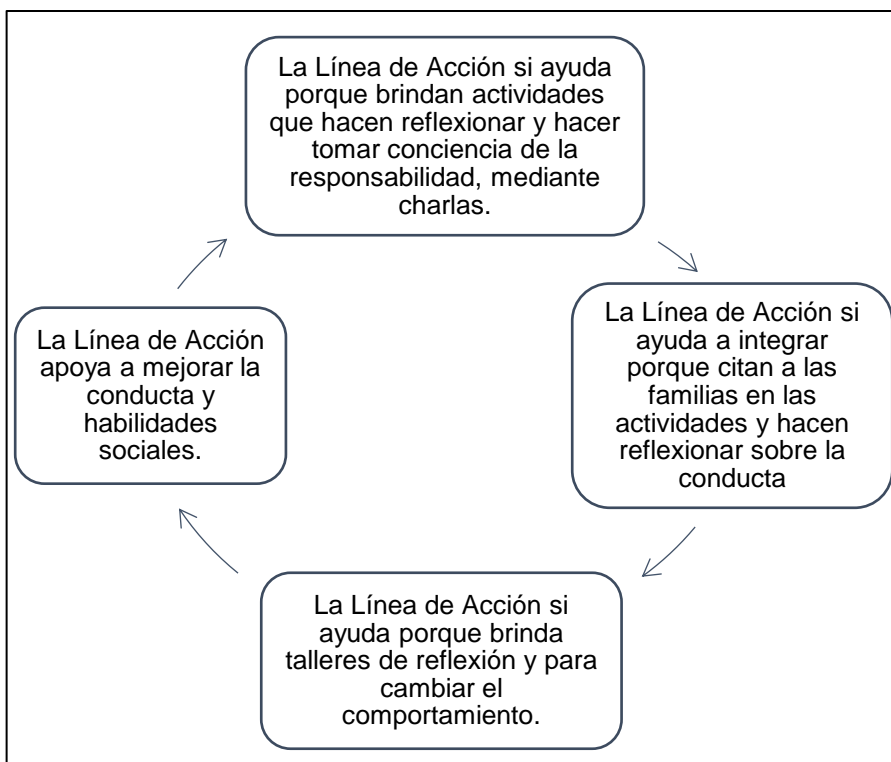


Figura 17. Representaciones sobre las soluciones del problema social en la Justicia Penal Juvenil

Fuente: Encuesta virtual a los ACLP de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa

Elaboración: MINJUSDH / DGAC – DPC



3.6. Situación futura deseada

Como resultado del análisis de los escenarios contextuales, riesgos y oportunidades se ha identificado que la proyección de las condiciones sociales y económicas en el Perú al 2030 impactan en el problema público relacionado con los contextos de violencia y delincuencia entorno al desarrollo del adolescente peruano.

En ese sentido, se espera que los y las adolescentes tengan mayores oportunidades para acceder a la Educación Superior, la cual les brinde las herramientas necesarias para insertarse al mercado laboral a través de un empleo decente y en condiciones de empleabilidad dignas. Sin embargo, la desigualdad general se mantendrá permitiendo el mantenimiento de comunidades con violencia. Asimismo, a pesar de que la inestabilidad económica global afecte al Perú, el mantenimiento de un presupuesto suficiente para ejecutar acciones en beneficio de la niñez y adolescencia es posible. También, se presentará un mantenimiento en la desconfianza y crisis de las instituciones públicas, no obstante, la agenda a favor de la niñez y adolescencia será una línea de mayor consenso para ejecutar políticas en pro de su desarrollo.

Por otro lado, la exigencia del mercado laboral será más sofisticada y especializada lo cual obliga al Estado a brindar mayores oportunidades de desarrollo educativo en los y las adolescentes. Asimismo, la disminución del crecimiento económico acompañado de desigualdad mantendrá el surgimiento de comunidades urbano-marginales donde se establezcan grupos de delincuencia-violencia común cercanos al desarrollo adolescente. Finalmente, la presencia de catástrofes naturales afecta de forma más intensa a la niñez y adolescencia, ello implica mayores limitaciones y barreras para su desarrollo y logro de objetivos de vida a nivel educativo, familiar y comunitario.

En efecto, los espacios de socialización con violencia, desigualdad e inseguridad, según las proyecciones al 2030, tenderán a mantenerse, no obstante la capacidad presupuestal y la agenda pública a favor del bienestar del desarrollo del adolescente permitirán ejecutar políticas a favor del desarrollo adolescente que permita eliminar las actuales condiciones o contextos criminógenos en los cuales viven muchos adolescentes en el Perú evidenciados en diversos factores de riesgo criminógeno a nivel familiar, educativo y comunitario.

Con las intervenciones que establece la política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal, al año 2030, el contexto criminógeno de los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal habrá decrecido en un 11% en relación con los factores riesgos asociados a los delitos comunes (de 31% a un 20%) y el nivel de gravedad para las infracciones contra la libertad sexual disminuirá en 7 puntos (16 al 9), entendida esta última como la reducción significativa del número y nivel de gravedad de adolescentes que cometen infracciones contra la libertad sexual, conforme se puede apreciar en las fichas de indicadores del Anexo 05 al presente documento. Cabe resaltar que, estos delitos son los más frecuentes y con mayor impacto en la criminalidad que se producen entre los y las adolescentes de 14 y menos de 18 años. La



aplicación focalizada de programas especializados, y multisectoriales por parte del Estado, permitirán fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo criminógeno, evitando una activa vinculación a contextos criminógenos en las instancias más nucleares de socialización: instituciones educativas, familias y comunidades.

Asimismo, al año 2030, el contexto criminógeno en los y las adolescentes en conflicto con la ley penal se habrá reducido por medio de la atención en un 60% de servicios especializados a nivel del sistema penal juvenil, es decir, se buscará garantizar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo N°1348) al 2027 aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2023-JUS y la puesta en marcha de estrategias presupuestales en las instituciones de la administración de justicia juvenil y la generación de herramientas como el programa presupuestal orientado por resultados.

En este sentido, la aplicación de un modelo de justicia penal juvenil especializado, que brinda protección integral, reinserción social constructiva, bajo el modelo acusatorio-garantista, ha permitido alcanzar la meta de implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el año 2027, con el compromiso de la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Al 2030, se habrá priorizado la desjudicialización a través de salidas alternativas y mecanismos restaurativos, reparado los derechos vulnerados de los y las adolescentes y las víctimas; asimismo, los Centros Juveniles y la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa utilizarán un modelo de intervención diferenciada basado en gestión del riesgo, justicia restaurativa, y la priorización de enfoques alternativos y que eviten la vulneración de los derechos de los y las adolescentes, y cuyas estrategias de actuación muestren evidencia científica en coherencia con la protección de sus derechos fundamentales.

Además, se garantiza los derechos de los y las adolescentes privados de libertad, particularmente en las condiciones de salud asociadas al contagio de enfermedades virales. En suma, todas estas acciones buscan brindar mayores niveles de protección de los derechos de los y las adolescentes lo cual se corresponde con la exigencia de la población por mayor atención y servicios a los y las adolescentes que están en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Finalmente, durante la implementación de la Política Nacional diversas variables socioeconómicas en el Perú afectarán la posibilidad de que los objetivos prioritarios se logren; en este sentido, tal como se observa en el Anexo 02 al presente documento, se identificaron las tendencias que guardan relación con el problema público de la Política analizando sus características; y se identificaron los riesgos y oportunidades asociados a cada tendencia para evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene sobre la Política Nacional a través de un puntaje en un intervalo de 1 a 5; de igual modo, se identificaron los escenarios contextuales y los riesgos y oportunidades vinculados, estableciendo un puntaje referido a su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial en un intervalo de 1 a 5.



3.7. Alternativas de solución

Se han identificado tres causas principales (dimensión preventiva, justicia penal juvenil y reinserción social) que convergen en el problema principal el cual determina la condición actual de muchos adolescentes y ACLP. En tal sentido, se han determinado un conjunto de intervenciones utilizadas para enfrentar las causas del problema público.

De este modo, en el análisis sobre los factores de riesgo criminógeno y protección, la experiencia y la evidencia sobre los programas y servicios sociales que se centran en niños, niñas y adolescentes han identificado como mejor estrategia a la prevención (Loeber et al., 2003)⁶. Las estrategias con enfoque preventivo (primario, secundario y terciario), a nivel global, se han posicionado como prioritarias debido a que se consideran un aspecto nuclear de política e inversión pública, y la mayor evidencia por el análisis e intervención en factores protectores y de riesgo; además, estas actuaciones guardan coherencia con aspectos fundamentales como el interés superior del menor y el principio de intervención mínima (Muggah, Garzón y Suárez, 2018; Macleod, Grove y Farrington, 2012)⁷.

Con el objetivo de prevenir las conductas antisociales y la delincuencia de jóvenes, se han desarrollado cuatro clases de intervención preventiva (Werth, 2006)⁸: 1) Los programas de reinserción social que se establecen en el sistema de justicia penal juvenil; 2) Las estrategias de prevención situacional cuyo objetivo es reducir oportunidades mediante la modificación del entorno físico; 3) El cambio de condiciones de vida de las comunidades incrementando la cohesión social; y 4) Fortalecimiento de factores protectores y disminuyendo los de riesgo que afectan a niños y adolescentes, reduciendo las conductas antisociales. Estas últimas clases de prevención se desenvuelve en los diversos contextos de desarrollo de los y las adolescentes y forman parte de la oferta de servicios de los Estados para brindar una atención integral⁹. De igual modo, conforme establece los principios de criminología del desarrollo ningún factor de riesgo es suficiente para explicar el comportamiento infractor o delictivo de los jóvenes, sin embargo, en aquellos que desarrollan trayectorias tendientes a continuar como estilo o trayecto de vida en delito se agrupan una multiplicidad de factores perjudiciales y condiciones de vulnerabilidad (Farrington y Ttofi, 2015)¹⁰.

⁶ Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber, M., &White, H.R. (2008). Violence and serious theft: Development and prediction from childhood to adulthood. New York: Routledge.

⁷ Muggah, R; Garzón, J y Suárez, M. (2018). La "Mano Dura": Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina. Instituto Igarapé. Recuperado de: <https://igarape.org.br>; y, Macleod, J., Grove, P. G. y Farrington, D. P. (2012). Explaining Criminal Careers. Implications for Justice Policy. Oxford: Clarendon Pres.

⁸ Werth, F. (2006). Prevención social del delito: pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana

⁹ Véase el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México, el Plan Nacional de Prevención del Delito de Argentina, y la Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil en Guatemala.

¹⁰ Farrington y Ttofi (2015). Developmental and Life-Course Theories of Offending. En Morizot, Julien & Kazemian, Lila. (Edts.). The Development of Criminal and Antisocial Behavior.



Dentro del marco general de las estrategias de prevención del crimen, tanto en adolescentes como adultos se definen tres tipos de prevención¹¹ los cuales permiten organizar las principales acciones o alternativas para resolver el problema público planteado, en este caso se consideran la de orientación social y comunitaria, tal como se describe a continuación:

1. **Prevención social:** Basada en las teorías del desarrollo que se orienta a intervenir en las condiciones sociales de los individuos. La forma en que se divide la prevención social del delito se fundamenta en el tipo de población destinataria:
 - a. **Primaria:** Programas o iniciativas destinadas a las personas que nunca se han visto implicadas en el sistema de justicia penal.
 - b. **Secundaria:** Programas dirigidos especialmente a los niños, niñas y jóvenes que, previa determinación de los servicios sociales o los sistemas de educación y justicia, corran el riesgo de verse implicados en actos infractores o están en condiciones de riesgo criminógeno.
 - c. **Terciaria:** Programas destinados a las personas que ya han tenido contacto en el sistema de justicia penal y/o que van a reinsertarse en la comunidad, y tiene como fin prevenir la reincidencia.
2. **Prevención situacional:** No es una prevención "evolutiva" sino "inmediata", que implica un cambio en el problema, pero no una solución. Está centrada en la modificación ambiental y física del contexto para brindar una menor oportunidad delictiva.
3. **Prevención comunitaria:** Se refiere a la combinación de iniciativas de prevención de partes interesadas locales que están diseñadas para alterar las normas y condiciones sociales e institucionales de un medio específico.

En base a la revisión de las estrategias de acción que han demostrado ser efectivas para la prevención secundaria y terciaria de la delincuencia juvenil y considerando la estructura del problema público se delimitarán los instrumentos de implementación vinculados con los mismo, tal como sigue a continuación:

1. **Económicos:** Aquellos programas sociales a nivel educativo, familiar y social que permitan generar servicios de protección y restitución de derechos de los y las adolescentes particularmente los que están en riesgo o en contacto con la ley penal.
2. **Informativos:** En el marco de la reforma de la justicia penal dirigido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el principal instrumento informativo es la capacitación y especialización en el marco del D.L. 1348 y su reglamento.

¹¹ Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).



3. Reguladores: En el marco de la implementación del D.L. 1348 se buscan desarrollar reformas normativas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

En base a ello, se ha evaluado la viabilidad política, social y administrativa, así como la efectividad de un conjunto de alternativas de solución desarrolladas en la Tabla N°19, tal como se muestra a continuación

Tabla N°19: Matriz de evaluación de alternativas de solución

Causa directa	Alternativa	Sustento	Viabilidad			Efec.	Total	Seleccionada
			Pol.	Soc.	Adm.			
1. Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	Programas de intervención focalizados en instituciones educativas de alto riesgo.	Intervenciones basadas directamente en la escuela, en comunidad y escuela consisten en el contacto con los principales actores escolares para promover su participación activa en la prevención social del delito. Los programas de Lifeskills training, Coping, Power, Aulas en Paz y basadas en intervenciones escolares han tenido mayor acogida por sus idóneas evidencias.	5	5	3	4	17	SI
	Programas para brindar lecciones en el aula contra la violencia y para prevenir el abuso escolar.	Las intervenciones basadas en incluir unidades curriculares en el aula, así como prohibir directamente la agresión en el entorno escolar no reportan eficacia para prevenir las conductas delictivas (Farrington y Tfoi, 2010 en CrimeSolutions, 2016; Wong, 2009 en CrimeSolutions, 2016; Polanin et al., 2012 en CrimeSolutions, 2016).	4	4	2	1	11	NO
	Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas.	Acompañamiento de modo cercano, en casa, durante el proceso de cambio y seguimiento para el fortalecimiento familiar. Los programas Home Start, Incredible Years, Parent Management Training, Parents Plus Children's Programme, Nurse Family, Parent Management Training.	5	5	3	4	17	SI
	Programas comunitarios para mejorar el contexto social y comunitario.	Los programas de mentoría pretenden generar modelos y guías de apoyo al adolescente, así como, el programa de comunidades seguras y protectoras consiste en proceso de capacitación y movilización de líderes comunales para la protección del adolescente. Las revisiones sistemáticas de Tolan (2008 y 2014), basados en diversos programas bajo el enfoque de mentorías, y Communities Care, Prosper, New Perspectives.	5	5	3	4	17	SI
	Estrategias basadas en actividades deportivas en la comunidad con	Las acciones que promueven actividades deportivas en la comunidad, colegios, clubes u otros no tienen una vinculación directa con la prevención de la	4	4	2	1	11	NO



Causa directa	Alternativa	Sustento	Viabilidad			Efec.	Total	Seleccionada
			Pol.	Soc.	Adm.			
	adolescentes y niños.	delincuencia juvenil (Spruit, Vugt, Put, Stouwe, y Stams, 2016).						
	Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.	Los programas que trabajan en los diversos contextos de desarrollo como la familia, escuela y comunidad para poder orientar y fortalecer el desarrollo de la sexualidad a nivel cognitivo, emocional y actitudinal en niños y adolescentes han mostrado contribuir con la prevención futura de abuso y agresiones sexuales (Wright, Zounlime y Whiston, 2018; Rothman, 2016; Boyes, Hornick y Ogden, 2010).	5	5	3	4	17	SI
2. Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	Implementación de cuerpos normativos a nivel sustantivo y adjetivos para la aplicación de justicia penal juvenil	El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes tiene una finalidad educativa, un enfoque de justicia restaurativa; y, está orientado a la desjudicialización, a garantizar una menor vulneración de derechos de los ACLP, posibilitando la reinserción social de aquellos y la reparación a la víctima. A nivel de internacional se han realizado diversas normas análogas: Código Niña, Niño y adolescente – Bolivia Código de la infancia y la adolescencia – Colombia Ley de justicia penal juvenil – Costa Rica Código de la niñez y adolescencia – Ecuador Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores - España Ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes – México.	5	5	4	4	18	SI
	Priorización de formación en la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal para la reforma de la administración de justicia juvenil	Un elemento relevante para la inclusión de servicios especializados es la capacitación, de este modo, la implementación realizada en la región ha identificado el papel crucial que tiene la capacitación para poder entregar un servicio efectivo en la justicia penal juvenil (Asesoría Técnica Parlamentaria de Chile, 2018).	5	5	4	4	18	SI
	Medidas represivas y reducción de garantías procesales a los adolescentes y las en conflicto con la ley penal.	Las legislaciones de emergencia punitivas, operaciones policiales agresivas, leyes con sentencias obligatorias, reducción de la edad de imputabilidad penal, encarcelamiento masivo y el endurecimiento de las penas no está correlacionado con la disminución de la delincuencia juvenil y la inseguridad ciudadana (Muggah, Garzón y Suárez, 2018)	4	4	2	1	11	NO



Causa directa	Alternativa	Sustento	Viabilidad			Efec.	Total	Seleccionada
			Pol.	Soc.	Adm.			
	Priorizar medidas alternativas al proceso judicial para el fortalecimiento de la justicia juvenil bajo modelos restaurativos.	Las prácticas restaurativas y la justicia terapéutica en la justicia penal juvenil han mostrado ser más efectivas y garantizar el respeto de los derechos fundamentales, así como el ejercicio para la reintegración social sin privación de la libertad, de este modo, la reiterancia de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal que salen del programa tiene un porcentaje bajo.	5	5	5	4	19	SI
3.Limitada intervención para la reinserción social	Implementación de modelos de reinserción social con enfoque de criminología del desarrollo y RNR.	Estrategias de intervención diferenciada basadas en evidencia empírica y científica, respecto a los modelos de gestión del riesgo y enfocadas en la reinserción social de los ACLP tanto en la etapa prejudicial y judicial. Intervención familiar multisistémica. Gestión del riesgo RNR Modelos de Buenas Vidas – factores de protección Programa de intervención post seguimiento. Programas especializados para drogas, violencia sexual y conductas altamente violentas (Andrews y Bonta, 2006)	5	5	3	4	17	SI
	El tratamiento no basado en enfoques cognitivo-conductuales y en contextos naturalistas.	La intervención centrada en psicoterapias inespecíficas, servicio militar y la disciplina o disuasión para la reinserción no tiene evidencia para la disminución de los factores de riesgo o la integración en la comunidad (Redondo, 2008).	3	3	2	1	9	NO
	Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social	Las redes locales de entidades privadas y públicas dirigidas al apoyo de los Centros Juveniles y la Línea de Acción en Justicia Juvenil restaurativa forman parte de la estrategia fundamental para la reintegración a la comunidad por parte del adolescente, siendo evidencia clave en las estrategias de reinserción a nivel regional.	5	5	3	4	17	SI
	Programas de intervención basados en comunidades terapéuticas	Las intervenciones basadas en contextos no naturales o en residencia específicas donde se brindan intervenciones centrados en aspectos psicopatológicos no brindan una contribución significativa en la reinserción social (Sánchez Meca y Redondo, 2002)	3	3	2	1	9	NO
	Implementar programa para la inclusión laboral mediante vínculos con el sector privado	Debido a que la gran mayoría de adolescente reinsertados ha cumplido la mayoría de edad el incremento de oportunidades de trabajo puede contribuir de forma óptima en su reinserción social. Así mismo, es	5	5	3	4	17	SI



Causa directa	Alternativa	Sustento	Viabilidad			Efec.	Total	Seleccionada
			Pol.	Soc.	Adm.			
		fundamental para la sostenibilidad de la reinserción social, de modo que la inclusión educativa y laboral puedan garantizar la no reincidencia del adolescente.						

Legenda:

Pol: Política

Soc: Social

Adm: Administrativa

Efec: Efectividad

*Escala de 1 al 5 para la viabilidad y efectividad conforme a la Guía de Políticas Nacionales, donde 1 represente el menor nivel y se incrementa de forma ascendente hasta llegar a 5 como nivel máximo.

En efecto, en la Tabla N°20 se presentan un conjunto de alternativas de solución elegidas para cada una de las tres causas del problema público, de modo que, se han elaborado diversas alternativas en base a programas y/o estrategias ya aplicadas anteriormente y que muestran evidencia. Cabe resaltar que, de todas las alternativas elaboradas solo la "7. Fortalecer la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa con la implementación en todos los distritos fiscales a nivel nacional" se viene trabajando por parte del Ministerio Público, las otras acciones son nuevas e implican una implementación multisectorial.

Tabla N°20: Matriz de alternativas de solución seleccionadas y priorizadas

Causa	Causas indirectas	Alternativas	Alternativa elaborada	Tipo
Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	1.5 Prevalencia de la deserción escolar 1.7 Instituciones educativas con elevados niveles de violencia.	Programas de intervención focalizados en instituciones educativas de alto riesgo. Programas para brindar lecciones en el aula contra la violencia y para prevenir el abuso escolar.	1. Programas de intervención focalizados en instituciones educativas.	Económicos
	1.4 Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes. 1.6 Adultos responsables con conductas	Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas.	2. Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas.	Económicos



Causa	Causas indirectas	Alternativas	Alternativa elaborada	Tipo
	antisociales y/o en delito. 1.8 Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia. 1.9 Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria)			
	1.1 Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad 1.2 Presencia de pares con conductas antisociales 1.3 Consumo problemático de alcohol y otras drogas 1.12 Desigualdad y exclusión social 1.13 Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación	Programas comunitarios para mejorar el contexto social y comunitario.	3. Programas sociales para mejorar el contexto social y comunitario mediante la priorización de supervisión y protección de adolescente en riesgo para la violencia y delincuencia.	Económicos
	1.10 Deficiente fortalecimiento de los factores protectores 1.11 Desarrollo psicosexual deficiente.	Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.	4. Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.	Económicos
Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	2.4 Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial 2.5 Bajo nivel de coordinación	Implementación de cuerpos normativos a nivel sustantivo y adjetivos para la aplicación de justicia penal juvenil	5. Implementación progresiva a nivel nacional del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. N°1348).	Regulador



Causa	Causas indirectas	Alternativas	Alternativa elaborada	Tipo
	y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil 2.1 Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso			
	2.7 Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos. 2.3 Priorización de medidas socioeducativas de internación	Priorización de formación en la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal para la reforma de la administración de justicia juvenil	6. Ejecutar programas de formación permanente para brindar una justicia diferenciada y especializada.	Informativo
	2.2 Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas 2.6 Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas	Priorizar medidas alternativas al proceso judicial para el fortalecimiento de la justicia juvenil bajo modelos restaurativos.	7. Fortalecer la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa con la implementación en todos los distritos fiscales a nivel nacional.	Regulador
Limitada intervención para la reinserción social	3.1 Limitado personal especializado y de intervención diferenciada 3.2 Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados 3.3 Centros Juveniles al límite de su capacidad 3.4 Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social	Implementación de modelos de reinserción social con enfoque de criminología del desarrollo y RNR.	8. Ejecución de un modelo de intervención diferenciada con enfoque de derechos.	Regulador



Causa	Causas indirectas	Alternativas	Alternativa elaborada	Tipo
	<p>3.5 Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado</p> <p>3.7. Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto</p> <p>3.8 Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado</p> <p>3.11 Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado</p>			
	<p>3.6 Escasas actividades de seguimiento post-egreso</p> <p>3.9 Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo</p> <p>3.10 Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas.</p>	<p>Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social</p> <p>Programas de intervención basados en comunidades terapéuticas</p>	<p>9. Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social.</p>	<p>Informativo</p>
	<p>3.6 Escasas actividades de seguimiento post-egreso</p> <p>3.4 Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social</p>	<p>Implementar programa para la inclusión laboral mediante vínculos con el sector privado</p>	<p>10. Fortalecer la reinserción laboral y educativa por medio de la articulación y coordinación con el sector privado para la inclusión laboral y educativa de los y las ACLP.</p>	<p>Informativo</p>



IV. OBJETIVOS PRIORITARIOS

4.1. Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores

Los objetivos prioritarios representan el aspecto central de la política nacional multisectorial en tanto que describen los cambios específicos que se desea alcanzar en materia de la política criminológica para prevenir el crimen y la reforma de la justicia penal juvenil, de modo que, orientan las acciones del Estado para alcanzar la situación futura deseada.

Cabe resaltar que, dichos cambios tienen un horizonte temporal que va hasta culminar el año 2030 en la medida que la reforma de la justicia penal juvenil culminaría en el año 2026 con la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (en adelante CRPA) y se necesitan tres años más para consolidar o fortalecer dicha implementación; de igual modo, los impactos de las actividades de prevención crimen implican evaluaciones a largo plazo¹².

Los objetivos prioritarios (OP) están directamente relacionados con las causas que originan el problema público tal como se presenta en la Tabla N°21.

Tabla N°21: Relación entre las causas del problema público y los objetivos prioritarios

Causas	Subcausas	Objetivos prioritarios
Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad • Presencia de pares con conductas antisociales • Consumo problemático de alcohol y otras drogas • Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes. • Prevalencia de la deserción escolar • Adultos responsables con conductas antisociales y/o en delito • Instituciones educativas con elevados niveles de violencia • Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia. • Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria) • Deficiente fortalecimiento de los factores protectores 	Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor

¹² Shane D. Johnson, Nick Tilley & Kate J. Bowers. (2015). *Introducing EMMIE: an evidence rating scale to encourage mixed-method crime prevention synthesis reviews.*



	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo psicosexual deficiente. • Desigualdad y exclusión social • Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación 	
Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso • Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas • Priorización de medidas socioeducativas de internación • Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial • Bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil • Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas • Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos 	Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Limitada intervención para la reinserción social	<ul style="list-style-type: none"> • Limitado personal especializado y de intervención diferenciada • Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados • Centros Juveniles al límite de su capacidad • Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social • Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado • Escasas actividades de seguimiento post-egreso • Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto • Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado • Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo • Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas • Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado 	Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal



Las causas asociadas a los y las adolescentes cuyo contexto de desarrollo se caracteriza por la presencia de factores criminógenos a nivel nacional se relacionan con el OP 1 ya que se orienta a su reducción. De igual modo, los factores asociados con la vulneración de derechos que se presentan actualmente en todo el proceso de justicia juvenil están vinculadas con la OP2 ya que pretender fortalecer el enfoque especializado y diferenciado de la justicia penal juvenil. Finalmente, las causas vinculadas con la ineficiencia y garantía de la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal (en adelante ACLP) se relacionan con el OP3 orientando las estrategias de acción hacia el fortalecimiento de un sistema de reinserción prejudicial y judicial que busque garantizar el mayor número de adolescentes en conflicto con la ley penal reintegrados a la sociedad.

Objetivo prioritario 1 (OP1): Reducir la concentración de condiciones de riesgo de los y las adolescentes en riesgo infractor

Este objetivo, pretende que los y las adolescentes se desarrollen de forma integral para evitar la inclusión en proyectos de vida en criminalidad a través de la disminución de los factores de riesgo criminógenos que la evidencia ha relacionado y fortalecer los principales sistemas de socialización los cuales son la familia, la comunidad y la institución educativa, de modo que, sean espacios de protección y promoción de los factores protectores específicos.

El OP1 responde a la causa directa 1 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones para disminuir factores de riesgo criminógeno en general e impulsar los factores protectores que contribuyan en la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno. Dicha causa describe la realidad de un grupo significativo de adolescentes a nivel nacional cuyo contexto de desarrollo psicosocial perjudica su desarrollo en la medida que hay presencia de delincuencia en su comunidad, grupos de iguales con conductas antisociales, consumo problemático de drogas, familias con deficientes competencias parentales, familias que presentan incidencia de violencia, deserción escolar, familias en delito o conductas antisociales, violencia en las instituciones educativas, muy limitada presencia de programas de prevención social del crimen, desarrollo psicosocial deficiente, desigualdad y estigmatización de la adolescencia.

Objetivo prioritario 2 (OP2): Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil

Este objetivo pretende asegurar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal alineados al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. Así como, el fortalecimiento de las estrategias y programas vinculados a las salidas alternativas al proceso judicial, así como enfoques alternos como la justicia juvenil restaurativa y la justicia terapéutica.

El OP2 responde a la causa directa 2 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones desde el sistema de justicia penal juvenil



para priorizar las medidas alternativas al proceso y la reinserción social, así como la reparación a la víctima. En este sentido, a lo largo de todo el proceso de atención al adolescente en conflicto con la ley penal, desde la Policía Nacional del Perú hasta el Poder Judicial, se han identificado diversas dificultades para brindar los servicios. Es así que, hay insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso y ejecución de prácticas restaurativas, excesivas medidas de internación, insuficientes servicios especializados, bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil, limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas y aplicación de múltiples políticas con enfoques represivos-punitivos.

Objetivo prioritario 3 (OP3): Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal

Este objetivo dispone alcanzar los niveles más altos de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal durante la ejecución de las medidas socioeducativas en los Centros Juveniles, así como durante la intervención de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa y su programa de orientación en el marco de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

El OP3 responde a la causa directa 3 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones desde los servicios de reinserción social basados en los modelos de gestión de riesgo de violencia y la justicia juvenil restaurativa. En efecto, el OP3 surge ante la situación actual de limitada reinserción social representada por la falta de personal especializado y de instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo, existencia de centros juveniles al límite de su capacidad, deficiente infraestructura, inefectivos controles de seguridad en los centros juveniles, escasas actividades de seguimiento post-egreso, ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto, ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado, insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo, deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas y el amplio desarraigo familiar de las adolescentes en conflicto con la ley penal en los Centros Juveniles de medio cerrado. Todo ello conlleva a que las actividades dirigidas a la reintegración del o la adolescente a su familia y comunidad sean poco efectivas.

Formulados los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y Conflicto con la Ley Penal, se identificaron los sectores responsables de su cumplimiento considerando las competencias y funciones, estos son: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, Programa Nacional de Centros Juveniles, Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



La siguiente Tabla N°22 desarrolla los objetivos prioritarios, indicadores, metas al 2030 y los responsables, así mismo, en el Anexo 05 se desarrollan las fichas por cada indicador.

Tabla N°22: Matriz de objetivos prioritarios e indicadores

Código	Objetivos Prioritarios	Indicadores	Logro al 2030	Lineamientos	Responsables del objetivo
OP1	Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.	1.1. Índice de adolescentes con factores de riesgo para la delincuencia común.	20%	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	MINJUSDH, MIMP, MINSA, MTPE, MINEDU, y DEVIDA.
		1.2. Promedio de meses de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracciones contra la libertad sexual.	9	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	
				1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios de comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	
OP2	Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil	2.1. Porcentaje de distritos judiciales a nivel nacional que cuentan	100%	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio



Código	Objetivos Prioritarios	Indicadores	Logro al 2030	Lineamientos	Responsables del objetivo
		con servicios especializados en justicia penal juvenil		2.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.	del Interior-Policía Nacional del Perú y MINJUSDH.
		2.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no perciben vulneración de derechos.	75%	2.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas	
OP3	Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal.	3.1. Porcentaje de adolescentes que reingresan a un centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa, por procesos distintos.	4.5%	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	MINJUSDH y Ministerio Público
		3.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que reiteran en infracciones a la ley penal.	5%	3.2. Establecer redes públicas y privadas para el apoyo a la reinserción de las y los ACLP	

V. LINEAMIENTOS

A través de los lineamientos se concretizan los objetivos prioritarios en los y las adolescentes en riesgo y conflicto con la ley penal. Para obtener el impacto esperado de la política nacional se requiere que, en coherencia con los modelos, enfoques y alternativas de solución planteados, los gobiernos nacionales y subnacionales desarrollen diversas intervenciones en base a los siguientes lineamientos que se describen en la siguiente Tabla N°23, organizados por objetivos prioritarios.

Tabla N°23. Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos

CAUSAS	SUBCAUSAS	LINEAMIENTOS	OBJETIVO PRIORITARIO
Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad Presencia de pares con conductas antisociales Consumo problemático de alcohol y otras drogas 	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de	OP 1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo en los y las adolescentes



CAUSAS	SUBCAUSAS	LINEAMIENTOS	OBJETIVO PRIORITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> Prevalencia de la deserción escolar Instituciones educativas con elevados niveles de violencia Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia. Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria) Desarrollo psicosexual deficiente. 	riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	en riesgo infractor
	<ul style="list-style-type: none"> Deficiente fortalecimiento de los factores protectores Adultos responsables con conductas antisociales y/o en delito. Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes. 	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	
	<ul style="list-style-type: none"> Desigualdad y exclusión social Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación. 	1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios de comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	
Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	<ul style="list-style-type: none"> Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial Bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas 	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	OP 2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
	<ul style="list-style-type: none"> Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos. Priorización de medidas socioeducativas de internación. 	2.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.	



CAUSAS	SUBCAUSAS	LINEAMIENTOS	OBJETIVO PRIORITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas 	2.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas	
Limitada intervención para la reinserción social	<ul style="list-style-type: none"> Limitado personal especializado y de intervención diferenciada Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados Centros Juveniles al límite de su capacidad Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo <ul style="list-style-type: none"> Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas. 	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	OP 3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
	<ul style="list-style-type: none"> Escasas actividades de seguimiento post-egreso Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado. 	3.2. Establecer redes públicas y privadas para el apoyo a la reinserción de las y los ACLP	

De este modo, tal como se desarrolla en la Tabla N°23, respecto al OP1, el lineamiento 1.1. pretende orientar la ejecución de intervenciones sociales a nivel familiar, escolar y comunitario en los factores de riesgo delictivo, es decir, aquellos factores tempranos que impidan la configuración de personas involucradas en el delito, principalmente entre fines de la niñez e inicios de la adolescencia. En relación con el 1.2. se establece la ejecución de intervenciones sociales a nivel familiar, escolar y comunitario para fortalecer los factores protectores como la resiliencia, habilidades sociales y actitudes prosociales, es decir, aquellos factores que favorecen el desarrollo positivo del niño, niña o adolescente en riesgo criminógeno. Finalmente, sobre el lineamiento 1.3., se busca la realización de campañas de sensibilización sobre los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en cualquier medio de comunicación local o a nivel de la comunidad, con el objetivo de evitar la criminalización y estigmatización de los y las adolescentes.



En relación con el OP2, el lineamiento 2.1. establece que las instituciones de la administración de la justicia penal juvenil deben alinear sus objetivos estratégicos vinculados con la atención de los y las ACLP de modo que, además, de los servicios especializados ya definidos en el CRPA también se tienen que incluir nuevos programas que permitan brindar oportunidades al adolescente que ha ingresado a un proceso de responsabilidad penal especial. Asimismo, el lineamiento 2.2. señala que todas las instituciones de la administración de justicia penal juvenil tienen iniciativa legislativa y pueden aprobar normas de alto nivel que contribuyan con fortalecer el enfoque restaurativo y no punitivo en el sistema de normas de la justicia penal juvenil. De este modo, las principales reformas o propuestas deben considerar aspectos como la edad de responsabilidad penal, las alternativas al proceso judicial, la duración de las medidas socioeducativas y la justicia juvenil restaurativa para la regulación en justicia penal juvenil. Por último, el lineamiento 2.3. en el marco del enfoque que busca evitar atender al ACLP por medio de medidas sancionadoras, la justicia terapéutica se centra en analizar alternativas menos perjudiciales para las partes, entre las que destaca la mediación u otra salida alternativa, donde se centra la acción o servicios en medidas terapéuticas que aporten bienestar a los individuos para alcanzar de forma más humana y eficiente un fin común. Por ello se proponen la creación de cortes de drogas, cortes de violencia familiar y tribunales especializados en justicia juvenil.

Finalmente, respecto al OP3, el lineamiento 3.1. establece que para las acciones de reinserción social dirigido a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el sistema de justicia juvenil debe incluirse en paradigma de gestión de riesgo y criminología del desarrollo, así como los enfoques de desistimiento delictivo con evidencia empírica asociada a la justicia juvenil diferenciada de la adulta. Los servicios deben fundamentarse en procesos de evaluación, intervención y seguimiento que se centren en los factores que contribuyen con la disminución de factores de riesgo más prioritarios para cada caso individualizado. Por otro lado, con el objetivo de garantizar la reinserción o reintegración constructiva a la sociedad de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal que culminan el servicio de reinserción los gobiernos regionales y locales, así como las organizaciones privadas a nivel educativo y laboral deben crear mecanismos de coordinación para asegurar la inclusión del joven o adolescentes a las actividades de formación educativa o de trabajo con el objetivo de evitar la continuidad de las trayectorias delictivas.

VI. PROVISIÓN DE SERVICIOS

6.1. Lista de servicios

La presente política multisectorial busca establecer acciones desde el Estado peruano para contribuir con la disminución del crimen a nivel nacional. El problema específico que se pretende contrarrestar es la inclusión de los y las adolescentes a las actividades delictivas y su potencial mantenimiento durante la juventud y adultez. Es así que, el enfoque de la política plantea que el problema y las causas están en el entorno del o la adolescente o en su contexto criminógeno a nivel de sus diversas dimensiones de desarrollo psicosocial tanto si se encuentra dentro de un proceso de responsabilidad penal especial como fuera del mismo.



En la actualidad, un número importante de adolescentes vive en condiciones de riesgo delictivo a nivel educativo, familiar y comunitario, es decir, enfrentan en el desarrollo de su vida variables de riesgo para incluirse en trayectorias delictivas. Además, cuando ingresan a un proceso de responsabilidad penal y la ejecución de determinada medida socioeducativa se encuentra presente diversas limitaciones o deficiencias para lograr el objetivo preventivo y resocializador.

La población objetivo en la cual se desea cambios son los y las adolescentes que se desarrollan en un contexto con factores de riesgo criminógeno que aún no han sido atendidos en la administración de justicia penal juvenil y aquellos que ya se encuentran en conflicto con la ley penal. En cualquiera de los dos casos, se espera que los y las adolescentes no ingresen o continúen en una trayectoria criminal por medio de un enfoque preventivo social y de justicia penal juvenil especializada y restaurativa.

En suma, para lograr dichos objetivos se han determinado en todos los sectores del poder ejecutivo, Ministerio Público y el Poder Judicial servicios vinculados con la población adolescentes que presentan factores de riesgo delictivos a nivel educativo, familiar o comunitario, así como, todos los servicios dirigidos a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal y su correspondiente atención en una medida socioeducativa.

Cabe señalar que, no se han reconocido servicios en el lineamiento 1.3 del objetivo prioritario 1 ya que, no se han identificado prestaciones desde el Estado peruano que concienticen o promuevan la no estigmatización a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en la comunidad; de igual modo, no se han señalado servicios para los lineamientos 2.2, 2.3 y 3.2 de los objetivos prioritarios ya que constituyen aspectos de proyección normativa a futuro, enfoques nuevos de justicia juvenil que se requiere implementar a mediano plazo y no se han podido construir iniciativas específicas para la red pública y privada de la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, respectivamente.

Tabla N°24: Servicios identificados

OP	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor
OP1	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su	1.1.1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.	Población en general con énfasis en adolescentes que necesiten orientación y ayuda sobre el consumo de drogas.	Presidencia del Consejo de Ministros - DEVIDA



entorno prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.2. Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes	Padres de familia e hijos adolescentes entre 12 - 14 años	Presidencia del Consejo de Ministros - DEVIDA
	1.1.3. Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo	Población adolescente de la localidad adscrita al establecimiento de salud.	Ministerio de Salud
	1.1.4. Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas	Población estudiantil adolescente de la Educación Básica Regular que están expuestos a situaciones de riesgo hacia el consumo de drogas	Presidencia del Consejo de Ministros - DEVIDA
	1.1.5. Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.	Adolescentes matriculados en la educación básica	Ministerio de Educación



1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	1.2.1. Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer	Mujeres y los integrantes del grupo familiar afectados por hechos de violencia en el marco del TUO de la Ley N° 30364; así como cualquier persona afectada por violencia sexual.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
	1.2.2. Servicio de autorización de trabajo adolescente de carácter oportuno.	Población general, con especial énfasis en las y los adolescentes que buscan insertarse en el mercado laboral	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
	1.2.3. Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes	Población de 14 a 17 años de edad sin nivel educativo (no accedió a la educación básica); con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extra edad, fuera del rango de atención de la básica regular).	Ministerio de Educación



	1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	Lineamiento sin servicios		
OP2	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	2.1.1. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio Público
		2.1.2. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Poder Judicial
		2.1.3. Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
		2.1.4. Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



		2.1.5. Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio del Interior
	2.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.	Lineamiento sin servicios		
	2.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas	Lineamiento sin servicios		
OP3	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	3.1.1. Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal.	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
		3.1.2. Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal	Adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio Público
	3.2. Establecer redes públicas y privadas	Lineamiento sin servicios		



	para el apoyo a la reinserción de las y los ACLP			
--	--	--	--	--

6.2. Fichas de los servicios y estándares de cumplimiento

OP1. 1.1.1. *Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP.1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor
Lineamiento de la política:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.
Descripción del servicio:	<p>Servicio que ya se viene implementando. Brinda información, orientación y consejería e intervención breve a la población en general, priorizando a adolescentes y jóvenes que presentan comportamientos de riesgo asociados al consumo de drogas y con consumo de drogas; mediante las modalidades de atención. Telefónica, Online y Ambulatoria. El servicio Habla Franco está a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos clínicos, psicólogos comunitarios entre otros profesionales de la salud de DEVIDA.</p> <p>El procedimiento de la atención, consiste en evaluación inicial (entrevista, tamizaje y aplicación de pruebas psicométricas), aplicación del Documento Técnico de orientación, consejería e intervención breve para consumidores de sustancias psicoactivas según la evaluación del psicólogo a cargo del caso (consejería psicológica o intervención breve, dependiendo el nivel de riesgo) así como la derivación y sesiones de seguimiento. De ser necesario, todas estas</p>



	<p>intervenciones pueden estar acompañadas de intervenciones complementarias que refuercen la adherencia y motivación al tratamiento</p> <p>El paquete integral de atención para cada nivel de riesgo contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Riesgo bajo</i>: Desarrollo de 2 sesiones (involucra el desarrollo de 1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión psicoeducativa). • <i>Riesgo moderado</i>: Desarrollo de 8 sesiones (1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión de evaluación y 6 sesiones de intervención breve). • <i>Riesgo alto</i>: Desarrollo de 2 sesiones (1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión de motivación al cambio seguido de la derivación a un Establecimiento de Salud de mayor complejidad resolutive para su tratamiento especializado). 	
Proveedor del servicio:	Presidencia de Consejo de Ministros - DEVIDA	
Receptor del servicio:	Población en general con énfasis en adolescentes que necesiten orientación y ayuda sobre el consumo de drogas.	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Integralidad ¹³	
Descripción del estándar:	El servicio debe garantizar la entrega de un paquete integral de atención diferenciado para cada nivel de riesgo, especificado en el Programa Presupuestal de prevención y consumo de drogas PP 0051. Por ello, se debe garantizar que el usuario adolescente reciba la atención completa y de este modo prevenir mayores condiciones de riesgo vinculado con el consumo de drogas.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes atendidos por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete integral de atención.	
	Responsable:	Presidencia de Consejo de Ministros - DEVIDA
	Tipo:	Calidad

¹³ Para efectos de la presente política, este estándar de cumplimiento expresa en qué medida el servicio o prestación se logra otorgar de manera completa al adolescente en riesgo o conflicto con la ley penal, es decir que no sea recibido de manera fraccionada, separada o incompleta, sino todas las actividades planteadas se cumplan y el usuario las concluya.

**OP1. 1.1.2 Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes**

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando. Está orientado a fortalecer habilidades parentales en las familias para construir estrategias de protección para sus hijos e hijas adolescentes, a fin de evitar la aparición de conductas de riesgo relacionadas al consumo de drogas y otras conductas asociadas.</p> <p>Esta intervención integral incluye un conjunto de talleres con padres, madres o tutores, y los y las adolescentes en un programa estructurado de sesiones psicosociales considerando los temas para la promoción de la comunicación entre padres e hijos, por tanto, busca que la atención se entregue de forma especializada e integral a cada uno de los usuarios, ya que de ese modo se garantiza su entrega correcta.</p> <p>En este sentido, el servicio atiende factores de riesgo a nivel familiar a modo de estrategia social en adolescentes.</p>
Proveedor del servicio:	Presidencia de Consejo de Ministros - DEVIDA
Receptor del servicio:	Padres de familia e hijos adolescentes entre 12 - 14 años
Alcance:	Nacional
Estándar de cumplimiento	Integralidad
	El servicio debe entregarse de acuerdo a lo establecido por el programa de fortalecimiento de habilidades



Descripción del estándar:	parentales cuyas sesiones están orientadas a padres, madres y sus hijos de 12 a 14 años, a lo largo de 7 semanas consecutivas. Cada sesión debe tener una duración de dos horas cada, por ello, es fundamental que el beneficiario culmine las actividades para garantizar su desarrollo psicosocial y prevenir el consumo problemático de drogas.	
Indicador:	Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.	
	Responsable:	Presidencia de Consejo de Ministros - DEVIDA
	Tipo:	Calidad

OP1. 1.1.3. *Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo.*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo.
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando, ejecutada en todos los establecimientos de salud y sus diferentes modalidades servicios con ambientes exclusivos, servicios coordinados con instituciones educativas y Centros de Desarrollo Juvenil donde se realizan atenciones en salud, sesiones de entrenamiento, consejería, así como talleres.</p> <p>Los establecimientos de salud proveen un paquete de atención integral de salud para adolescentes, que incluye la consulta a los adolescentes de acuerdo a las características de</p>



	la localidad, garantizando la confidencialidad y privacidad, a nivel nacional brinda un paquete integral y especializado de prestaciones que incluye test de habilidades sociales, sesiones de entrenamiento en habilidades sociales, tamizaje para la detección de violencia, consejerías en salud sexual y reproductiva, salud física nutricional que contribuya a fortalecer sus habilidades personales y sociales para asumir el cuidado de su vida, promoviendo su desarrollo integral. adolescentes
Proveedor del servicio:	Ministerio de Salud
Receptor del servicio:	Niños, Niñas y Adolescentes con problemas psicosociales, trastornos de la infancia o adolescencia y/o adicciones.
Alcance:	Nacional
Estándar de cumplimiento	Integralidad
Descripción del estándar:	El servicio debe entregarse garantizando debe propiciar el desarrollo integral mediante la culminación integral de la atención al adolescente en atenciones de salud, sesiones de entrenamiento, consejería en salud sexual y reproductiva, salud mental y salud física nutricional.
Indicador:	Porcentaje de adolescentes con un paquete de atención integral concluido.
	Responsable: Ministerio de Salud
	Tipo: Calidad

OP1. 1.1.4. *Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas.*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a



	un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas.
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando. Está orientado a desarrollar y fortalecer las habilidades psicosociales de estudiantes de educación básica regular, a través de sesiones de tutoría (para el caso de prevención universal), sesiones de prevención selectiva (que incluyen actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas), y sesiones con la familia, para favorecer su proceso de desarrollo integral que les permitan enfrentar situaciones de riesgo que podrían desencadenar en consumo de drogas u otras problemáticas psicosociales que deriven en esta. En este sentido, el servicio atiende factores de riesgo a nivel educativo a modo de estrategia social en adolescentes.</p> <p>Este plan temático de formación para docentes comprende cinco secciones en las cuales se aborda, desde la Tutoría y Orientación Educativa, las siguientes temáticas: Riesgos sociales, las drogas y la teoría preventiva, la incorporación de la prevención en el ámbito educativo, la planificación de las sesiones en aula, y la prevención por nivel educativo en la educación básica regular.</p> <p>El servicio comprende el desarrollo de cursos, talleres, sesiones y/o proyectos de tutoría, talleres para el desarrollo de estrategias socioeducativas, sesiones con familia, eventos, capacitaciones, mesas de trabajo. La entrega del servicio tiene los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Componente 1: Prevención universal. Dirigido a todas/os las/os estudiantes de las instituciones educativas de intervención. Los docentes tutores, quienes son capacitados previamente, desarrollan estrategias de prevención universal, a través de la aplicación de sesiones y/o proyectos de tutoría del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, enmarcado en el plan de tutoría del aula. 2) Componente 2: Prevención selectiva. Dirigido a grupos de riesgo que tienen la



	<p>posibilidad de consumir drogas. Contempla estrategias educativas, formativas y de entrenamiento en habilidades sociales y competencias personales necesarias para minimizar los factores de riesgo y afrontar adecuadamente el riesgo de involucramiento en el consumo de drogas. Para ello se desarrolla: habilidades de afrontamiento, autoeficacia, valores, la solución de problemas y proyecto de vida, planificación y uso de tiempo, entre otros. Esta fase se desarrolla en un ambiente de la escuela por un equipo de profesionales. Este componente se complementa con estrategia de desarrollo alternativas saludables para el buen uso del tiempo libre. Para ello, se desarrollan actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas.</p>	
Proveedor del servicio:	Presidencia de Consejo de Ministros – DEVIDA	
Receptor del servicio:	Población estudiantil adolescente de la Educación Básica Regular que están expuestos a situaciones de riesgo hacia el consumo de drogas	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Integralidad	
Descripción del estándar:	El servicio se brinda buscando que los usuarios completen un plan temático, buscando que los y las adolescentes puedan recibir el paquete integral de talleres y orientaciones, y como efecto de ello tengan una alta percepción del riesgo sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, reduciendo su vulnerabilidad y disposición.	
Indicador:	Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo frecuente de 5 sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y pasta básica de cocaína).	
	Responsable:	Presidencia de Consejo de Ministros - DEVIDA
	Tipo:	Calidad



OP1. 1.1.5. *Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando, como lo indica el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), la tutoría "se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social".</p> <p>A través de la tutoría grupal, que es la forma de orientación que se realiza en los espacios educativos o en otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes, se promueve estrategias de interacción en las que los estudiantes expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de su proyecto de vida. Todo esto supone que las y los estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras comparten experiencias similares.</p> <p>Generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rol de tutor, es decir, realice un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el ejercicio de sus derechos como</p>



	<p>ciudadanos.</p> <p>De este modo, el servicio atiende factores de riesgo a nivel educativo a modo de estrategia social en adolescentes en proceso de escolarización.</p> <p>El MINEDU brinda lineamientos y orientaciones para que el docente de TOE planifique sus clases de acuerdo a las necesidades y características del grupo de estudiantes a su cargo. En un número determinado de sesiones abordan temas como el plan de vida, la sexualidad y la prevención del embarazo adolescente, la prevención de la deserción escolar, la prevención de la violencia escolar, la prevención del trabajo forzoso, la prevención de la trata, la promoción de los derechos humanos, la prevención del consumo de drogas y el autocuidado, entre otros temas que puedan ser del interés de la comunidad educativa.</p>
Proveedor del servicio:	Instituciones Educativas de Educación Básica Regular – Ministerio de Educación
Receptor del servicio:	Adolescentes matriculados en la educación básica
Alcance:	Nacional
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad
Descripción del estándar:	El servicio se brinda implementándose acciones de la tutoría y orientación educativa, de acuerdo a los temas y sesiones planificadas en las Instituciones Educativas antes del inicio del año escolar. Solo con ello puede garantizarse el cumplimiento de los objetivos en coherencia con las disposiciones del Minedu, de modo que se logren cambios positivos en la población adolescente escolarizada que presente dificultades sociales y académicas.
Indicador:	Porcentaje de instituciones educativas de educación básica que no implementan acciones del Plan de tutoría
	Responsable: Instituciones Educativas de Educación Básica Regular – Ministerio de Educación
	Tipo: Calidad



OP1. 1.2.1. *Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.
Nombre del servicio:	Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando. Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y cualquier persona afectada por violencia sexual. Además, realizan acciones de prevención de la violencia en forma paralela y sin estar supeditadas al proceso del servicio de atención (psicología, social y legal), lo cual implica también la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos.</p> <p>Los Centros Emergencia Mujer se rigen en virtud del "Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, "Protocolo de Actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública" Decreto Supremo N°008-2020-JUS.</p>
Proveedor del servicio:	Programa Nacional AURORA – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Receptor del servicio:	Mujeres y los integrantes del grupo familiar afectados por hechos de violencia en el marco del TUO de la Ley N° 30364; así como cualquier persona afectada por violencia sexual.
Alcance	Nacional
Estándar de cumplimiento	Integralidad
Descripción del estándar:	El servicio debe entregarse garantizando la atención integral de los servicios legal, psicológico y social, de



	modo que se concluya con esta prestación especializada.	
Indicador:	Porcentaje de mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual que hayan recibido que concluyen la atención integral por parte de los Centros Emergencia Mujer.	
	Responsable:	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
	Tipo:	Calidad

OP1. 1.2.2 *Servicio de autorización de trabajo adolescente de carácter oportuno.*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.
Nombre del servicio:	Servicio de autorización de trabajo adolescente de carácter oportuno para adolescentes.
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando, implica el desarrollo de un procedimiento gratuito mediante el cual se otorga una constancia de permiso a las y los adolescentes a fin de su inserción en el mercado laboral, donde se registra y acredita su capacidad y condiciones para realizar el trabajo.</p> <p>Los y las adolescentes solicitan autorización previa para realizar trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia y que recibieron respuesta a su solicitud en los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 018-2020-TR. Es decir, la administración cuenta con 15 días hábiles desde su recepción para evaluar y responder la solicitud. En este sentido se deben ejecutar las acciones oportunas para prestar correctamente el servicio teniendo como responsables a la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales,</p> <p>Asimismo, este servicio que ejecuta de acciones prevención de la violencia, y la promoción de una cultura</p>



	democrática y respeto a los derechos humanos constituyendo una estrategia comunitaria.	
Proveedor del servicio:	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	
Receptor del servicio:	Población general, con especial énfasis en las y los adolescentes que buscan insertarse en el mercado laboral	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Oportunidad	
Descripción del estándar:	El servicio debe entregarse de manera oportuna a los y las adolescentes que estén atravesando condiciones de vulnerabilidad vinculadas a actividades laborales de modo que se disminuya el número de adolescentes en condiciones de trabajo precario y vulnerando sus derechos fundamentales.	
Indicador:	Porcentaje de solicitudes de autorización laboral previa para adolescentes con resolución de emisión de autorización	
	Responsable:	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
	Tipo:	Calidad

OP1. 1.2.3. *Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento de la política:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.
Nombre del servicio:	Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes
Descripción del servicio:	Servicio que se viene implementando, implica brindar prestaciones educativas a las personas de 14 a 17 años sin educación básica o que no la han culminado, en los ciclos inicial, intermedio y avanzado de la Educación Básica Alternativa, en sus tres formas de atención: Presencial, Semipresencial y A distancia del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y del Programa de Alfabetización.



	En este sentido, representa una estrategia para fortalecer los factores protectores a nivel educativo en adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.	
Proveedor del servicio:	Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) – Ministerio de Educación	
Receptor del servicio:	Estudiantes de 14 a 17 años matriculados en los servicios educativos de las formas de atención del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y del Programa de Alfabetización de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de gestión pública y privada a nivel nacional.	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad	
Descripción del estándar:	El servicio debe entregarse priorizando y dando oportunidades de desarrollo educativo a una población en condición de vulnerabilidad siendo la población de adolescentes mayores de 14 años en dificultades académicas o que no cuenta con un <u>servicio</u> educativo; con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extra-edad, fuera del rango de atención de la básica regular), con el objetivo de que concluyan con éxito el acceso a la educación básica alternativa.	
Indicador:	Tasa de matrícula en la <u>educación</u> básica alternativa para las personas de 14 a 17 años sin educación básica o que no hayan culminado la educación básica.	
	Responsable:	Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) – Ministerio de Educación
	Tipo:	Calidad

OP2. 2.1.1. *Servicio de acceso a la justicia penal fiable juvenil garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Lineamiento de la política:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	Servicio que se implementará a futuro bajo la norma del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348), consiste en la atención al adolescente que



	<p>se presume ha cometido una infracción a la ley penal de modo que durante todo el proceso hasta el juzgamiento el fiscal debe acompañar al adolescente cuando se realizan las acciones preliminares, verificar que la investigación se realice respetando las garantías procesales y de derecho fundamentales del adolescente. De igual modo, considerando la condición personal particular del desarrollo adolescente se le brindan medidas alternativas al proceso con el objetivo de evitar procesos judiciales más extensos y perjudiciales.</p> <p>De modo que, contribuye con la reforma de la justicia penal juvenil ya que busca atender a todos los y las adolescentes en un proceso de responsabilidad penal garantizando sus derechos fundamentales lo cual representa el éxito de la entrega del servicio.</p>	
Proveedor del servicio:	Ministerio Público	
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad	
Descripción del estándar:	El estándar mide el error o fallo en la implementación del CRPA ya que el servicio forma parte del proceso de administración de justicia juvenil debe entregarse considerando la protección de los derechos de los y las adolescentes entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume se encuentra en conflicto con la ley penal. De este modo, la no atención en fiscalías especializadas representaría fallas en la provisión del servicio y de la implementación del CRPA.	
Indicador:	Porcentaje de ACLP que no son atendidos en fiscalías especializadas donde se viene implementando el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente	
	Responsable:	Ministerio Público
	Tipo:	Calidad

**OP2. 2.1.2. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes**

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Lineamiento de la política:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se implementará a futuro con la norma del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348) donde los jueces y los equipos interdisciplinarios judiciales deben atender al adolescente y el expediente a nivel de evaluación, recojo de información, análisis del caso, las pruebas y que en todo momento la actuación observe los derechos fundamentales. En este sentido, los jueces prestan un servicio fundamental para que las resoluciones judiciales que determinan el término del proceso a nivel de las diversas etapas del CRPA cumplan con la decisión justa y motivada del tipo de medida socioeducativa o de protección integral en un centro juvenil es la más idónea y proporcional con la condición de vulnerabilidad y riesgo que presenta el o la adolescentes.</p> <p>Por tanto, todo el proceso incluye etapas: preparatoria, intermedia y de juicio oral. Durante la etapa preparatoria garantizan los derechos del proceso e investigación, en la intermedia dirigen el saneamiento procesal y en el juicio oral dirigen el juzgamiento para finalizar el proceso. No obstante, en terminación temprana del proceso el juez también permite garantizar el debido proceso durante los procesos especiales o de salidas alternativas. Finalmente, las salas penales de la Corte Suprema atienden recursos de casación, apelación, competencias, revisiones, y recusación a Magistrados.</p> <p>De modo que, contribuye con la reforma de la justicia penal juvenil ya que busca brindar un servicio especializado para lograr con éxito la atención basada en un enfoque de justicia penal juvenil que garantice los derechos de los usuarios.</p>
Proveedor del servicio:	Poder Judicial
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal



Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad	
Descripción del estándar:	El estándar mide el error o fallo en la implementación del CRPA ya que el proceso de administración de justicia juvenil a nivel judicial debe entregarse considerando la protección de los derechos fundamentales de los y las adolescentes entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal. De este modo, el porcentaje de expedientes no resueltos representaría fallas en la provisión del servicio y de la implementación del CRPA.	
Indicador:	Porcentaje de expedientes no resueltos en módulos judiciales donde se implemente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.	
	Responsable:	Poder Judicial
	Tipo:	Calidad

OP2. 2.1.3. *Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Lineamiento de la política:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP
Nombre del servicio:	Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se viene implementando, donde los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizan una defensa técnica brindada gratuitamente prestando asesoramiento al adolescente, interrogándolo, buscando asistencia de peritos técnicos, participa en las diligencias, aporta medios de prueba, ingresa a en los Centros Juveniles, interpone cuestiones previas, prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios, así como salidas alternativas. Dicho servicio se brinda a un grupo de adolescentes con dificultades socioeconómicas que no puedan acceder a un servicio privado de defensa penal</p> <p>Vale decir, se prestará el servicio a todos los y las adolescentes entre 14 y menos de 18 años que se presume han cometido una infracción o se encuentran en una medida socioeducativa que tienen escasos</p>



	<p>recursos económicos o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor público para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.</p> <p>Por lo tanto, favorece la reforma de la justicia penal juvenil ofreciendo de forma exitosa e integral el servicio en el usuario que se adecue al perfil de ingreso, es decir, a aquellos en condiciones de vulnerabilidad social quienes se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, conforme al Decreto Supremo N°009-2019-JUS, se consideran las siguientes variables de: a) Edad, b) Discapacidad, c) Pertenencia a un pueblo indígena u originario, pueblo afroperuano u otro grupo étnico, d) Victimización., e) Migración y el desplazamiento interno, f) Pobreza, g) Género, h) Privación de libertad y i) Enfermedad.</p>	
Proveedor del servicio:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad.	
Descripción del estándar:	El servicio que forma parte del proceso de administración de justicia juvenil a nivel prejudicial y judicial debe entregarse asegurando el alcance a la población de adolescentes entre 14 y 17 años que esté en condición de vulnerabilidad socioeconómica evitando que no acceda a una justicia que garantice sus derechos fundamentales, además, esta población particular se encuentra en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que reciben consultas y patrocinios de la defensa pública.	
	Responsable:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	Tipo:	Calidad

**OP2. 2.1.4. Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal**

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Lineamiento de la política:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP
Nombre del servicio:	Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se implementará a futuro con la norma del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348), donde en el marco de un proceso de responsabilidad penal adolescentes el mediador debe facilitar una resolución del conflicto entre el adolescente en conflicto con la ley penal y la víctima de modo que el adolescente pueda concluir el proceso de responsabilidad mediante una medida alternativa. El o la adolescente entre 14 y 17 años al constituirse en situación de riesgo al haber presuntamente infringido la ley penal necesita servicios de mediación ya que evitan un proceso penal o sentencia en posible privación de libertad u otro análisis el cual implica perjuicios para su desarrollo integral.</p> <p>De este modo, el mediado presta al adolescente un ambiente de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño a la víctima por el o la adolescente, que sirva para la aplicación de la remisión, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada u otros supuestos permitidos en la Ley.</p> <p>Por lo cual, aporta con la reforma de la justicia penal juvenil ya que su carácter especializado y garantista busca que se dirija a adolescentes en conflicto con la ley penal en vulnerabilidad social y evitar procesos judiciales que agraven su situación.</p>
Proveedor del servicio:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal
Alcance:	Nacional
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad
Descripción del estándar:	El servicio que forma parte del proceso de administración de justicia juvenil debe entregarse asegurando el alcance a la población de adolescentes entre 14 y 17 años que esté en condición de vulnerabilidad socioeconómica evitando que no acceda



	a una justicia que garantice sus derechos fundamentales, además, esta población particular se encuentra en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal, siendo necesario evitar situaciones más perjudiciales como en el caso de una sentencia con medida socioeducativa.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad social que reciben atención por parte de mediadores especializados	
	Responsable:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	Tipo:	Calidad

OP2. 2.1.5. *Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Lineamiento de la política:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a atención policial en módulos especializados en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	<p>Servicio que se implementará a futuro con la norma del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348), donde la policía especializada recibe al adolescente en espacios adaptados e idóneos para la etapa adolescente diferenciada de las personas adultas.</p> <p>La detención, la comunicación y el proceso de recojo de datos y diligencias la realiza respetando los derechos fundamentales del adolescente debido a que se encuentra en una etapa particular de desarrollo, asimismo, su condición es de vulnerabilidad social en diversos ámbitos de su vida debido a que se sospecha ha cometido una infracción a la ley penal. En este sentido, realiza investigación y diligencias de forma propia o en apoyo al Ministerio Público, en este sentido, primero debe dar aviso a los responsables de los y las adolescentes, fiscales y abogado defensor ubicando al adolescente en el módulo especializado.</p> <p>El servicio está a cargo de la Policía Nacional del Perú - PNP, que interviene exclusivamente en aquellas</p>



	causas en las que el imputado es un adolescente entre 14 y menos de 18 años. Es así que, se tiene que asegurar la correcta aplicación de la norma procesal y sustantiva del Código de Responsabilidad Penal de adolescentes y atender al o la adolescente en garantía de sus derechos fundamentales específicos. En efecto, este servicio contribuye con la reforma de la justicia penal juvenil en el marco del D.L. 1348.	
Proveedor del servicio:	Ministerio del Interior - PNP	
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal	
Alcance:	Nacional	
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad	
Descripción del estándar:	El servicio que forma parte fundamental del inicio del proceso de administración de justicia juvenil el cual debe entregarse la población adolescente entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume se encuentra en conflicto con la ley penal y para no afectar su desarrollo social particular debe garantizarse la protección de sus derechos fundamentales y procesales.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no son atendidos en los módulos especializados de las comisarías	
	Responsable:	Ministerio del Interior - PNP
	Tipo:	Calidad

OP3 3.1.1. *Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 3. Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
Lineamiento de la política:	Lin 1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.
Nombre del servicio:	Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	Es un servicio que mejorará las prestaciones realizadas en los centros juveniles de medio abierto y cerrado dirigidos por el Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ dirigidas a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal con una medida



	<p>socioeducativa o con medidas preventivas o de coerción procesal. Este servicio se brinda en los centros juveniles y se mejorará con la implementación del Modelo Integral, de modo que, los equipos técnicos interdisciplinarios integrados por un psicólogos, trabajador social y educador social atienden al adolescente directamente mediante un acompañamiento continuo y especializado utilizando herramientas de reinserción social y protección integral los cuales se expresan en un plan de tratamiento individual (PTI) el cual se plantea objetivos que deben cumplirse para la mejora del adolescente, es decir, se debe concluir de forma integral un plan de tratamiento individual para garantizar el cambio positivo del adolescente.</p> <p>Este Modelo integral, aplicado a lo largo de la instancia del adolescente en un centro juvenil, consiste en una evaluación integral que permita el desarrollo de sesiones, talleres y orientaciones psicoeducativas, educativas, formativo-laborales y psicoterapéuticas. Finalmente, se realizan evaluaciones de proceso y salida que permitan la preparación a la salida del Centro Juvenil, así como el acompañamiento y seguimiento especializado post medida socioeducativa. Asimismo, se realizan Programas específicos orientados a las dificultades cada adolescente en particular. Este proceso implica que el adolescente culmine todas las actividades y metas planteadas por el equipo técnico interdisciplinario para efectivizar el desarrollo psicosocial del adolescente.</p> <p>De este modo, este servicio contribuye con la reforma de la justicia penal juvenil en el marco del D.L. 1348 ya que está a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) que se encarga de la administración del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal y lograr ejecutar las medidas socioeducativas impuestas a las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de manera concertada y articulada con entidades públicas, privadas y otros organismos.</p>
Proveedor del servicio:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - PRONACEJ



Receptor del servicio:	El servicio está orientado a adolescentes (varones y mujeres) en conflicto con la ley penal, mayores de 14 años) que cumplen medidas socioeducativas no privativas o privativa de libertad.	
Alcance:	Nacional	
Estándares de cumplimiento	Integralidad	
Descripción del estándar:	El servicio está orientado a que los y las adolescente en los centros juveniles concluyan efectivamente un plan de tratamiento individual basado en el nuevo Modelo Integral el cual es aplicado por el equipo técnico interdisciplinario permitiendo el desarrollo positivo del adolescente y reintegrarlo constructivamente a la sociedad.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos en Centros Juveniles que concluyen planes de tratamiento individual basados en un Modelo Integral.	
	Responsable:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - PRONACEJ
	Tipo:	Calidad

OP3 3.1.2. *Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal*

FICHA DEL SERVICIO	
Objetivo prioritario:	OP 3. Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
Lineamiento de la política:	Lin 1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.
Nombre del servicio:	Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal
Descripción del servicio:	Servicio que se viene implementado involucra el desarrollo de actividades de un equipo técnico interdisciplinario el cual, inicialmente, ejecuta una evaluación integral y de riesgos a los y las adolescentes a partir del cual se genera un plan de intervención. Todo este proceso se denomina programa el cual debe integrar la aplicación del enfoque restaurativo; además, coordina y monitorea al o la adolescente y a su



	<p>familia en la ejecución de este programa en coordinación con instituciones y organizaciones de la comunidad.</p> <p>El plan de intervención, dentro del programa de orientación, aplicado por el equipo técnico interdisciplinario incluye objetivos de tratamiento para realizar acciones de orientación, talleres educativos, capacitación, visitas domiciliarias y otras acciones comunitarias para resolver a nivel prejudicial, el conflicto con la ley penal que tiene el adolescente de un modo más eficiente y eficaz, a través de la aplicación de la Remisión Fiscal bajo el modelo restaurativo.</p> <p>Dicho plan de intervención debe completarse efectivamente a nivel de todos sus objetivos para asegurar el desarrollo positivo del adolescente por medio de su avance a nivel familiar, educativo y social en general.</p> <p>Finalmente, culminado el programa de orientación se realiza una evaluación permitiendo la integración progresiva a la sociedad.</p> <p>Asimismo, este servicio aporta con la reforma de la justicia penal juvenil en el marco del D.L. 1348 ya que se encarga de ejecutar el programa de orientación en el marco medidas alternativas al proceso judicial y la remisión.</p>	
Proveedor del servicio:	Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito	
Receptor del servicio:	Adolescentes en conflicto con la ley penal	
Alcance:	Nacional	
Estándares de cumplimiento	Integralidad	
Descripción del estándar:	El servicio está orientado a que los y las adolescente en los centros juveniles concluyan efectivamente un plan de tratamiento individual basado en el nuevo Modelo Integral el cual es aplicado por el equipo técnico interdisciplinario permitiendo el desarrollo positivo del adolescente y reintegrarlo constructivamente a la sociedad.	
Indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos que concluyen el programa de orientación.	
	Responsable:	Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito
	Tipo:	Calidad

**6.3. Fichas de indicadores de los servicios**

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.1.1									
Objetivo prioritario	OP.1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor								
Lineamiento	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.								
Nombre del servicio:	Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.								
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes atendidos por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete integral de atención.								
Justificación:	Permite medir de manera directa la permanencia de las/os usuarias/os en la intervención del Programa Presupuestal de Prevención y Consumo de Drogas – PTCD. De esta forma, la información que brinda el indicador nos permite conocer el porcentaje de usuarios con consumo de drogas (con un nivel de riesgo bajo, moderado y alto) que terminan el paquete integral de intervención por cada nivel de riesgo, reflejando la adherencia de los usuarios a la intervención disponible y su motivación para lograr cambios en su vida.								
Responsable del indicador:	Dirección de Promoción y Monitoreo - DEVIDA								
Limitaciones para la medición del indicador	Aunque existen sistemas de registro de la atención, culminación y seguimiento de los usuarios, los valores del indicador son sensibles a la adherencia y eficacia de la atención actualmente disponible.								
Método de cálculo:	<p>Fórmula: (N/D) *100</p> <p>Donde, N: Número de usuarios (adolescentes, entre 11 y 18 años inclusive) que concluyen el paquete integral de intervención según el nivel de riesgo. D: Número total de usuarios (adolescentes, entre 11 y 18 años inclusive) atendidos por consumo de drogas. Se considera usuario atendido a la persona que ha participado en la primera sesión (entrevista inicial y tamizaje) de la modalidad ambulatoria.</p> <p>Especificaciones técnicas: Dentro de este servicio, se considera que el paquete integral de intervención desarrolla un número de sesiones diferenciado por cada nivel de riesgo. Al respecto se debe tomar en cuenta las siguientes denominaciones: • Riesgo bajo: Desarrollo de 2 sesiones (involucra el desarrollo de 1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión psicoeducativa). • Riesgo moderado: Desarrollo de 8 sesiones (1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión de evaluación y 6 sesiones de intervención breve). • Riesgo alto: Desarrollo de 2 sesiones (1 sesión para la entrevista inicial y tamizaje, así como 1 sesión de motivación al cambio, seguido de la derivación a un Establecimiento de Salud de mayor complejidad resolutive para su tratamiento especializado). ASSIST: Herramienta técnica para ayudar a la identificación temprana de riesgos para la salud y trastornos debido al uso de sustancias en la atención primaria de salud, la atención médica general y otros entornos. (Fuente Organización Mundial de la Salud, La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST), 2011. URL disponible en https://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_screening_spanish.pdf?ua=1. Se consideran adolescentes en el rango de 11 a 18 años, inclusive.</p>								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:						Calidad	
Fuente y base de datos:	Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). Base de datos: Padrón de participantes de la modalidad ambulatoria del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve - Habla Franco de DEVIDA.								
Supuestos:	DEVIDA mantiene actualizada información de los padrones correspondientes a la intervención.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030



Valor	32%	34%	36%	38%	40%	41%	42%	43%	44%
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.1.2.	
Objetivo prioritario	OP.1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor
Lineamiento	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes
Nombre del indicador:	Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.
Justificación:	Permite medir el efecto de las intervenciones preventivas orientadas al desarrollo de las habilidades parentales de padres o tutores de adolescentes. Las mediciones obtenidas del indicador permitirán conocer la proporción de padres de familia han desarrollado habilidades parentales que sean protectoras para sus hijos adolescentes contra el consumo de drogas.
Responsable del indicador:	Dirección de Promoción y Monitoreo - DEVIDA
Limitaciones para la medición del indicador	En la medición del indicador no se considera a las regiones e instituciones educativas que no son parte del Programa Presupuestal de Prevención y Consumo de Drogas – PTCD.
Método de cálculo:	Fórmula: (N/D) *100 Donde, N: Número de padres de familia que desarrollan habilidades parentales. D: Número total de padres de familia que participan en el Programa "Familias Fuertes: Amor y Límites". Especificaciones técnicas: Se usa como instrumento un cuestionario auto aplicado después de la intervención, sobre la población de padres / madres / tutores participantes. El instrumento contiene veinte (20) preguntas referidas a las siguientes dimensiones: resiliencia de padres, soporte práctico, conocimiento de la paternidad y el desarrollo adolescente y, cariño y apego. Paso 1: Después de la aplicación del cuestionario, se debe proceder a sumar los puntajes alcanzados, de acuerdo a la respuesta de cada pregunta. Paso 2: Mediante el método de Baremos (escala de valoración de un test mediante estadística descriptiva), se determinan los intervalos para cada una de las tres categorías identificadas: "No ha desarrollado habilidades parentales", "En proceso de desarrollo de habilidades parentales" y "Desarrolló habilidades parentales". Paso 3: Se determina el punto de corte para la categoría "Desarrolló habilidades parentales". Paso 4: Con el puntaje de cada familia participante, se determina cuantas han desarrollado habilidades parentales, es decir las que alcanzan un puntaje igual o mayor al punto de corte. Paso 5: Se calcula el indicador, dividiendo en número de familias que han desarrollado habilidades parentales entre el número total de familias participantes.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad
Fuente y base de datos:	Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). Base de datos: Registro interno de la Encuesta de evaluación del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, para el Programa "Familias Fuertes: Amor y Límites". DEVIDA.
Supuestos:	DEVIDA mantiene actualizada información de los padrones correspondientes a la intervención.



	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	50%	53%	55%	58%	61%	64%	67%	70%	74%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.1.3.									
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.								
Lineamiento:	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.								
Nombre del servicio:	Servicio de atención preventivo-promocional integral en adolescentes								
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes atendidos con paquete de cuidado integral concluido.								
Justificación:	Identificar factores de riesgos en salud mental, salud sexual y reproductiva y salud física nutricional para intervenir oportunamente en ellos, así como brindar factores protectores para disminuir los problemas psicosociales								
Responsable del indicador:	Dirección General de Estadística e Informática - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral								
Limitaciones para la medición del indicador:	Identificar los adolescentes referidos a la atención por institución educativa por no contar con padrón nominal.								
Método de cálculo:	<p>Fórmula: (A/B) * 100 Donde: A: Adolescentes atendidos con un paquete de atención integral culminado B: Total de adolescentes atendidos a nivel nacional</p> <p>Especificaciones técnicas: 1) Adolescentes atendidos con un paquete de cuidado integral culminado a nivel nacional. 2) Total de adolescentes atendidos a nivel nacional.</p>								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:	Calidad						
Fuente y base de datos:	Dirección General de Estadística e Informática - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral Base de datos de información de la Unidad Estadística								
Supuestos:	Se atenderán en todos los establecimientos de salud.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.1.4	
Objetivo prioritario	OP.1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo de los y las adolescentes en riesgo infractor
Lineamiento	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.
Nombre del servicio:	Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas.
Nombre del indicador:	Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo frecuente de 5 sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y pasta básica de cocaína).
Justificación:	Permite medir el cambio en la percepción del riesgo, a partir de las acciones de información, educación y comunicación sobre los efectos negativos de las drogas psicoactivas legales e ilegales (pertinencia); de acuerdo con el protocolo de intervención establecido en el Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Un incremento del indicador nos permite apreciar que progresivamente mayor cantidad de personas tienen alta percepción de riesgo sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, reduciendo su vulnerabilidad y disposición (relevancia).
Responsable del indicador:	Dirección de Promoción y Monitoreo – DEVIDA
Limitaciones para la medición del indicador	En la medición del indicador no se considera a las regiones e instituciones educativas que no son parte del Programa Presupuestal de Prevención y Consumo de Drogas – PTCD.
Método de cálculo:	<p>Fórmula: $(A/B) * 100$ Donde, A: Número de estudiantes que concluyen el paquete de intervención y refieren que el consumo frecuente de cinco sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y pasta básica de cocaína) conlleva un gran riesgo para la persona. B: Número total de estudiantes que concluyen el paquete de intervención.</p> <p>Especificaciones técnicas: El servicio comprende el desarrollo de sesiones o proyectos de tutoría, para el desarrollo de estrategias socioeducativas. La entrega del servicio tiene los siguientes componentes: 1) Componente 1: Prevención universal Dirigido a todas/os las/os estudiantes de las instituciones educativas de intervención. Los docentes tutores, quienes son capacitados previamente, desarrollan estrategias de prevención universal, a través de la aplicación de sesiones y/o proyectos de tutoría del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, enmarcado en el plan de tutoría del aula. 2) Componente 2: Prevención selectiva Dirigido a grupos de riesgo que tienen la posibilidad de consumir drogas. Contempla estrategias educativas, formativas y de entrenamiento en habilidades sociales y competencias personales necesarias para minimizar los factores de riesgo y afrontar adecuadamente el riesgo de involucramiento en el consumo de drogas. Para ello se desarrolla: habilidades de afrontamiento, autoeficacia, valores, la solución de problemas y proyecto de vida, planificación y uso de tiempo, entre otros. Esta fase se desarrolla en un ambiente de la escuela por un equipo de profesionales. Este componente se complementa con estrategia de desarrollo alternativas saludables para el buen uso del tiempo libre. Para ello, se desarrollan actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas. Para calcular el indicador, se realiza una encuesta a una muestra representativa de la población de estudiantes usuarias/os del servicio correspondiente al Componente 1: Prevención universal, a fin de conocer sus percepciones del riesgo en torno al consumo de 5 sustancias psicoactivas legales (tabaco, alcohol) e ilegales (marihuana, cocaína y pasta básica de cocaína).</p>



Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:							Calidad
Fuente y base de datos:	Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA).								
	Base de datos: Registro interno de la Encuesta de evaluación del Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en su intervención educativa de DEVIDA.								
Supuestos:	<ul style="list-style-type: none"> • Existe una coordinación directa y eficiente con el MINEDU y las Direcciones Regionales de Educación. • Docentes se muestran interesados y dispuestos a realizar las horas de tutoría introduciendo el Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario. • Estudiantes se muestran motivados e interesados en las sesiones del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario 								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	59.8%	61.8%	63.8%	65.8%	67.8%	69.8%	71.8%	73.8%	75.8%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.1.5.								
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.							
Lineamiento	Lin 1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.							
Nombre del servicio:	Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.							
Nombre del indicador:	Porcentaje de instituciones educativas de educación básica que no implementan acciones del Plan de tutoría							
Justificación:	La medición del indicador permitirá conocer a nivel nacional la implementación del servicio de tutoría y orientación educativa de acuerdo con el Protocolo, así como las acciones definidas en los planes de tutoría y orientación educativa de las instituciones educativas y programas educativos de educación básica.							
Responsable del indicador del servicio:	MINEDU – EBR, EBA							
Limitaciones para la medición del indicador:	No se cuenta con una línea base. La primera medición está programada para el 2023, en función de la construcción de los instrumentos y fuente de datos. En EBA se presentará un primer reporte para fines del 2024.							
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100 Donde: A: número de instituciones educativas de educación básica que no desarrollan acciones de tutoría y orientación educativa para estudiantes adolescentes. B: número de instituciones educativas de educación básica que atienden estudiantes adolescentes.							
	Especificaciones técnicas: <u>Para el caso de EBR</u> A: Para el numerador se consideran a las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica <u>regular</u> que no desarrollen sesiones de tutoría de acuerdo con la distribución de tiempo establecida en el currículo nacional. B: Para el denominador se consideran a las instituciones públicas y privadas de educación básica <u>regular</u> que atienden a adolescentes. <u>Para el caso de EBA</u> A: Para el numerador se considera a las instituciones públicas y privadas de educación que atienden a adolescentes y que no cuenten con un plan de tutoría y orientación educativa implementado. B: Para el denominador se considera los servicios educativos que cuenten con población adolescente.							
Sentido esperado del indicador:	Descendente	Tipo de indicador de servicio:			Calidad			
Fuente y base de datos:	Instituciones Educativas que cuentan con un plan de tutoría y orientación educativa aprobado. Instituciones Educativas que desarrollan acciones de tutoría y orientación educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos. ENEDU INEI Censo educativo - MINEDU							
Supuestos:	Se considera como supuesto que, por la crisis sanitaria, se establezcan todos los canales de comunicación entre la IE, estudiantes y familias y/o cuidadores, que permitan la implementación de las acciones de tutoría y orientación educativa.							
	Línea de base	Logros esperados						
Año	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	45%	40%	38%	35%	32%	30%	28%	25%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 1.2.1									
Objetivo prioritario:	OP1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo en los y las adolescentes en riesgo infractor								
Lineamiento de la política:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo								
Nombre del servicio:	Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer								
Nombre del indicador:	Porcentaje de mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual que hayan recibido que concluyen la atención integral por parte de los Centros Emergencia Mujer.								
Justificación:	El indicador permite medir el porcentaje de adolescentes usuarias que acuden al CEM, reciben atención integral, a nivel nacional.								
Responsable del indicador del servicio:	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - PROGRAMA AURORA								
Limitaciones para la medición del indicador:	Errores en el registro y subregistro de información que puede afectar la medición del indicador.								
Método de cálculo:	<p>Fórmula: (A/B) * 100 Donde A: Adolescentes afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y por violencia sexual, que acuden a los CEM y concluyen la atención integral. B: Adolescentes afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y por violencia sexual, que acuden a los CEM.</p> <p>Especificaciones técnicas: A: Se consideran todo adolescente que logran concluir con la atención interdisciplinaria mediante el registro por los profesionales de los CEM B: Se registra a todo adolescente que busque atención y apoyo en los CEM o en derivación de diversas entidades públicas u organizaciones privadas.</p>								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:			Calidad				
Fuente y base de datos:	Registros administrativos de PN Aurora								
Supuestos:	Se espera contar con el mayor número de mujeres que reciban el servicio de Estrategia Comunitaria con el paquete completo. Está sujeto a la voluntad política y al presupuesto asignado poder cubrir con el servicio de Estrategia Comunitaria a nivel nacional								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	47.8%	50.9%	54.1%	57.3%	60.5%	63.7%	66.8%	70.0%	73.2%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE SERVICIO 1.2.2.	
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Lineamiento:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.
Nombre del servicio:	Servicio de autorización del trabajo adolescente de carácter oportuno
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de autorización laboral previa para adolescentes con resolución de emisión de autorización
Justificación:	El Decreto Supremo N° 018-2020-TR establece los plazos para la evaluación y emisión de respuesta a las solicitudes formuladas por los y las adolescentes, con lo cual se busca garantizar que esta población cuente oportunamente con los resultados de las evaluaciones de dichas solicitudes, por lo que la "oportunidad" se concibe como un estándar asociado al respeto de los plazos para atender las solicitudes de autorización y de esta manera garantizar la finalidad de este servicio. En ese sentido, el indicador permite medir el cumplimiento de plazos en las atenciones referidas a las solicitudes de autorización laboral, en el marco del D.S N° 018-2020-TR.
Responsable del indicador:	MTEP - Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales (DRTPE).
Limitaciones para la medición del indicador:	No existe un número de exacto en la proyección de adolescentes totales a nivel nacional que trabajan y compararlos con el número de registrados.
Método de cálculo:	<p>Fórmula: $(A/B) * 100$ Donde A: Número de solicitudes de autorización laboral previa para adolescentes con resolución de emisión de autorización. B: Número de solicitudes de autorización laboral previa para adolescentes recibidas por la DRTPE/GRTPE.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>La solicitud de autorización laboral previa puede ser presentada por cualquier persona ante la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en el gobierno regional, del lugar donde se localiza el centro de trabajo, de manera presencial o vía electrónica, al correo electrónico de dicha institución.</p> <p>Para el numerador, se consideran a las/os adolescentes que solicitaron autorización previa para realizar trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia y que recibieron respuesta a su solicitud en los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 018-2020-TR. Es decir, la administración cuenta con 15 días hábiles desde su recepción para evaluar y responder la solicitud.</p> <p>La Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales, emite el acto administrativo que otorga o niega la autorización, con la debida motivación. En caso de que la solicitud haya sido presentada mediante correo electrónico, dicha entidad tiene un plazo de tres días hábiles, contados desde la emisión del acto administrativo, para enviarlo junto con la libreta del o de la adolescente que trabaja, debidamente escaneados, a la dirección de correo electrónico desde donde se remitió la solicitud original.</p> <p>Para el denominador, se consideran al total de adolescentes que presentan solicitudes de autorización previa para realizar trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia. Es necesario destacar que solo se consideran a las/os adolescentes que hayan presentado su solicitud laboral que, de acuerdo a los plazos previstos, ya debieron ser respondidas. Es decir, se contabilizan a las/os adolescentes que hayan presentado su solicitud laboral, al menos, 16 días antes de la fecha de medición del indicador. Esto, considerando que, al momento de hacer el corte de información, se pueden hallar solicitudes sin respuestas, pero que se encuentran dentro de los plazos previstos para su evaluación.</p>



Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:		Calidad					
Fuente y base de datos:	Fuente: Autorizaciones previas emitidas por parte de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo Bases de datos: Registros de las autorizaciones previas emitidas por parte de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo								
Supuestos:	El registro y envío de información estadística de solicitudes y atención de estas se realiza de acuerdo a los plazos y formatos establecidos por el MPTE								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	43%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE SERVICIO 1.2.3.										
Objetivo prioritario:	OP 1. Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.									
Lineamiento:	Lin 2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.									
Nombre del servicio:	Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes									
Nombre del indicador:	Tasa de matrícula en la <u>educación</u> básica alternativa para las personas de 14 a 17 años sin educación básica o que no hayan culminado la educación básica.									
Justificación:	La medición del indicador permitirá conocer el nivel de alcance de la EBA para lograr que las personas de 14 a 17 años sin educación básica o que aún no la han culminado, se matriculen en los servicios educativos de la EBA a nivel nacional.									
Responsable del indicador del servicio:	MINEDU									
Limitaciones para la medición del indicador:	<p>La medición se realiza en base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0), para el caso de las personas de 14 a 17 años sin nivel educativo (no accedió a la educación básica); con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extra-edad, fuera del rango de atención de la básica regular) - Al Censo Educativo o SIAGIE, para los estudiantes de 14 a 17 años matriculados en la EBA. <p>Una limitación es la oportunidad de publicación de los resultados de la ENAH0 y el Censo Educativo y que el SIAGIE cuente con todos sus módulos implementados para la EBA.</p>									
Método de cálculo:	<p>Fórmula: (A/B) * 100 Donde: A: Numero de adolescentes de 14 a 17 años matriculados en los servicios educativos de los ciclos inicial e intermedio y avanzado de los programas de la EBA. B: Número de adolescentes de 14 a 17 años sin nivel educativo (no accedió a la educación básica); con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extra-edad, fuera del rango de atención de la básica regular).</p>									
	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Para el numerador, se considera los estudiantes de 14 a 17 años matriculados en los servicios educativos del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y del Programa de Alfabetización de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de gestión pública y privada a nivel nacional.</p> <p>Para el denominador, se considera la población de 14 a 17 años sin nivel educativo (no accedió a la educación básica); con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extra-edad, fuera del rango de atención de la básica regular).</p>									
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	Tipo de indicador de servicio:					Calidad			
Fuente y base de datos:	Fuente y base de datos: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0), Censo Educativo del MINEDU y Registros de matrícula del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa -SIAGIE									
Supuestos:	Se considera como supuesto que, el SIAGIE esté operando para la modalidad con todos sus módulos implementados a fines del 2022.									
	Línea de base	Logros esperados								
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	36,2	36,2	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,4	36,4	



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2.1.1.										
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil									
Lineamiento:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP									
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal									
Nombre del indicador:	Porcentaje de ACLP que no son atendidos en fiscalías especializadas donde se viene implementando el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente									
Justificación:	Permite identificar el avance en la reforma de la justicia penal juvenil desde los servicios del Ministerio Público en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, desde el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.									
Responsable del indicador:	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación									
Limitaciones para la medición del indicador:	Solo verifica el ingreso bajo un servicio con estándares del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y no necesariamente identifica la acción concreta de los fiscales y equipos interdisciplinarios durante la atención al adolescente.									
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100									
	Especificaciones técnicas: A: Total de denuncias por infracción a la ley penal en fiscalías donde no está vigente la implementación del CRPA B: Total de denuncias por infracción a la ley penal en fiscalías de familias o mixtas.									
Sentido esperado del indicador:	Descendente	Tipo de indicador de servicio:						Calidad		
Fuente y base de datos:	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación SIATF									
Supuestos:	Se requiere que las instancias multisectoriales para la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprueben el avance en la vigencia de este cuerpo normativo en los Distritos Judiciales/Distritos Fiscales.									
	Línea de base	Logros esperados								
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	100%	98%	95%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2.1.2										
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil									
Lineamiento:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP									
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes									
Nombre del indicador:	Porcentaje de expedientes no resueltos en módulos judiciales donde se implemente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.									
Justificación:	Permite identificar el avance en la reforma de la justicia penal juvenil desde los servicios del Poder Judicial en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal									
Responsable del indicador:	Poder Judicial									
Limitaciones para la medición del indicador:	Solo verifica el ingreso al órgano jurisdiccional bajo un servicio con estándares del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y no necesariamente identifica la acción concreta de los jueces y equipos interdisciplinarios durante la atención al adolescente.									
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100									
	Especificaciones técnicas: A: Total de expedientes por adolescentes en conflicto con la ley penal que no son resueltos en módulos especializados en el CRPA: Número total de adolescentes en conflicto con la ley penal cuyos casos no son atendidos en los Distritos Judiciales con juzgados especializados en el marco del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. 1348) que tengan módulos especializados en el CRPA. B: Total de expedientes por adolescentes en conflictos con la ley penal recibidos o atendidos a nivel nacional: Número de expedientes a nivel nacional por materia de adolescentes en conflicto con la ley penal.									
Sentido esperado del indicador:	Descendente	Tipo de indicador de servicio:						Calidad		
Fuente y base de datos:	Subgerencia de Estadística - Gerencia General del Poder Judicial									
Supuestos:	Se requiere que las instancias multisectoriales para la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprueben el avance en la vigencia de este cuerpo normativo en los Distritos Judiciales.									
	Línea de base	Logros esperados								
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	100%	98%	95%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2.1.3									
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil								
Lineamiento:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP								
Nombre del servicio:	Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal								
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que reciben consultas y patrocinios de la defensa pública.								
Justificación:	El presente indicador permite identificar las atenciones: consultas y patrocinios a favor de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad, o cuando la ley lo establezca.								
Responsable del indicador:	MINJUSDH								
Limitaciones para la medición del indicador:	Las limitaciones que presentamos son que actualmente la Defensa Pública no cuenta con defensores especializados en adolescentes infractores, y la actualización del Sistema Informático Datamark presenta un desfase de dos meses.								
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100								
	Especificaciones técnicas: A : N° de consultas y patrocinios de ACLP en vulnerabilidad atendidos por la defensa pública Se entiende por vulnerabilidad a las y los adolescentes que se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, considerando las variables de: a) Edad, b) Discapacidad, c) Pertenencia a comunidades indígenas u originarias, d) Victimización., e) Migración y el desplazamiento interno, f) Pobreza, g) Género, h) Privación de libertad y i) Enfermedad. B: N° Número de adolescentes que se encuentran en un proceso de responsabilidad penal de adolescentes en fiscalías								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente			Tipo de indicador de servicio:			Calidad		
Fuente y base de datos:	MINJUSDH - Sistema Informático Datamark								
Supuestos:	Implementación de Infraestructura, bienes muebles, medios tecnológicos, recursos humanos.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	10%	13%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	33%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2.1.4									
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil								
Lineamiento:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP								
Nombre del servicio:	Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal								
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad social que reciben atención por parte de mediadores especializados								
Justificación:	El presente indicador permite identificar las atenciones: consultas y patrocinios a favor de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad, o cuando la ley lo establezca.								
Responsable del indicador:	MINJUSDH – Sistema Informático Datamark								
Limitaciones para la medición del indicador:	Las limitaciones que presentamos son que actualmente la Defensa Publica no cuenta con mediadores especializados en adolescentes infractores, y la actualización del Sistema Informático Datamark presenta un desfase de dos meses.								
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100								
	Especificaciones técnicas: A : N° de consultas y patrocinios de ACLP en vulnerabilidad atendidos por mediadores especializados. Se entiende por vulnerabilidad a las y los adolescentes que se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, considerando las variables de: a) Edad, b) Discapacidad, c) Pertenencia a comunidades indígenas u originarias, d) Victimización., e) Migración y el desplazamiento interno, f) Pobreza, g) Género, h) Privación de libertad y i) Enfermedad. B: N° Número de adolescentes que se encuentran en un proceso de responsabilidad penal de adolescentes a nivel de fiscalías								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente				Tipo de indicador de servicio:		Calidad		
	Fuente y base de datos: MINJUSDH - Sistema Informático Datamark								
Supuestos:	Implementación de Infraestructura, bienes muebles, medios tecnológicos, recursos humanos.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	0%	2%	5%	8%	15%	20%	25%	30%	40%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 2.1.5										
Objetivo prioritario:	OP 2. Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil									
Lineamiento:	Lin 1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP									
Nombre del servicio:	Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal									
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no son atendidos en los módulos especializados de las comisarías									
Justificación:	Permite identificar el avance en la reforma de la justicia penal juvenil desde los servicios del Ministerio del Interior en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, desde el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.									
Responsable del indicador:	Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú									
Limitaciones para la medición del indicador:	Solo verifica el ingreso al servicio con estándares del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y no necesariamente identifica la acción concreta del personal policial durante la atención al adolescente.									
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100									
	Especificaciones técnicas: A: Total de atenciones a adolescentes entre 14 y menos de 18 años por infracción a la ley penal atendidos en comisarías donde no hay Módulos Especializados y no está vigente la implementación del CRPA B: Total de denuncias por adolescentes entre 14 y menos de 18 años por infracción a la ley penal en comisarías a nivel nacional.									
Sentido esperado del indicador:	Descendente	Tipo de indicador de servicio:						Calidad		
Fuente y base de datos:	Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú Dirección General de Información para la Seguridad									
Supuestos:	Se requiere que las instancias multisectoriales para la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprueben el avance en la vigencia de este cuerpo normativo en los Distritos Judiciales.									
	Línea de base	Logros esperados								
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	100%	98%	95%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 3.1.1									
Objetivo prioritario:	OP 3. Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal								
Lineamiento:	Lin 1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.								
Nombre del servicio:	Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal								
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos en Centros Juveniles que concluyen planes de tratamiento individual basados en un Modelo Integral.								
Justificación:	Permite identificar el avance en la reforma de la justicia penal juvenil desde los servicios del MINJUSDH en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal para su reinserción								



Responsable del indicador:	MINJUSDH - PRONACEJ								
Limitaciones para la medición del indicador:	No identifica de forma directa la reinserción social del adolescente al concluir el servicio, solo la atención especializada.								
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100								
	Especificaciones técnicas: A: Total de adolescentes con medidas socioeducativas atendidos en Centros Juveniles de medio cerrado y abierto a nivel nacional donde se haya implementado el Modelo Integral que concluyen la intervención B: Total de adolescentes con medidas socioeducativas atendidos en Centros Juveniles de medio cerrado y abierto a nivel nacional.								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente			Tipo de indicador de servicio:			Calidad		
Fuente y base de datos:	Unidad de Asistencia Post-internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención (UAPISE - PRONACEJ).								
Supuestos:	Se requiere que las instancias multisectoriales para la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprueben el avance en la vigencia de este cuerpo normativo en los Distritos Judiciales.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	0%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 3.1.2.	
Objetivo prioritario:	OP 3. Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
Lineamiento:	Lin 1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.
Nombre del servicio:	Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal
Nombre del indicador:	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos que concluyen el programa de orientación.
Justificación:	Permite identificar el avance en la reforma de la justicia penal juvenil desde los servicios del Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito en la atención de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal para su reinserción con enfoque restaurativo.
Responsable del indicador:	Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito.
Limitaciones para la medición del indicador:	No identifica de forma directa la reinserción social del adolescente a nivel educativo, familiar o comunitario al concluir el servicio, solo la atención especializada y la culminación del programa de orientación.
Método de cálculo:	Fórmula: (A/B) * 100
	Especificaciones técnicas: A: Total de adolescentes que concluyen satisfactoriamente el Programa de orientación de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa



	El programa de orientación involucra el desarrollo de actividades de un equipo técnico interdisciplinario el cual, inicialmente, ejecuta una evaluación integral y de riesgos a los y las adolescentes a partir del cual se genera un plan de intervención donde se aplica el enfoque restaurativo; además, coordina y monitorea al o la adolescente y a su familia en la ejecución de este programa en coordinación con instituciones y organizaciones de la comunidad. B: Total de adolescentes atendidos en el Programa de orientación de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa.								
Sentido esperado del indicador:	Ascendente		Tipo de indicador de servicio:			Calidad			
Fuente y base de datos:	Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa								
Supuestos:	Se requiere la sostenibilidad presupuestaria a los Distritos Fiscales donde está implementada la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa incluyendo la cobertura a la mayor cantidad de distritos territoriales dentro del Distrito Fiscal.								
	Línea de base	Logros esperados							
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	65%	70%	73%	76%	78%	80%	82%	85%	89%

VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Seguimiento

De acuerdo con la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2023), para facilitar el seguimiento de la política nacional el MINJUSDH en su calidad de Ministerio conductor, registrará en el aplicativo informático CEPLAN V.01, la información que irá obteniendo sobre los indicadores de los objetivos prioritarios y servicios. Esta recopilación de información se realizará de forma anual, siendo el principal insumo para la evaluación de los resultados, toda vez que permite conocer la evolución y/o avance en las metas planteadas, en concordancia a los indicadores.

Cabe destacar, que el aplicativo informático dispuesto por CEPLAN, está orientado a un registro de información integrado que cumpla con el principio de transparencia.

Asimismo, al ser una política multisectorial, corresponde a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) del MINJUSDH, generar los reportes de seguimiento, como órgano de planeamiento estratégico sectorial del Ministerio conductor. Para ello, se basará en la información detallada que deberá ser remitida por los diversos sectores que intervienen en la implementación de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal, de manera oportuna.

Los reportes de seguimiento se emiten de manera anual con corte al 31 de abril y contendrán la información provista por los ministerios intervinientes acerca del avance de los indicadores de los objetivos prioritarios. Estos reportes se generan en el mes de abril de cada año y servirán de insumo para la evaluación de implementación y los reportes de cumplimiento. Respecto a este último, tiene



como fecha límite el 15 de junio y permite contar con los principales resultados, avances, intervenciones y mejoras necesarias para la política nacional.

Para el caso de los indicadores que no presentan línea base, se tiene previsto recoger información de múltiples fuentes, en coordinación con las instituciones competentes, tanto aquellas involucradas en la implementación de la Política Nacional

7.2. Evaluación

7.2.1. Evaluación de diseño

Durante esta etapa, la autoridad administrativa CEPLAN analizará objetivamente, la coherencia interna relacionada a la debida articulación entre los objetivos prioritarios y lineamientos, así como los criterios de selección de los indicadores. Igualmente, en este primer momento, se examinará la coherencia externa, asociada a la identificación de políticas relacionadas, donde se analizará la consistencia de la articulación horizontal y vertical existente. Esta primera evaluación se ejecuta como parte del Informe Técnico de aprobación de la política nacional.

7.2.2. Evaluación de implementación

En donde se analiza la implementación de los servicios y lineamientos sobre los instrumentos de planificación nacional, regional y local, en cuanto corresponda, contienen objetivos y acciones estratégicas, así como actividades operativas, que faciliten la implementación.

La Dirección de Política Criminológica en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos elabora el informe como resultado de la comunicación constante y de intercambio de información con las entidades participantes de la política nacional.

7.2.3. Evaluación de resultados.

Se deben evaluar los cambios entre la situación inicial y final de cada año de los objetivos priorizados en la política nacional, mediante los indicadores planteados. Garantizar esta evaluación permite determinar los aspectos que están resultando exitosos y aquellos otros que requieren reformularse para mejores resultados, en función de las limitantes que se plantean.

Esta evaluación, se elabora en coordinación con la Dirección de Política Criminológica y la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH y debe remitirse a CEPLAN hasta el 31 de mayo de cada año posterior a la vigencia de la política nacional, en el mismo informe anual de cumplimiento del Ministerio, como ente rector.



Estos informes de seguimiento y evaluación se elaborarán considerando las orientaciones técnicas de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobado por el CEPLAN.

VIII. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

8.1. Glosario

- **Estigmatización**

Dinámica estrecha entre poder y desigualdad, donde quienes tienen el poder pueden utilizarlo a su voluntad. Por lo que, puede entenderse en general como un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y desvalorización de las personas de ciertos grupos de población, a menudo debido a un sentimiento de repugnancia (Goffman, 2006).

- **Política criminal**

Entendida el conjunto de medidas dispuestas por el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, dedicadas especialmente a la prevención y control del delito (Art. 2 del Decreto Supremo N°008-2012-JUS). Asimismo, presenta un marco de temporalidad prolongada frente a situaciones coyunturales, así como una fundamentación acorde con la protección y garantía de los derechos fundamentales de toda persona (Bermúdez, 2007).

- **Comportamientos antisociales**

Conjunto de conductas que se han visto influenciadas y estructuradas por una temprana socialización deficiente como consecuencia de una práctica familiar negligente y composición familiar insuficiente. Así como la presencia de rasgos temperamentales elevados como la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la ausencia de miedo (Herrera y Morales, 2005).

- **Deserción escolar**

Fenómeno que se ve influenciado por las condiciones estructurales y materiales de vida, las características socioeconómicas de los grupos sociales y las pautas culturales que determinan el desarrollo de actitudes, expectativas, acciones y comportamientos que no siempre favorecen el éxito escolar de los niños, niñas y adolescentes (Román, 2013).

- **Violencia estructural**

Conjunto de dinámicas sociales donde las personas son expuestas a escenarios de alienación y desintegración social que facilitan la organización de formas perjudiciales como la explotación y la represión social a la cual son expuestos y víctimas (Galtung, 2016).

- **Centro juvenil**

Encargado de ofrecer atención integral a los y las adolescentes, coherente con las normas internacionales y nacionales vigentes sobre administración de justicia a menores de edad, como la Constitución Política del Estado y el Código de los



Niños y Adolescentes, tendientes a la promoción y mantenimiento de la paz con justicia social (Herrera y Morales, 2005)

- **Medios socioeducativos**

Comprende acciones sociales de naturaleza y alcance educativo, en la cual la expresión socioeducativa pretende enfatizar la necesidad de una educación que dé respuesta a serie de necesidades sociales de los individuos, restableciendo y ampliando las oportunidades educativas de las personas y de los colectivos sociales en la vida cotidiana (Caride, 2005).

- **Reinserción social**

Busca reintegrar a las personas en la sociedad ya que dejó de formar parte de ella. Hace referencia a la dinámica de inserción social, puesto de que lo que se trata es que se integre en su entorno social, ya que ha sido una persona previamente excluida socialmente o estaba en la marginalidad (Gallizo, 2007).

**8.2. Acrónimos**

N°	Descripción del término o significado	Acrónimo, abreviatura o sigla
1	Adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal	ACLP
2	Centro de Educación Básica Alternativa	CEBA
3	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	CEPAL
4	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico	CEPLAN
5	Consejo Nacional de Política Criminal	CONAPOC
6	Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes	CRPA
7	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas	DEVIDA
8	Dirección de Política Criminológica	DPC
9	Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales	ENARES
10	Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil	ENPETI
12	Historical Clinical Risk Management-20	HCR-20
13	Instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa	IIEE
14	Observatorio Nacional de Política Criminal	INDAGA
15	Instituto Nacional de Estadística e Informática	INEI
16	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	MIMP
17	Ministerio de Educación	MINEDU
18	Ministerio del Interior	MININTER
19	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	MINJUSDH
20	Ministerio de Salud	MINSA
21	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	MTPE
22	Objetivos de Desarrollo Sostenible	ODS
23	Organización no gubernamental	ONG
24	Objetivo prioritario	OP
25	Presidencia de Consejo Directivo	PCD
26	Plan de Desarrollo Concertado	PDC
27	Plan Estratégico Institucional	PEI
28	Plan Estratégico Multisectorial	PEM
29	Plan Estratégico Sectorial Multianual	PESEM
30	Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia	PNAIA
31	Plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal	PNAPTA
32	Plan Operativo Institucional	POI
33	Programa presupuestal	PP
34	Programa Nacional de Centros Juveniles	PRONACEJ
35	Pontificia Universidad Católica del Perú	PUCP
36	Structured Assessment of Violence Risk in Youth	SAVRY
37	Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal	SINARSAC
38	Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención	UAPISE
40	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	UNMSM



IX. Anexos

Anexo 01: Metodología

Para la actualización de la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA) se aplicarán metodologías de naturaleza cualitativa y cuantitativa, según lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En ese sentido, la metodología utilizada es la siguiente:

Método Cuantitativo

- Técnicas de estadística descriptiva: Permite el análisis de data con el fin de establecer la situación actual de un fenómeno social.
- Técnicas de estadística inferencial: Permite el análisis de data con el fin de establecer conclusiones que sean generalizables.
- Análisis de tendencias: Esta técnica permite observar el comportamiento de las variables a través del tiempo. Para ello, se sirve de data histórica y actual.

Método cualitativo

- Revisión documental: Consiste en la revisión de investigaciones, publicaciones, documentos normativos e informes.
- Árbol de problemas: Instrumento que permite estructurar un problema a partir de la identificación de sus principales causas y efectos.
- Juicios de expertos/as: Consiste en la valoración y opinión informada que brindan personas consideradas expertos temáticos.
- Talleres participativos: Es el espacio de reflexión y trabajo de equipos, donde participan actores de diversa naturaleza acordes al objetivo que los convoca, lo cual incluye a la propia población adolescente y otras organizaciones civiles involucradas.
- Reuniones técnicas multisectoriales: Consiste en el intercambio de conocimientos y experiencias de funcionarios y servidores de las entidades públicas.

De lo mencionado, a continuación, se estructura el tipo de metodología que se utilizó en las etapas de diseño y formulación. En la Tabla 1 y 2 se detallan las actividades en cuanto al diseño y la formulación, respectivamente.

**Tabla 1: Técnicas de recolección, análisis y validación en la etapa de diseño de políticas nacionales**

ETAPA DISEÑO		
Etapas	Instrumentos utilizados	Resultados
• Delimitación del problema público	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental • Estadística descriptiva • Estadística inferencial • Reuniones técnicas • Consultas participativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación y delimitación del problema público
• Enunciación y estructuración del problema público	<ul style="list-style-type: none"> • Árbol de problemas • Juicios de expertos/as • Talleres participativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico que contenga la enunciación del problema público e identificación de sus principales causas.
• Determinación de la situación futura deseada	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de tendencias • Reuniones técnicas multisectoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • Escenarios de oportunidad y riesgos de la situación futura deseada.
• Selección de alternativas de solución	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones técnicas multisectoriales • Juicios de expertos/as • Talleres participativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativas de solución del problema público

Elaboración: Dirección de Política Criminológica – MINJUSDH

Tabla 2: Técnicas de recolección, análisis y validación en la etapa de formulación de políticas nacionales

ETAPA DE FORMULACIÓN		
Etapas	Instrumentos utilizados	Resultados
• Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones técnicas multisectoriales • Juicios de expertos/as 	<ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de objetivos prioritarios e indicadores, considerando su viabilidad política, técnica y normativa.
• Elaboración de lineamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones técnicas multisectoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de lineamientos, considerando viabilidad política, técnica y normativa.
• Identificación de los servicios y estándares de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental • Reuniones técnicas multisectoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de servicios públicos de la futura política.
• Identificación de las políticas relacionadas	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental • Reuniones técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de políticas articuladas.

Elaboración: Dirección de Política Criminológica - MINJUSDH



Anexo 02: Determinación de la situación futura deseada

La variable central del problema público es el contexto criminógeno e implica el contexto sociofamiliar en los cuales habitan diversos adolescentes a nivel nacional, estando este ambiente de desarrollo caracterizado por la presencia de factores de riesgo y escasos factores de protección que contribuyen en la formación de trayectorias delictivas y la comisión de infracciones a la ley penal. De este modo, la presente Política Nacional pretende disminuir este problema que enfrentan los y las adolescentes en la actualidad.

De este modo, al año 2030, el contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal está reducido y particularmente ha disminuido significativamente las infracciones a la ley penal más frecuentes y con mayor impacto en la criminalidad que se producen entre los y las adolescentes de 14 y menos de 18 años. Al 2030, se aplican programas especializados, y multisectoriales por parte del Estado, que permiten fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo criminógeno, evitando una activa vinculación a contextos criminógenos en las instancias más nucleares de socialización: instituciones educativas, familias y comunidades. Finalmente, se ha concluido la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo N°1348) y para su estabilidad presupuestal se viene aplicando su Programa presupuestal orientado por resultados.

Análisis de tendencias.

Desde que se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Perú tiene como compromiso buscar la satisfacción integral de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, se debe priorizar la ejecución de políticas que brinden diversos recursos y oportunidades en pro del desarrollo a lo largo de su vida. Sin embargo, en la última década, el problema de la inclusión de adolescentes en infracciones a la Ley Penal ha ido en aumento, de tal modo que, desde el año 2000 al 2015 casi se ha duplicado la tasa de atenciones dentro de los Centros Juveniles a nivel nacional (Observatorio Nacional de Política Criminal, 2016)¹⁴. Por otro lado, el fenómeno criminológico que permite mantener la agenda pública, la cual exige enfrentar a la delincuencia, implica la participación de adolescentes en formas de violencia y delincuencia cada vez más violenta (Observatorio Nacional de Política Criminal, 2016).

La evidencia internacional para la disminución de la delincuencia advierte que si una política criminológica pretende lograr resultados positivos se debe intervenir en diversas dimensiones como: gobernanza, eficacia del sistema de justicia penal, confianza en las instituciones, desarrollo social, desempleo juvenil, factores de riesgo criminógeno en la

S., y Lipsey, M. (2012). Risk Factors and Crime. Oxford Handbooks. doi:10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0005.

¹⁴ Alcázar, L., Balarin, M., Glave, C. & Rodríguez, M. (2017). Más allá de los ninis: los jóvenes urbano-vulnerables en el Perú. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.

¹⁴ Observatorio Nacional de Prospectiva de CEPLAN <https://observatorio.ceplan.gob.pe/inicio>

¹⁴ CEPLAN (2020) Perú 2050: tendencias nacionales con el impacto de la COVID-19.

¹⁴ <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=PE>

¹⁴ Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017). II Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas o Censo peruano. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

¹⁴ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1057132/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-201720200728-16199-13m9bxbp.pdf>

¹⁴ Observatorio Nacional de Política Criminal (2016) ¿Cómo son los Adolescentes Infractores en el Perú? Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Lima.



niñez y adolescencia, inequidad social y monetaria, y falta de planificación urbana (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2016; Banco Interamericano de Desarrollo, 2018; Tanner-Smith, Jo y Lipsey, 2012)¹⁵, y consecuentemente, la presencia de condiciones negativas en cada uno de esos factores conlleva al fracaso de los programas y planes para la reducción de la inseguridad y delincuencia.

En este sentido, durante los últimos años en el Perú la situación socioeconómica se ha desarrollado de tal manera que ha impactado de forma muy relacionado con la formación de contextos criminógenos en diversas zonas de las regiones en el Perú, de modo que, por un lado, el incremento del bono demográfico, aumento de la población adolescente y joven, durante los últimos seis años (Secretaría Nacional de la Juventud, 2018) genera una oportunidad para incrementar el desarrollo nacional, sin embargo, la falta de inversión social y económica posibilita un contexto para el desarrollo de trayectorias en condiciones de vulnerabilidad (Alcázar y Balarín, 2018)¹⁶.

De igual modo, las tendencias nacionales al 2030 identificadas por CEPLAN¹⁷ establecen que el consumo de drogas ilícitas se incrementará específicamente en áreas urbanas, las tasas de desempleo e informalidad laboral también seguirán en aumento, las familias tengan una mayor cobertura a atención integral en salud para asegurar el bienestar de las personas, la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes crecerá, la concentración en las grandes urbes aumentará, la población de niños, niñas y adolescentes dependientes se incrementará, la desigualdad de ingresos crecerá ligeramente, asimismo, estos cambios a nivel nacional estarán acompañados de un aumento ligero de hechos delictivos e inseguridad ciudadana.

Por otro lado, el incremento de la pobreza y decrecimiento económico (CEPLAN, 2020)¹⁸, acompañado de la permanencia de índices considerables de desigualdad (Banco Mundial, 2019)¹⁹ a nivel nacional entre el 2013 y 2017, conlleva a limitar el desarrollo humano. De igual modo, la presencia de un elevado porcentaje de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social con fracaso escolar (INEI, 2017)²⁰ evita efectivizar la culminación de la escolaridad y la obtención de trabajo con niveles más altos de formalidad y respeto de los derechos. Además, la tendencia de que aproximadamente el 22% de jóvenes no estudia y trabaja se mantenga al 2030 está

¹⁵ Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2016). Prevención de La criminalidad y seguridad cotidiana: Las ciudades y la Nueva Agenda Urbana (5to informe internacional). Recuperado de: <https://cipc-icpc.org/es/informe/5o-informe-internacional-sobre-la-prevencion-de-la-criminalidad-y-la-seguridad-cotidiana-las-ciudades-y-la-nueva-agenda-urbana/>; Banco Interamericano de Desarrollo (2018). Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>; Tanner-Smith, E., Wilson, S., y Lipsey, M. (2012). Risk Factors and Crime. Oxford Handbooks. doi:10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0005.

¹⁶ Alcázar, L., Balarín, M., Glave, C. & Rodríguez, M. (2017). Más allá de los ninis: los jóvenes urbano-vulnerables en el Perú. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.

¹⁷ Observatorio Nacional de Prospectiva de CEPLAN <https://observatorio.ceplan.gob.pe/inicio>

¹⁸ CEPLAN (2020) Perú 2050: tendencias nacionales con el impacto de la COVID-19.

¹⁹ <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=PE>

²⁰ Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017). II Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas o Censo peruano. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



relacionada con estas condiciones globales de exclusión y falta de oportunidades de desarrollo (CEPLAN, 2019)²¹.

Es importante señalar que, a su vez, el crecimiento del porcentaje de la población urbana (INEI, 2018), acompañado de un desenvolvimiento desorganizado en el crecimiento de las ciudades, así como el incremento de la tasa de homicidios a nivel nacional (Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, 2018)²², permite generar espacios de inseguridad con una cultura delictiva de forma frecuente. Ello está relacionado, con el mantenimiento de la percepción de la ciudadanía la cual considera que la delincuencia es uno de los principales problemas del país (INEI, 2018), además, el mantenimiento de la desconfianza en las instituciones públicas (Banco de Desarrollo de América Latina, 2018). En efecto, estas condiciones determinan un espacio sociopolítico que dificulta el desarrollo e implementación de políticas criminales asociadas a la delincuencia juvenil, a pesar de que se haya establecido una relación positiva en la erradicación de formas de violencia y delincuencia juvenil con el desarrollo social general de los países (Banco de Desarrollo de América Latina, 2014)²³.

Asimismo, frente al mantenimiento de las condiciones de criminalidad, inicialmente el Estado peruano ha implementado políticas criminales punitivas y represivas, no obstante, el hacinamiento en los Centros Juveniles, la vulneración de derechos de los y las adolescentes, el incremento de los delitos e inclusión de adolescentes en crímenes más violentos ha puesto en tela de juicio ese tipo de alternativas de solución (Muggah, Garzón y Suárez, 2018). En este contexto, con la creación del Consejo Nacional de Política Criminal, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el Programa Nacional de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público se promovió una dinámica entre diversas entidades públicas y privadas involucradas en la temática generando diversos programas vinculados a la prevención de la delincuencia, aunque aún insuficientes. De este modo, el contexto socioeconómico, la agenda pública y del Estado impulsan la continuidad y fortalecimientos de las iniciativas para disminuir de forma significativa el problema de la violencia y delincuencia.

Matriz de análisis de tendencias.

Tipo	Tendencia	Descripción	Riesgo /Oportunidad	Análisis	Probabilidad de ocurrencia	Impacto potencial
Sociales	Incremento de la inseguridad ciudadana	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, indican que la victimización y el miedo al delito aumentarán.	Oportunidad	El incremento de la inseguridad ciudadana podría aportar positivamente en la consecución de la situación futura deseada debido a que	4	3

²¹ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1057132/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%A9-AL-2030-sello-de-agua-29-05-201720200728-16199-13m9bxbp.pdf>

²² Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (2018). Homicidios en el Perú, contándolos de uno a uno 2011-2017. Informe estadístico N°6. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1532/index.html

²³ Banco de Desarrollo de América Latina – CAF (2014). Por una América Latina más segura. Una perspectiva para prevenir y controlar el delito. Bogotá: CAF.



				podría abrir un campo de oportunidad para posicionar la agenda pública para el trabajo de prevención con adolescentes ante el fracaso de las medidas o política en la criminalidad adulta.		
			Riesgo	El incremento de la inseguridad ciudadana podría agudizar el problema público debido a que estos elevados indicadores tienden a acompañarse, al mismo tiempo del crecimiento de estadísticas en materia de delincuencia juvenil en tanto que el crimen organizado y las bandas involucran adolescentes.	4	3
	Incremento de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, indican que todas las manifestaciones de violencia contra los integrantes del grupo familiar y escolar hacia los niños, niñas y adolescentes crecerán de forma significativa.	Oportunidad	El incremento de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes podría aportar positivamente en la consecución de la situación futura deseada debido a que podría abrir un campo de oportunidad para priorizar una agenda pública que promueva una mayor inversión en infancia y adolescencia para contrarrestar la violencia contribuirán indirectamente intervenir sobre la población en riesgo de	4	3



				delincuencia en comunidades de mayor violencia y criminalidad.		
			Riesgo	El Incremento de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes podría agudizar el problema público debido a que la violencia sexual a lo largo de la niñez y adolescencia impacta de forma significativa en el desarrollo para expresar futuras agresiones sexuales adultas, lo cual retrasa o impide fortalecer las acciones de prevención de la delincuencia sexual.	4	3
			Oportunidad	N/A	N/A	N/A
	Incremento de la pobreza y el incremento de la desigualdad de ingresos	El análisis prospectivo al 2030, post COVID-19, precisa que la población en todas las regiones del Perú en condición de pobreza extrema aumentará considerablemente, ello acompañado de un incremento gradual del reparto inequitativo de la riqueza.	Riesgo	El Incremento de la pobreza y el incremento de la desigualdad de ingresos podría agudizar el problema público debido a que el empobrecimiento de la población sumada a la cada vez mayor desigualdad de ingresos agudiza el problema público ya que mantener la exclusión social y pocas oportunidades de desarrollo de los y las adolescentes y jóvenes es compatible directamente con el incremento de la delincuencia.	4	4
	Mayor concentración de la población en	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, indican que el incremento	Oportunidad	La mayor concentración de la población en centros urbanos	4	3



	centros urbanos	poblacional se seguirá concentrando en las áreas urbanas.		podría aportar positivamente en la consecución de la situación futura deseada debido a que el incremento de las ciudades estado como núcleos de desarrollo social, económico y tecnológicos pueden potenciar el bienestar general de la población adolescente.		
			Riesgo	La mayor concentración de la población en centros urbanos podría agudizar el problema público debido a que el crecimiento desorganizado y excluyente de las ciudades permite empeorar las relaciones pacíficas entre la población.	4	3
	Mayor dependencia demográfica	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, precisan que la población menor de 14 y mayor de 65 se incrementará	Oportunidad	La mayor dependencia demográfica podría aportar positivamente en la consecución de la situación futura deseada debido a que podría abrir un campo de oportunidad para la priorización de políticas enfocadas en la niñez lo cual fortalece indirectamente la promoción e inversión del desarrollo integral en comunidades y regionales con mayores niveles de criminalidad o violencia.	4	3
			Riesgo	N/A	N/A	N/A
Económicas			Oportunidad	N/A	N/A	N/A



	Incremento de los jóvenes que no estudian y trabajan (NiNis)	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, indican que en el Perú persistirá el incremento de la población de jóvenes que no estudian ni trabajan.	Riesgo	El incremento de los jóvenes que no estudian y trabajan (NiNis) podría agudizar el problema público debido a que la precariedad en las condiciones educativas y laborales de los y las adolescentes y jóvenes expone a mayores riesgos en el desarrollo social del bienestar y en el capital social, aspectos directamente afines a la inclusión en trayectorias delictivas.	4	4
	Incremento del empleo informal	El análisis prospectivo al 2030, post COVID-19, precisa que en el Perú se mantendrá el incremento de personas en empleos independiente o no remunerados, así como trabajo en condiciones de informalidad.	Oportunidad	N/A	N/A	N/A
Riesgo			El incremento del empleo informal podría agudizar el problema público debido a que se incluiría principalmente a los jóvenes y adolescentes en mercados informales y con explotación laboral lo cual impide mejorar sus condiciones de vida, y no fortalece su capacidad para integrarse a la sociedad bajo conductas prosociales.	4	3	
Políticas	Mayor desconfianza en los poderes del Estado	Las proyecciones al 2030, post COVID-19, indican que en el Perú la población incrementará su desconfianza en la efectividad de los poderes del Estado para cumplir su rol y obtener resultados.	Oportunidad	N/A	N/A	N/A
			Riesgo	La mayor desconfianza en los poderes del Estado podría agudizar el problema público debido a que la persistencia de la corrupción y la percepción de ineficacia de las instituciones acarrea la legitimidad de	4	3



				actos violentos y no favorece el respaldo de acciones a nivel de la política criminal, a pesar de formar parte de la agenda pública. Manteniendo la cultura y valores la ilegalidad e impunidad que acompañan al niño, niña y adolescencia indirectamente en su socialización.		
--	--	--	--	--	--	--

* La escala de 1 al 5 indica que ha mayor cantidad es más probable que ocurre o impacte en los objetivos de la Política Nacional, de modo que, considerando la escala está relacionada con la probabilidad de ocurrencia y potencial de impacto la calificación se basó en el análisis por expertos de los diversos sectores en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Análisis de escenarios contextuales

Estos escenarios futuros proyectados al 2050 por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico son definidos como narraciones plausibles, compuestas por tendencias, eventos y decisiones enlazados entre sí de manera coherente, a través de relaciones causales e impactan significativamente en la efectividad de la intervención estatal para resolver los problemas públicos, conforme al análisis multidimensional de la OCDE.

A continuación, se describen los elementos más significativos que están vinculados con la presente Política Nacional respecto a cada uno de los cinco escenarios los cuales son detalladas a modo de condiciones macrosociales:

- **Escenario 1: Disrupción ambiental**

La política en materia ambiental no es priorizada al año 2030 y se mantienen las consecuencias negativas del cambio climático a nivel nacional, de modo que, se presentan perjuicios en la biodiversidad, pérdidas de recursos naturales, alteraciones en la productividad biológica, erosiones e inundaciones, así como el incremento de las enfermedades infecciosas.

La centralización de los esfuerzos estatales en la reactivación económica se mantiene hasta el 2030, no ejecutándose acciones para enfrentar o evitar fenómenos naturales relacionados con los eventos extremos como la temperatura, sequías, inundaciones, así como la producción de gases de efecto invernadero.

- **Escenario 2: Disrupción tecnológica**

En el contexto de la cuarta revolución industrial, se identifica la priorización de actividades relacionadas con la digitalización, interconectividad, ingeniería genética y biotecnología. Estos aspectos impactan el desarrollo social a nivel de la automatización de la producción, la inteligencia artificial, tratamiento de las enfermedades, reducción de la contaminación del ambiente, uso de vehículos



eléctricos y autónomos, uso de drones, utilización del grafeno, tecnologías 3D, y la elevada inversión en la utilización de tecnologías móviles.

El incremento de la población con escolaridad completa y la mayor exigencia en competencias laborales relacionadas con la digitalización e inteligencia artificial permiten mayor bienestar, asimismo, el control situacional de las zonas urbanas mediante vigilancia tecnológica contribuye en el control de la reducción de los delitos a nivel situacional.

- **Escenario 3: Ocurrencia de desastre mayor**

En el contexto de un gran terremoto a inicios de la década de 2020 y el fenómeno de El Niño, se identifica una significativa disminución del PBI, los precios de los alimentos han aumentado de forma acelerada, daños económicos, desastres naturales a nivel nacional, elevado nivel de contaminación ambiental y el aumento de la pobreza, el hambre y la desnutrición a nivel nacional. Este desastre ocasiona el deterioro de infraestructura urbana que permite generar mayores oportunidades ambientales donde se presenten hechos delictivos.

- **Escenario 4: Crisis económica**

Producto de la pandemia por la COVID-19 desde inicios del 2020 hasta el 2022, en el Perú, se tuvo implicancias directas en la producción, el empleo, los ingresos y en la provisión de los servicios; y de manera indirecta, la recesión económica mundial redujo la demanda externa por la menor actividad económica de los principales socios comerciales del Perú, provocó la caída de los precios de los productos primarios, redujo las remesas, empeoró las condiciones financieras, y significó una menor demanda de servicios turísticos. De este modo, la inestabilidad económica peruana y mundial propicia el crecimiento de la inseguridad ciudadana principalmente en las zonas urbanas más pobladas.

- **Escenario 5: Crisis social**

Al 2050, existe indignación cada vez más alta y ya no se puede confiar en certezas pasadas. Los ciudadanos han perdido confianza en el sistema político, la percepción negativa de las instituciones cruza las líneas ideológicas. El descontento se centra en los desafíos de las políticas locales y no tiene en cuenta los tradicionales debates de izquierda o derecha.

En 2030, el desconocimiento e incomprensión de tradicionales élites políticas y económicas, arraigada en manos de unos pocos, mantiene la desigualdad y el desencanto de la población frente al sistema político y las instituciones, exagera la intolerancia a las diferencias, genera odio y violencia. La desconfianza en los poderes del Estado se mantiene alta, sobre todo frente al Congreso y el Poder Judicial. Además, se observa una mayor desaprobación de la gestión del gobierno central y regional. Persisten los escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años han calado en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y privadas. Además, la historia política del Perú está constantemente manchada por delitos de corrupción, dificultades por parte de las



autoridades del sistema de justicia y desigualdad. Cada vez es más difícil consolidar la democracia y transparencia intergubernamental, debido al incremento de casos de mafias y corrupción en el sector público y privado. La falta de efectividad de la gestión de Estado, sumado al inadecuado encausamiento de las demandas ciudadanas, ha propiciado un clima de permanente inestabilidad social en el país. En efecto, el mantenimiento de las condiciones de desigualdad y débil gobernabilidad contribuyen en el incremento de los indicadores de victimización por delitos comunes en zonas urbanas más pobladas.

Matriz de análisis de escenarios contextuales

Escenario	Descripción	Riesgo - oportunidad	Análisis	Probabilidad de ocurrencia	Impacto potencial
Disrupción ambiental	Incremento de los desastres naturales y pérdidas de la biodiversidad ambiental por la no priorización de políticas ambientales, solo de reactivación económica.	Oportunidad	N/A	N/A	N/A
		Riesgo	Junto a la elevada probabilidad de ocurrencia de un terremoto y fenómeno del niño, los otros desastres naturales no permiten el crecimiento organizado de las ciudades a nivel nacional y por ello generan condiciones para la violencia y delincuencia a nivel de las comunidades.	3	3
Disrupción tecnológica	Incremento de la mecanización y robótica en la industria, incremento del uso de tecnologías, importancia de la educación y las competencias, masificación del uso del internet.	Oportunidad	El incremento de la finalización de la escolarización y competencias tecnológicas y el uso de herramientas de vigilancia y control situacional contribuyen en la disminución de la delincuencia juvenil.	4	3
		Riesgo	La mecanización puede remplazar a la mano de obra y afecta las posibilidades laborales de la población joven que acompañado de la permanencia de desarrollo desigual se incrementen el número de adolescentes en deserción escolar. Asimismo, permite que las organizaciones y grupos criminales incluyan el uso de herramientas informáticas para ejecutar ciberdelitos.	4	3
Ocurrencia de desastre mayor	Ocurrencia de un gran terremoto o desastre natural mayor que termina por generar pérdidas económicas y daño a las infraestructuras.	Oportunidad	N/A	N/A	N/A
		Riesgo	La destrucción de ciudades favorece la desorganización social en las comunidades y pérdida de la cohesión social por ello contribuye con factores que propician el desarrollo del delito en los y las adolescentes. Los desastres naturales como un terremoto o fenómenos del niño generar inestabilidad económica y social lo cual favorece contextos de riesgo para el desarrollo adolescente.	3	4
Crisis económica	Al 2030, aún se mantienen niveles de inestabilidad económica que impiden el progreso a nivel nacional.	Oportunidad	N/A	N/A	N/A
		Riesgo	Los niveles de crecimiento económico decrecerán, acompañados con niveles de desigualdad social lo cual está	4	4



			relacionado con la presencia de violencia juvenil.		
Crisis social	Persiste la desconfianza en las instituciones públicas y la fragilidad de estas junto al descontento social permiten acentuar las condiciones de violencia social.	Oportunidad	El acceso a servicios públicos de baja calidad, los menores ingresos en los hogares y la exclusión social que abren un campo en la agenda pública para priorizar políticas para proteger a la población más vulnerable entre ellas a la población de niños, niñas y adolescentes e indirectamente a aquellos que viven en condiciones de criminalidad y violencia.	4	2
		Riesgo	El mantenimiento de los objetivos de las políticas públicas se ve muy afectado por la fragilidad de las instituciones públicas, lo cual conlleva a que las metas cuenten con elementos perjudiciales para su logro, desde las propias autoridades públicas, sumado, al enfoque punitivo de las políticas criminológicas de las principales agrupaciones políticas, desfavoreciendo el logro en la implementación de políticas preventivas y de justicia penal juvenil diferenciada.	4	5

* La escala de 1 al 5 indica que ha mayor cantidad es más probable que ocurre o impacte en los objetivos de la Política Nacional. No obstante, debido a que el análisis procede de la investigación prospectiva de CEPLAN (2019) la mayoría de escenarios son muy probables, asimismo, se basó en el análisis por expertos de los diversos sectores en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Anexo 03: Recojo de las aspiraciones de las personas en relación con el problema público

1. Proceso de recojo de las aspiraciones

- En mayo del 2020, se realizó la comunicación (Oficio N°369-2020-JUS/DM-ST-CONAPOC) con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), particularmente, con la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes para realizar una consulta nacional a través del Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Con la venia de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el mes de mayo del 2020, en la sede central del MIMP se estableció comunicación con los coordinadores nacionales del Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Durante el mes de junio, se remitieron cuestionarios virtuales a todas las sedes del Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes para recoger las aspiraciones sobre el problema de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Previamente, se enviaron materiales informativos y audiovisuales a los y las adolescentes para contextualizar el objetivo y contenido de la política nacional.

2. Metodología

- Bajo un enfoque cualitativo, se elaboró un cuestionario virtual anónimo con seis (06) preguntas abiertas consultando la percepción sobre el problema público y cuáles serían las mejoras alternativas desde el Estado para disminuirlo.
- Se utilizó las herramientas libres de Google Forms para poder brindar el cuestionario. El cuestionario fue previamente explicado por los coordinadores de las regiones pertenecientes al Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, se contó con la información desde el MINJUSDH hacia los y las adolescentes.

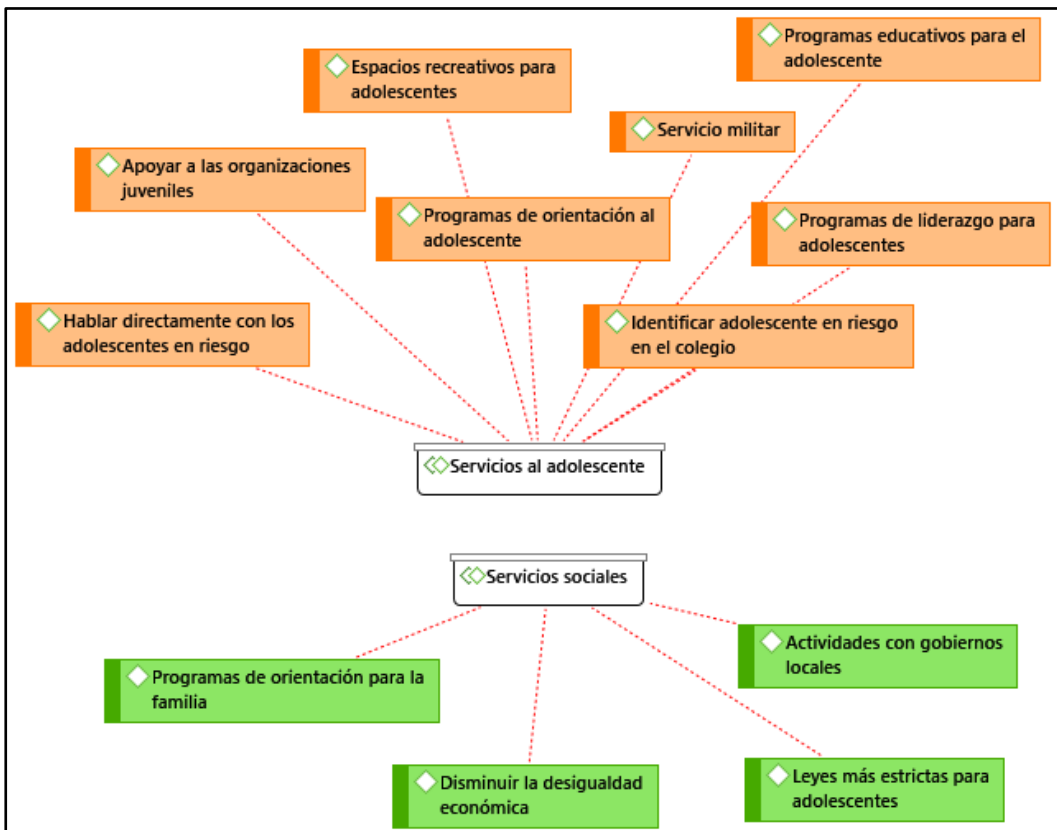
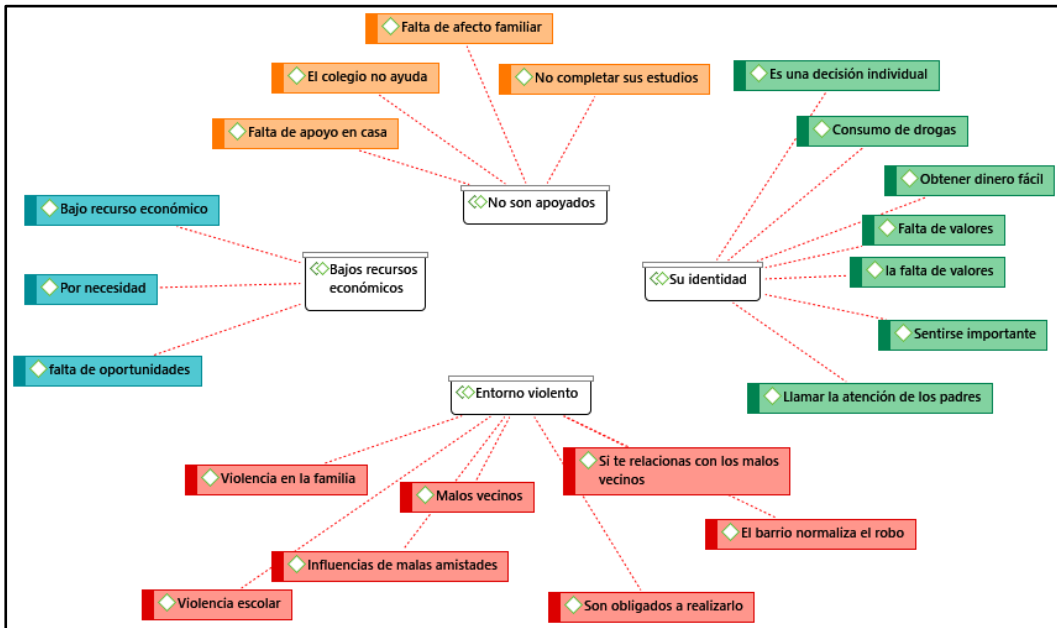
3. Participantes

Se recogió la opinión de 67 adolescentes mujeres y varones a nivel nacional distribuidos en las siguientes regiones:

- | | |
|--------------|-------------|
| - Lima | - Piura |
| - Amazonas | - Ucayali |
| - Ica | - Tumbes |
| - Cusco | - Huánuco |
| - Arequipa | - Junín |
| - Pasco | - Cajamarca |
| - San Martín | - Callao |
| - Loreto | - Moquegua |

4. Procesamiento de los datos

Se utilizó el paquete informático ATLAS. Ti.9 para el análisis de las respuestas de cada una de las 06 preguntas abiertas considerando la codificación para obtener la percepción global. Se obtuvieron los siguientes resultados agrupados en dos dimensiones: 1) Problema público y 2) Alternativas de solución, tal como se muestra en las siguientes imágenes, respectivamente.





5. Conclusiones

- Los y las adolescentes muestran preocupación y perciben que la delincuencia juvenil está vinculada con la falta de diversos servicios sociales en la comunidad, institución educativa y la familia para el apoyo al adolescente en su desarrollo.
- Los y las adolescentes aspiran a que el Estado brinde de forma constante y directa servicios sociales para evitar que los jóvenes ingresen a la criminalidad.

**Anexo 04: Análisis de costos y beneficios de las alternativas de solución****Alternativas de solución**

En el siguiente cuadro se resumen las alternativas de solución tomadas en consideración para la evaluación costo efectividad.

Cuadro N° 1
Resumen de alternativas

Causa directa	Alternativa I	Alternativa II
1. Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	Programas de intervención focalizados en instituciones educativas de alto riesgo.	Programas para brindar lecciones en el aula contra la violencia y para prevenir el abuso escolar.
	Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas.	Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas.
	Programas comunitarios para mejorar el contexto social y comunitario en zonas priorizadas.	Programas comunitarios para mejorar el contexto social y comunitario.
	Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo a través del sistema educativo.	Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.
2. Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	Implementación progresiva a nivel nacional del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. N°1348).	Implementación progresiva a nivel nacional del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. N°1348).
	Ejecutar programas de formación permanente a los operadores de justicia penal juvenil para brindar una justicia diferenciada y especializada.	Ejecutar programas de formación permanente para brindar una justicia diferenciada y especializada.
	Fortalecer la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa con la implementación en todos los distritos fiscales a nivel nacional.	Fortalecer la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa con la implementación en todos los distritos fiscales a nivel nacional.
3. Limitada intervención para la reinserción social	Ejecución de un modelo de intervención diferenciada con enfoque de derechos en los centros juveniles del Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUSDH.	Ejecución de un modelo de intervención diferenciada con enfoque de derechos.
	Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social en los centros juveniles del Programa Nacional de Centros Juveniles	Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social



	del MINJUSDH, así como el Programa de Prevención Estratégica del Ministerio Público.	
	Fortalecer la reinserción laboral y educativa por medio de la articulación y coordinación con el sector privado para la inclusión laboral a favor de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en los centros juveniles del Programa Nacional de Centros Juveniles del MINJUSDH, así como el Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público.	Fortalecer la reinserción laboral y educativa por medio de la articulación y coordinación con el sector privado para la inclusión laboral y educativa de los y las ACLP.

En base a estas alternativas se han considerado dos escenarios de crecimiento poblacional. El primer escenario establecido en base a la alternativa I, basadas en la implementación de programas de prevención social y comunitaria en colegios, la comunidad y las familias, así como la priorización de las medidas no privativas de libertad en la justicia penal juvenil para garantizar una reinserción social basada en evidencia, que tendrá como efecto la modificación de las medidas socioeducativas y por ende la liberación de adolescentes en conflicto con la ley penal (ACLP) de los centros juveniles. Por lo tanto, la proyección de población para la alternativa I difiere en menor cantidad de la proyección para la alternativa II.

Cuadro N° 2
Proyección de la población

	Año	Medio abierto	Medio cerrado	Total	Capacidad de albergue	Alternativa I	Alternativa II
histórico	2015	1,313	1,943	3,256	2,097		
	2016	1,368	2,168	3,536	2,097		
	2017	1,790	2,111	3,901	2,097		
	2018	1,670	2,060	3,730	2,097		
	2019	1,734	2,097	3,831	2,097		
	2020	1,918	2,135	4,053	2,097		
Proyección	2021	2,009	2,090	4,099	2,097	4,049	4,099
	2022	2,030	2,108	4,138	2,097	4,085	4,138
	2023	2,170	2,124	4,294	2,097	4,239	4,294
	2024	2,267	2,118	4,385	2,097	4,327	4,385
	2025	2,336	2,115	4,451	2,097	4,390	4,451
	2026	2,429	2,129	4,558	2,097	4,494	4,558
	2027	2,535	2,128	4,663	2,097	4,596	4,663
	2028	2,615	2,128	4,743	2,097	4,673	4,743
	2029	2,704	2,133	4,837	2,097	4,763	4,837
	2030	2,800	2,137	4,937	2,097	4,859	4,937
	2031	2,889	2,137	5,026	2,097	4,945	5,026



El análisis de costo-efectividad (ACE) es una forma de análisis económico que compara los costos relativos con los resultados (efectos) de dos o más cursos de acción²⁴. Los costos relativos se comparan por medio del Valor Actual de Costos (VAC), que trasladan los costos de distintos periodos al periodo inicial considerando sus costos de oportunidad ($i = 8\%$).

El cálculo de los costos de las alternativas de la Política Nacional se ha efectuado considerando el presupuesto destinado a atender a los y las adolescentes en conflicto de ley penal. Para identificar el presupuesto se ha recurrido a una revisión del Plan Operativo Institucional de las distintas instituciones que tienen como objetivo atender al público objetivo.

- 1) Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)
- 2) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) mediante la DPP, DCMA Y DPC (ST -CRPA)
- 3) Ministerio de Educación (MINEDU)
- 4) Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN)
- 5) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
- 6) Poder Judicial (PJ)

Operativamente, el Índice de Costo Efectividad (ICE) se obtiene de la división entre el VAC y el total de la población beneficiaria durante el periodo de análisis.

$$ICE = \frac{VAC}{Población\ beneficiaria}$$

Donde:

$$VAC = I_0 + \frac{C_1}{(1+i)^1} + \frac{C_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

Para el cálculo de los costos, primero se realiza una proyección de la población tanto de medios cerrado como medios abiertos para un periodo de 10 años. Para mayor detalle revisar Cuadro N° 2

Como segundo paso se realizó el cálculo aproximado de los costos de la política para cada uno de sus actores:

- El PRONACEJ destina un aproximado de 15,490 PEN por cada adolescente con conflicto con la ley penal, para el cálculo de los costos de la política se ha multiplicado el costo unitario por la proyección de adolescentes. Además, se ha considerado el costo de la implementación progresiva del Nuevo código de adolescentes en la SOA CAÑETE, SOA ventanilla, SOA Huaura, SOA Callao, SOA Lima este, Lima sur, Lima norte, Santa Margarita, Rimac, ANCON II y CJDR LIMA.

²⁴ García, E. (2014). Evaluación de las políticas públicas para el desarrollo: efectividad, eficiencia y rentabilidad. *Globalización y desarrollo*, 880, pág. 151-163. Recuperado de <http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1721>



- El Ministerio Público, en el marco del Plan Nacional de Acción por la infancia y adolescencia 2012-2021, respondiendo al Resultado Esperado 11: Las y los adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal disminuyen y el Plan Nacional de Prevención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley Penal actualmente destina un total de 10, 715,615.00 PEN. Para los años posteriores, durante la ejecución de la política se espera que el presupuesto incremente un 4% el primer año y posteriormente incluya además el presupuesto de la implementación del código de adolescentes, con la implantación sucesiva en los distritos fiscales de Cañete, Callao, Huaura, Lima, Lima Este, Lima norte, Lima sur y Ventanilla.
- El MINEDU, por medio de la actividad "Implementación de acciones de prevención, espacios de dialogo y gestión de conflictos" destina un aproximando de 2, 024,372.00 PEN. En el marco de la política se espera que el presupuesto incremente a una tasa anual de 5% para el primer año y 7% para los años posteriores.
- El MIMP, por medio de 2 servicios y distintas acciones destina un total de 49, 384,940.00 PEN en la atención a niños y adolescentes en riesgo. En el marco de la política se espera que el presupuesto incremente a una tasa anual de 5%.
- El Poder Judicial, se espera que destine un presupuesto exclusivo para adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo la implementación progresiva del código de adolescentes en los 34 distritos fiscales.
- MINJUSDH, Se espera que destine un presupuesto proporcional al 65% de la implementación progresiva del código de adolescentes por el PRONACEJ, para acompañar el proceso de adopción de todos los sectores involucrados.

Análisis de costo-efectividad de las estrategias de intervención

Considerando que las alternativas de solución, elegidas para la presente política, están basadas en la implementación de programas de prevención social y comunitaria en colegios, las comunidades y las familias, así como la priorización de las medidas no privativas de libertad en la justicia penal juvenil y garantizar una reinserción social basada en evidencia (acciones involucradas en la alternativa 1 elegida), el análisis siguiente presenta los beneficios a nivel económico de la implementación de dichas estrategias.

En este sentido, tal como describe en el siguiente Cuadro 3, el costo anual por adolescente dentro de los Centros Juveniles de medio cerrado es de alrededor de 26 mil soles anuales, por lo tanto, la priorización de una justicia juvenil que priorice medidas que eviten el ingreso de adolescente a Centros Juveniles de medio cerrado conlleva una mayor creación de valor económico (coherentemente con la elección de la Alternativa I). Cabe resaltar que, entre 2013 y 2019 el número de adolescentes en medio cerrado es de 2000 y este se ha mantenido.

Cuadro N° 3

Costo de atención por adolescente en conflicto con la ley penal en un Centro Juvenil

Año	Número de ACLP	Presupuesto total	Costo anual	Costo por día
2020	2.103	54.723.098	26.021,4	71,3



De igual modo, la política realizará acciones que promuevan la modificación de medidas socioeducativas y liberación de adolescentes de los centros juveniles, por lo tanto, tal como presenta en el siguiente cuadro, en los 10 años de la priorización de dichas acciones es relevante la disminución del gasto.

Cuadro N° 4
Reducción de gastos del 2020 al 2030 en los Centros Juveniles

Año	Número de adolescentes liberados	Reducción de gastos
2020	50	-1.301.072
2021	53	-1.366.126
2022	55	-1.434.432
2023	58	-1.506.154
2024	61	-1.581.461
2025	64	-1.660.534
2026	67	-1.743.561
2027	70	-1.830.739
2028	74	-1.922.276
2029	78	-2.018.390
2030	81	-2.119.310

Finalmente, con relación a las estrategias de prevención se han realizado diversos análisis en las mediciones de calidad-precio de las intervenciones los cuales de forma general muestran altos niveles de retorno a las inversiones realizadas. De este modo, las intervenciones basadas en jóvenes y comunidades para reducir la delincuencia y violencia han presentado resultados positivos (Instituto IGARAPÉ, 2018), tal como presenta el siguiente Cuadro 5. En este sentido, las acciones en materia de prevención en contraposición con las medidas punitivas, represivas y que se centran en el encarcelamiento y criminalización de los y las adolescentes han mostrado y evidenciado beneficios, no obstante, es importante considerar los análisis realizados en la región deben considerarse como aproximados para la adaptación al Perú.

**Cuadro N° 5**

Análisis costo beneficio de las estrategias de intervención basadas en prevención del crimen en Estados Unidos y otros países de América Latina (Instituto IGARAPÉ, 2018²⁵)

Intervención	País	Resultados y o costo-Beneficio (Dólar invertido: Dólar compensado)
Asociación de enfermeras y familias	Estados Unidos	1:6.4 dólares
Terapia Familiar Funcional	Estados Unidos	Los costos del programa son en promedio de US\$2,380 por intervención, generando un ahorro de US\$52,156 de beneficios en el ciclo vital. Tasa de reincidencia pueden caer más del 18% a lo largo de un periodo de 13 años.
Terapia Cognitiva Conductual	Estados Unidos	1:1.96 dólares. Disminución promedio del 26% en la reincidencia
Programa "Convertirse en un hombre"	Estados Unidos	Niños que participaron en BAM fueron arrestados 50% menos por crímenes violentos que compañeros que no participaron en el programa. Arrestos por cualquier delito fueron 35% más bajos para los participantes del programa. Niños del BAM tuvieron una probabilidad del 19% a más de graduarse del bachillerato.
Actividades extracurriculares y el manejo del tiempo libre Programa Best	Estados Unidos	2.50: 1. dólares. Estudiantes que participaron en el programa tienen una menor probabilidad del 30% de cometer algún crimen.
Programa abriendo espacios	Brasil	En 5,306 colegios en donde el programa fue implementado entre el 2003 y el 2006 en São Paulo, la actividad criminal se redujo en 46%. En Río de Janeiro y Pernambuco, hubo una significativa reducción en la violencia escolar, incluyendo peleas escolares, mal comportamiento de los estudiantes, vandalismo y humillación personal.
Aulas de Paz	Colombia	Los participantes redujeron su comportamiento agresivo, al mismo tiempo que evidenciaron una conducta más en pro de lo social.
Iniciativa de Cincinnati para reducir la violencia	Estados Unidos	El promedio del número de homicidios relacionados con pandillas se redujo de 3.8 a 3 al mes, seguido de la intervención. Se presentó una reducción del 37.7% después de 24 meses.

²⁵Artículo Estratégico 36 del Instituto Igarapé (2018) La "Mano Dura": Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina. En: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/06/La-Mano-Dura-Los-costos-de-la-represion%CC%81n-y-los-beneficios-de-la-prevencion%CC%81n-para-los-jo%CC%81venes-en-Ame%CC%81rica-Latina.pdf>



Estrategia de Reducción de Violencia Grupal	Estados Unidos	Tras la implementación del programa, las tasas de homicidios fueron del 17,3% en los 14 sitios que fueron comparados.
Peace Management Initiative	Jamaica	US \$12 se ahorraron por cada dólar invertido si se mide por una combinación de costos directos de atención médica y pérdidas indirectas de productividad
Programa Fica Vivo	Brasil	La tasa costo-eficiencia relacionada con los homicidios que se evitaron con el programa varía entre aproximadamente US \$93,000 y \$112,000

Anexo 05: Fichas técnicas de indicadores

**1. Ficha técnica del indicador 1.1.**

Ficha técnica del indicador 1.1.					
Objetivo prioritario	Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.				
Nombre del Indicador	Índice de adolescentes con factores de riesgo para la delincuencia común.				
Justificación:	La evaluación más efectiva para evidenciar el impacto de los programas de prevención pasa por medir los cambios en los riesgos a cometer infracciones a la ley penal al que están expuestos los y las adolescentes; por tanto, se deben considerar múltiples factores de riesgo en todos los contextos de desarrollo adolescente, es decir, un conjunto de factores que permita medir la influencia de los mismos. De este modo, este indicador reúne diversos factores permitiendo verificar de forma integral los avances en el objetivo prioritario y medir la reducción de las condiciones de riesgo criminógeno multifactoriales, en los casos donde la población adolescente que aún no ha cometido infracciones a la ley penal.				
Responsable del Indicador:	MINJUSDH, MINEDU, DEVIDA e INEI.				
Limitaciones para la medición del indicador:	El mejor indicador compuesto consideraría todos los factores de riesgo criminógenos presentes en el ámbito a intervenir; sin embargo, dada la imposibilidad de medirlos todos, se deben priorizar un número determinado y que se haya venido trabajando previamente con un sustento técnico fiable.				
Método de cálculo:	<p>Fórmula: $A*(1/4) + B*(1/4) + C*(1/4) + D*(1/4)$</p> <p>Especificaciones Técnicas A: Porcentaje de deserción secundaria urbana: Factor desde el contexto de la institución educativa implica la no continuidad de la escolaridad en algún nivel de la educación secundaria. B: Porcentaje de violencia en la familia hacia los y las adolescentes: Factor a nivel familiar que incluye agresión física y psicológica. C: Porcentaje de adolescentes con consumo de drogas al año: Factor comunitario de acceso a drogas por el entorno social. D: Porcentaje de adolescentes en riesgo de desprotección familiar: Factor en el contexto familiar que implica las débiles competencias de educación parental.</p>				
Sentido esperado del indicador	Descendente				
Supuestos	Para la evolución favorable del indicador es importante que las políticas multisectoriales del sector salud, educación, familia, drogas y justicia estén alineados a los objetivos de la política.				
Fuente y bases de datos:	ESCALE - MINEDU (2019) ENARES (2019) Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria DEVIDA 2017				
	Línea de base	Logros esperados			
Año	2021	2023	2025	2027	2030
Valor	31%	29%	25%	22%	20%



2. Ficha técnica del indicador 1.2.

Ficha técnica del indicador 1.2.						
Objetivo prioritario	Reducir las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.					
Nombre del Indicador	Promedio de meses de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracciones contra la libertad sexual.					
Justificación:	Se utilizará el nivel de gravedad, meses de sentencia, de las infracciones que permitan plasmar los cambios en el tipo de delito contra la libertad sexual cometidos por los y las adolescentes. Por tanto, el indicador acoge variables que permiten verificar si las acciones sobre los factores de riesgo criminógeno hacia la violencia sexual de forma indirecta se han reducido, siendo indirecto para el objetivo prioritario porque evalúa la consecuencia posterior durante un proceso de responsabilidad penal juvenil.					
Responsable del Indicador:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.					
Limitaciones para la medición del indicador.	Solo se considera la información procedente de una institución y en calidad de sentencia, no evaluando directamente el desarrollo psicosexual del adolescente.					
Método de cálculo:	Fórmula: A/B Especificaciones Técnicas A: Sumatoria total de meses de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracción contra la libertad sexual: Considerar que las penas mínimas van de los 6 meses en infracciones menores a los 72 meses para las máximas. B: Número de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracción contra la libertad sexual en total: Total de adolescentes que al final de cada año están internados en medio abierto o cerrado por infracciones contra la libertad sexual.					
Sentido esperado del indicador	Descendente					
Supuestos:	Para la evolución favorable del indicador es importante que las políticas multisectoriales del sector salud, educación y familia estén alineados a los objetivos de la política.					
Fuente y bases de datos:	Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención – PRONACEJ - MINJUSDH (2020)					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2021	2023	2025	2027	2029	2030
Valor	16	15	14	13	11	9



3. Ficha técnica del indicador 2.1.

Ficha técnica del indicador 2.1.						
Objetivo prioritario	Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil					
Nombre del Indicador	Porcentaje de distritos judiciales a nivel nacional que cuentan con servicios especializados en justicia penal juvenil					
Justificación:	La implementación de servicios especializados o diferenciados en justicia penal juvenil permite que los y las adolescentes puedan acceder a salidas alternativas que eviten la judicialización. En este sentido, el indicador permite verificar los avances en la reforma integral de la justicia penal juvenil el cual incluye la implementación del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de modo que, el indicador permite evaluar de forma directa el logro del acceso de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal a los servicios de justicia juvenil especializados.					
Responsable del Indicador:	Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.					
Limitaciones para la medición del indicador:	El calendario de implementación del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes puede variar constantemente e impedir la medición en los años establecidos.					
Método de cálculo:	<p>Fórmula:</p> $A/B*100$ <p>Especificaciones Técnicas</p> <p>A: Número de Distritos Judiciales que presentan servicios especializados a nivel del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: La vigencia del componente procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en un determinado distrito judicial conforme a un calendario oficial de implementación.</p> <p>B: Total de Distritos Judiciales y/o fiscales: Sumatoria total y constante de distritos judiciales y/o fiscales a nivel nacional.</p>					
Sentido esperado del indicador	Ascendente.					
Supuestos:	Para la evolución favorable del indicador es importante que los objetivos institucionales del Ministerio Público y el Poder Judicial sean coherentes con los lineamientos de las políticas, asimismo, que las políticas multisectoriales del Ministerio del Interior estén alineados a los objetivos de la política.					
Fuente y bases de datos:	Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2021	2023	2025	2027	2029	2030
Valor	0%	10%	40%	60%	90%	100%

**4. Ficha técnica del indicador 2.2.**

Ficha técnica del indicador 2.2.						
Objetivo prioritario	Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil					
Nombre del Indicador	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no perciben vulneración sus derechos.					
Justificación:	La medición de la calidad de la atención y de la protección de garantías en el proceso de atención al adolescente en conflicto con la ley penal es crucial en la reforma de la justicia penal juvenil. De este modo, el indicador permite verificar de forma directa e integral si se está fortaleciendo la justicia penal juvenil recogiendo las percepciones de la atención de las entidades de la administración de justicia penal juvenil durante todo el proceso recogiendo las voces y actitudes de los y las adolescentes siendo un derecho fundamental y parte de una adecuada justicia penal juvenil especializada.					
Responsable del Indicador:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.					
Limitaciones para la medición del indicador:	Las limitaciones son las de la evaluación mediante autoinformes o que provienen de la propia respuesta de los y las adolescentes, de modo que su respuesta puede ser sesgada o parcialmente incorrecta.					
Método de cálculo:	Fórmula: $A/B*100$ Especificaciones Técnicas A: Número de ACLP en los Centro Juveniles que no perciben vulneración de derechos en el proceso de responsabilidad penal adolescente: Considera el número total de encuestados a nivel nacional que han afirmado no presentar situaciones de vulneración en alguna instancia del proceso como de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Poder Judicial. B: Total de ACLP de la muestra: Considera el número total de encuestados a nivel nacional.					
Sentido esperado del indicador	Ascendente					
Supuestos	Para la evolución favorable del indicador es importante que los objetivos institucionales del Ministerio Público y el Poder Judicial sean coherentes con los lineamientos de las políticas, asimismo, que las políticas multisectoriales del Ministerio del Interior estén alineados a los objetivos de la política.					
Fuente y bases de datos:	Encuestas a los ACLP de los Centros Juveniles por parte del MINJUSDH					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2021	2023	2025	2027	2029	2030
Valor	46%	50%	55%	60%	70%	75%

**5. Ficha técnica del indicador 3.1.**

Ficha técnica del indicador 3.1.						
Objetivo prioritario	Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal					
Nombre del Indicador	Porcentaje de adolescentes que reingresan a un centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa, por procesos distintos.					
Justificación:	Cuando se evalúa el retorno de un ACLP a un Centro Juvenil se considera un aspecto de la efectividad indirecto de la reinserción social. Asimismo, se entiende por reingreso a aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal que ingresan para el cumplimiento de una medida socioeducativa, además, los centros juveniles hacen referencia tanto al medio abierto y cerrado. En efecto, permite verificar si se está logrando fortalecer la reinserción social ya que en la medida que menos porcentaje de reingresos haya expresará un mayor impacto positivo en el ACLP para su reintegración social.					
Responsable del Indicador:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Programa Nacional de Centros Juveniles.					
Limitaciones para la medición del indicador:	No mide directamente el nivel de integración del adolescente que culmina su medida socioeducativa en la familia, educación o comunidad.					
Método de cálculo:	Fórmula: $A/B*100$ Especificaciones Técnicas A: Total de ACLP que reingresan a un centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa, siendo este reingreso por motivo de una nueva sentencia por la infracción a la ley penal. B: Total de ACLP que reciben una medida socioeducativa					
Sentido esperado del indicador	Descendente.					
Supuestos:	Para la evolución favorable del indicador es importante el Programa Nacional de Centros Juveniles implemente el Modelo Integral de Intervención y Tratamiento Diferenciado del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal el cual, asimismo, que los sectores de trabajo y educación, así como los gobiernos regionales y locales alineen sus objetivos institucionales a la presente política.					
Fuente y bases de datos:	Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención – PRONACEJ - MINJUSDH (2020)					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2021	2023	2025	2027	2029	2030
Valor	8.2%	7.5%	6.5%	5.5%	5%	4.5%



6. Ficha técnica del indicador 3.2.

Ficha técnica del indicador 3.2.										
Objetivo prioritario	Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal									
Nombre del Indicador	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que reiteran en infracciones a la ley penal									
Justificación:	La remisión consiste en promover la abstención del ejercicio de la acción penal o la separación del proceso del adolescente que ha cometido una infracción que no revista mayor gravedad, procurando brindarle orientación especializada, dirigida a lograr su rehabilitación y reinserción social por medio de la aplicación de Programas de Orientación con enfoque restaurativo. En ese sentido, los y las adolescentes a quienes se les ha otorgado la remisión fiscal, cumplen un programa de orientación con la finalidad de disminuir los factores de riesgo y fomentar los factores de protección. Finalmente, las acciones ejecutadas en el marco de la remisión fiscal y del cumplimiento del programa de orientación, están dirigidas a lograr que el adolescente se reintegre a la sociedad y abandone la conducta infractora; por lo tanto, un adolescente con remisión fiscal que culminó su Programa de Orientación que no reingresa al sistema fiscal, constituye un indicador de resultado que demuestra el adecuado proceso de reinserción social que viene desarrollando el adolescente en la comunidad.									
Responsable del Indicador:	Ministerio Público – Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público – Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa									
Limitaciones para la medición del indicador:	Para obtener la información del citado indicador va a depender de la gestión administrativa que realice la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa y la capacidad de respuesta de las instancias respectivas. Ya que, el número de adolescentes con remisión fiscal se obtiene de las resoluciones que emiten los fiscales de familia, las mismas que son comunicadas a los profesionales que integran los Equipos Técnicos Interdisciplinarios; y, la información concerniente a las reiterancias de los y las adolescentes se obtiene del Sistema de Registro de Apoyo Informático Fiscal – SIAFT, del Sistema de Gestión Fiscal – SGF y de la oficina de Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva – RENAESPPLLE.									
Método de cálculo:	Fórmula: $A/B*100$ Especificaciones Técnicas A: Número de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que culminan un programa de orientación y reiteran durante el año de medición. Entiéndase reiterar cuando un adolescente en conflicto con la ley penal vuelve a ingresar a un proceso de responsabilidad penal a nivel del Ministerio Público. B: Número de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que culminan un programa de orientación otorgadas durante el año de medición.									
Sentido esperado del indicador	Descendente									
Supuestos:	Para la evolución favorable del indicador es importante que el sector salud, trabajo y los gobiernos regionales y locales alineen sus objetivos a la política en la medida que a nivel comunitario y educativo los y las adolescentes en conflicto con la ley penal cuenten con servicios de protección para su resocialización.									
Fuente y bases de datos:	Sistema de Información Georreferenciado del Programa de Prevención Estratégica del Delito-SIGPPED de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa – Sistema de Registro de Apoyo Informático Fiscal – SIAFT, del Sistema de Gestión Fiscal – SGD y de la oficina de Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva – RENAESPPLLE.									
	Línea de base		Logros esperados							
Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%

**Anexo 06: Identificación de políticas relacionadas****Alineamiento a nivel vertical**

Acuerdo Nacional		
Eje	Lineamientos prioritarios	Objetivo prioritario de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal
I. Democracia y Estado de Derecho	7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana	OP 2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil OP 3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
II. Equidad y Justicia Social	16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud	OP 1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.
Política General de Gobierno 2023		
Eje	Lineamientos prioritarios	Objetivo prioritario de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal
Eje 3: Protección social para el desarrollo	3.3 Promover la inclusión social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad desde un enfoque multidimensional, considerando el fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos y los programas sociales. 3.4 Fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 3.6 Garantizar la prestación de los servicios del Estado a favor de las poblaciones vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y	OP1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor. OP3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.



Eje 8: La salud como derecho humano	<p>personas con discapacidad.</p> <p>8.3 Promover el acceso a los servicios de salud, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.</p> <p>8.6 Promover estilos de vida saludable de forma sostenible.</p>	
<p>Eje 1: Paz social y gobernabilidad</p> <p>Eje 6: Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional</p>	<p>1.4 Reafirmar al Perú como un país que respeta el derecho internacional, fortalece la democracia, protege los derechos humanos y lucha contra la corrupción, promoviendo la integración vecinal y latinoamericana sin exclusiones y con pragmatismo, basada en el respeto mutuo.</p> <p>6.3. Fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país.</p> <p>6.6. Fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú para una mejor prestación de servicios al ciudadano.</p>	OP2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050		
Objetivo Nacional	Objetivo Nacional Específico	Objetivo prioritario de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal
1: Alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.	1.1 Garantizar la formación educativa de las personas a partir de las competencias necesarias que le permitan realizar su proyecto de vida para su pleno desarrollo individual, social, cultural y productivo, que contribuya con el bienestar, competitividad y sostenibilidad del país con	OP1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.



<p>3: Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología, y la transformación digital del país.</p>	<p>énfasis en el uso de las tecnologías educativas y digitales</p> <p>1.5 Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todas las personas; especialmente de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad de la sociedad; así como el respeto y valoración a su diversidad cultural, étnica y de género.</p> <p>3.2. Incrementar los niveles de empleo decente, productivo y formal en el país, en base a la garantía de los derechos laborales de los trabajadores, y con énfasis en los grupos en condición de vulnerabilidad y su adecuación a las tecnologías emergentes.</p>	
<p>4: Garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones.</p>	<p>4.3. Garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, mediante un Sistema de Justicia eficaz, confiable, moderno, predecible y transparente, que asegure sus derechos haciendo uso de las tecnologías digitales.</p>	<p>OP2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil</p> <p>OP3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal</p>



Alineamiento a nivel horizontal

Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable"	OP3. Mejorar las condiciones de vida de la población que generan de vulnerabilidad y riesgos en la salud	3. Mejorar las condiciones para la seguridad ciudadana y convivencia pacífica de la población
	La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable", en su objetivo prioritario 3, está vinculada con la ejecución de actividades para mejorar las condiciones de desarrollo familiar y personal de los y las adolescentes a nivel nacional, es decir, a todos en condición de vulnerabilidad, lo cual implica adolescentes en riesgo criminógeno.			
	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y	Política Nacional Contra las Drogas al 2030	OP3. Reducir el consumo de drogas en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad	1. Prevenir el consumo de drogas, con especial atención en población en edad escolar. 2. Incrementar la oferta de servicios de tratamiento de



	su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.			adicción a drogas para toda la población, con especial atención a la población en situación de vulnerabilidad
La Política Nacional Contra las Drogas al 2030, en su objetivo prioritario 3, está vinculada con la ejecución de actividades para mejorar las condiciones de desarrollo psicosocial ante el consumo de drogas y prioriza la población adolescente a nivel nacional, es decir, a todos los y las adolescentes en vulnerabilidad, lo cual implica a adolescentes en riesgo criminógeno.				
	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un	Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023	Objetivo Estratégico 1: Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios	Incrementar la prevención social y comunitaria
			Objetivo Estratégico 4: Reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos	Población juvenil vulnerable Salud mental



	grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.			
El Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023, en su objetivo estratégico 1 y 4, está relacionada con la implementación de programas multisectoriales de prevención social del delito, así como la intervención psicosocial y de salud mental de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad para el delito, ello implica acciones sobre adolescentes en riesgo criminógeno.				
	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado	OP3.Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado en la población	1.Fortalecer la prevención dirigida a población susceptible de ser víctima o formar parte de una organización criminal 2.Incrementar la participación ciudadana en la lucha contra las organizaciones criminales
La Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado, en su objetivo prioritario 3, está relacionada con la implementación de programas de prevención del delito específicamente para el crimen organizado, así como la prevención comunitaria a una población general, ello implica acciones sobre adolescentes en riesgo criminógeno.				
	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones	Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP5. Mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social.	L5.3. Disminuir la incidencia de la violencia en el entorno de la población



	de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno			
La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, en su OP5, identifica la necesidad de modificar las condiciones del entorno, para asegurar la inclusión social, incluyendo el requerimiento de disminuir la incidencia de la violencia que se constituye en un factor de riesgo criminógeno.				
	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030	OP3. Incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social.	L3.4. Incrementar el acceso a educación de calidad en jóvenes y adultos
La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, en su OP3, identifica a la educación como un factor de relevancia para la ciudadanía y su inclusión económica. De esta manera, acceder a la educación y disponer de una educación de calidad se convierten en ejes importantes de la Política en cuestión, ambos, aspectos de interés en la protección y beneficio de las y los adolescentes en riesgo.				
	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	Política Nacional de Igualdad de Género	OP1. Reducir la violencia hacia las mujeres	1.1. Implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar 1.2. Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía
La Política Nacional de Igualdad de Género, en su objetivo prioritario 1, establece lineamientos para la prevención, protección y atención de las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia de género, sea				



psicológica, física, sexual y económica o patrimonial. Asimismo, el objetivo prioritario 2, tiene lineamientos para fortalecer el desarrollo psicosocial y salud sexual a nivel de programas y servicios a la población en general y de adolescentes para que su derecho a la salud sexual sea satisfecho, ello está muy vinculado con la prevención de la violencia sexual en adolescentes para evitar la manifestación de este delito.			
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo	Política Nacional de la Juventud	OP3. Incrementar la atención integral de salud de la población joven	1.Incrementar el aseguramiento de la población joven al Seguro Integral de Salud 2.Desarrollar mecanismos y estrategias para orientar la atención de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva, salud mental y salud física y nutricional en la etapa de vida joven.
La Política Nacional de la Juventud, en su objetivo prioritario 3, establece como lineamientos nacional la salud integral y la salud sexual en la población joven (15-29 años) para garantizar la atención a nivel nacional, ello está vinculado con la población adolescente que requiere los servicios para su desarrollo positivo a nivel sexual lo cual, a su vez, está relacionado con la prevención del delito que vulneran la integridad sexual por adolescentes en riesgo criminógeno.			
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo	Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable"	OP1. Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población	1. Mejorar los hábitos y conductas saludables de la población.
		OP2. Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población.	5.Implementar el modelo de cuidado integral de salud de la población por curso de vida. 8.Organizar equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de salud por curso de vida a la población.
La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable", en su objetivo prioritario 1 y 2, dispone el desarrollo de acciones intersectoriales para mejorar las conductas saludables y la			



<p>atención integral durante las diversas etapas del desarrollo del ser humano, siendo intervenciones que complementan y están implicadas con el fortalecimiento de los ámbitos de protección adolescente, y particularmente a aquellos en mayores condiciones de riesgo de violencia.</p>			
<p>1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo</p>	<p>Política Nacional de la Juventud</p>	<p>OP1: Desarrollar competencias en el proceso educativo de la población joven.</p>	<p>1. Desarrollar mecanismos para la culminación oportuna de la población joven en la Educación Básica 3. Incrementar el acceso, la promoción y la culminación en la formación técnico-productiva y educación superior de la población joven.</p>
		<p>OP2: Incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente</p>	<p>1. Implementar mecanismos y estrategias que promuevan la empleabilidad y el emprendimiento en la población joven 2. Generar incentivos para la contratación laboral formal de la población joven.</p>
<p>La Política Nacional de la Juventud, en su objetivo prioritario 1 y 2, dispone el desarrollo de acciones intersectoriales para fortalecer la educación básica y alternativa, así como la empleabilidad en población entre 15-28 años, siendo lineamientos que complementan y están implicadas con el fortalecimiento de los ámbitos de desarrollo importantes para los y las adolescentes como la educación y la inclusión laboral particularmente en contextos de riesgo criminógeno a nivel nacional.</p>			
<p>1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo</p>	<p>Política nacional de competitividad y productividad</p>	<p>OP2: Fortalecer el capital humano.</p>	<p>3. Incrementar el acceso y la calidad de la educación superior (universitaria y técnica) para la población joven. 4. Articular el acceso de la población en edad escolar a servicios públicos de calidad (educación básica,</p>



			salud y alimentación).
<p>La Política nacional de competitividad y productividad, en su objetivo prioritario 2, dispone el desarrollo de acciones intersectoriales para fortalecer el acceso a la educación superior y completar la educación secundaria de forma exitosa, en población entre 15-28 años, siendo lineamientos que complementan y están implicadas con el fortalecimiento de los ámbitos de desarrollo importantes para el adolescentes como la educación y la futura inclusión laboral particularmente en contextos de riesgo criminógeno a nivel nacional.</p>			
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo	Política Nacional del Empleo Decente	OP1. Incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegurar e incrementar el acceso y la culminación de la educación básica de mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar para el desarrollo de sus competencias. 2. Incrementar el acceso y calidad de la educación superior y técnico-productiva de mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar para el desarrollo de sus competencias. 3. Asegurar el desarrollo de competencias laborales y la adquisición de experiencia laboral de las y los jóvenes. 4. Incrementar el acceso a la enseñanza enfocada en las competencias laborales de mujeres y hombres en su diversidad en edad de trabajar.
<p>La Política Nacional del Empleo Decente, en su objetivo prioritario 1, establece lineamientos nacionales el desarrollo de acciones intersectoriales para fortalecer el acceso a la educación superior, competencias laborales y completar la educación secundaria de forma</p>			



	exitosa, en toda la población, siendo lineamientos que complementan y están implicadas con el fortalecimiento de los ámbitos de desarrollo importantes para el adolescentes como la educación y la futura inclusión laboral particularmente en contextos de riesgo para el delito.			
	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo	Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva	OP1. Incrementar el acceso equitativo de la población a la Educación Superior y Técnico Productiva	L.1.3. Implementar mecanismos de apoyo para el acceso equitativo de la población a la ESTP
	La mayor parte de adolescentes en riesgo de cometer infracciones presentan deficiencias en el aprendizaje para la culminación de su proceso formativo en la Educación Básica, lo que limita su incorporación a la Educación Superior. Por tal motivo, la implementación de mecanismos de apoyo a esta población objetivo, tales como estrategias de reforzamiento y/o nivelación, promoverían su acceso a la ESTP.			
	1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	Política Nacional de la Juventud	OP4. Reducir la victimización en la población joven	1. Desarrollar estrategias para la promoción de la cultura de paz y la erradicación de la violencia en la población juvenil.
	La Política Nacional de la Juventud, en su objetivo prioritario 4, dispone el desarrollo de acciones promoción de la cultura de paz a nivel de toda la sociedad, siendo lineamientos que complementan y están implicados en el fortalecimiento de las acciones de concientización sobre la prevención de la delincuencia o todo tipo de violencia juvenil o adolescente.			
OP2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023	Objetivo Estratégico 4: Reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos	Reinserción social adolescente
	El Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023, en su objetivo estratégico 4, establece el fortalecimiento de la justicia penal juvenil a nivel de la reintegración social de los y las adolescentes a la sociedad, institución educativa y familia para disminuir la victimización, estando estas disposiciones relacionadas con la consolidación de una justicia penal juvenil especializada y centrada en la reinserción social o prevención terciaria.			
	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	Política pública de reforma del sistema de justicia	OP4. Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario	4. Implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (2019)



	La Política pública de reforma del sistema de justicia, en su objetivo prioritario 4, dispone específicamente la necesidad de que el sistema de justicia penal desarrolle e impulse la implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, norma que a su vez establece y complementa el fortalecimiento de una justicia penal juvenil especializada y de carácter restaurativo.			
	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023	Objetivo Estratégico 1: Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios	Fortalecimiento de la Reinserción social
OP3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal	El Plan nacional de seguridad ciudadana 2019 – 2023, en su objetivo estratégico 1, establece el fortalecimiento de la justicia penal juvenil a nivel de la reintegración social de los y las adolescentes a la sociedad, institución educativa y familia para disminuir la tasa de homicidios, estando estas disposiciones relacionadas con la consolidación de una justicia penal juvenil especializada y centrada en la reinserción social o prevención terciaria en los Centros Juveniles.			
	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado	OP3.Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado en la población	1. Fortalecer la prevención dirigida a población susceptible de ser víctima o formar parte de una organización criminal
	El Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado, en su objetivo estratégico 3, establece el desarrollo de programas de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley penal con el objetivo de evitar su reincidencia en el crimen organizado, estando esta disposición estrechamente vinculada con las acciones de resocialización de los y las adolescentes en los centros juveniles y la línea de justicia juvenil restaurativa.			
	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	Política pública de reforma del sistema de justicia	OP4. Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario	3.Reinserción integral
	La Política pública de reforma del sistema de justicia, en su objetivo prioritario 4, dispone específicamente la necesidad de que como parte de la reforma del sistema de justicia penal se desarrollen programas de reinserción social a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal y el sistema penitenciario, lo cual está estrechamente vinculado con las			



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Asuntos Criminológicos

Dirección de Política
Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

	acciones de resocialización de los y las adolescentes en los centros juveniles y la línea de justicia juvenil restaurativa.
--	---



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Anexo 07: Fichas de actividades operativas

1. Ficha N°1: Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.	Intervención psicosocial para adolescentes con consejería y orientación integral contra el consumo de drogas.	Persona	Dirección de Articulación Territorial	001-1064 Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas	Pliego 012: DEVIDA - PCM	PCM	Nacional



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

2. Ficha N°2: Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.2. Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes	Fortalecimiento de capacidades parentales de padres de hijos adolescentes en riesgo	Familia	Dirección de Articulación Territorial	001-1064 Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas	Pliego 012: DEVIDA - PCM	PCM	Nacional



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

3. Ficha N°3: Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo.

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.3. Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo	Atención preventivo – promocional integral para adolescentes	Persona	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública	001-117: Administración Central - MINSA	Pliego 011: MINSA	SALUD	Nacional



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

4. Ficha N°4: Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.4. Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas	Ejecución especializada de tutorías y actividades socioeducativas para adolescentes en riesgo de consumo de drogas	Persona	Dirección de Articulación Territorial	001-1064 Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas	Pliego 012: DEVIDA – PCM	PCM	Nacional

5. Ficha N°5: *Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.*

Lineamiento	Servicio	Actores Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.5. Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.	Gestión del currículo - implementación del CNEB de educación secundaria	Docente	Dirección de Educación Secundaria Dirección de Servicios Educativos en el ámbito Rural Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.	026 Programa de Educación Básica para Todos	Pliego 010: MINEDU	Sector 10 Educación	Nacional



6. Ficha N°6: *Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer*

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	1.2.1. Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer	Orientación e intervención en acceso a la justicia para mujeres integrantes del grupo familiar	Persona	Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA	Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA.	Pliego 039 : MIM	MIMP	Nacional



7. Ficha N°7: Servicio de autorización del trabajo adolescente de carácter oportuno.

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	1.2.2. Servicio de autorización del trabajo adolescente de carácter oportuno.	Orientación laboral en materia de empleo, empleabilidad, emprendimiento y formación profesional para adolescentes.	Atención	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales	000154 - Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración	Pliego 012: MTPE	MTPE	Nacional

8. Ficha N°8: Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo. .	1.2.3. Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes	Desarrollo del programa de alfabetización.	Estudiantes	Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios educativos en el Ámbito Rural	026 Programa Educación Básica para Todos	Pliego 010: MINEDU	MINEDU	Nacional
		Diseño de modelos de servicio educativo de la modalidad de EBA	Informe	Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios educativos en el Ámbito Rural	026 Programa Educación Básica para Todos	Pliego 010: MINEDU	MINEDU	Nacional



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosDespacho
Viceministerial de
JusticiaDirección General de
Asuntos CriminológicosDirección de Política
Criminológica*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”*

9. Ficha N°9: Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	2.1.1. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención de casos en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal	Casos	Fiscalías de civil y familia	000200 - Ministerio Público-Gerencia General	022 - Ministerio Público	Ministerio Público	Nacional

10. Ficha N°10: Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	2.1.2. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes	Resolución de casos por procesos judiciales de las salas especializadas de la corte suprema	Expediente resuelto Resolución	Corte suprema. Cortes superiores.	000012 – Gerencia general del Poder Judicial	004: Poder Judicial	Poder Judicial	Nacional
		Resolución de procesos judiciales de las cortes superiores de justicia.	Expediente resuelto Resolución	Corte suprema. Cortes superiores.	000012 – Gerencia general del Poder Judicial	004: Poder Judicial	Poder Judicial	Nacional



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

11. Ficha N°11: *Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal*

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP.	2.1.3. Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención mediante el patrocinio de defensa pública penal a nivel multidistrital	Persona atendida	Dirección general de defensa pública y acceso a la justicia.	000015 - Ministerio de Justicia-Oficina general de administración	006 - Ministerio de justicia y derechos humanos	Justicia	Nacional

12. Ficha N°12 *Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal*

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	2.1.4. Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Conciliación extrajudicial y arbitraje popular para adolescentes en conflicto con la ley penal	Procedimientos	Dirección de conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de solución de conflictos	000015 - Ministerio de Justicia-Oficina general de administración	006 - Ministerio de justicia y derechos humanos	Justicia	Nacional



13. Ficha N°13: Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	2.1.5. Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención en comisarías con módulos especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal	Persona	Región Policial Huancavelica / Región Policial Junín / Región Policial Pasco / Región Policial Cusco / Frente Policial Espinar / División Policial La Convención / Región policial Apurímac / Región Policial La Libertad / Región Policial Áncash / Región Policial Piura / Región Policial Ayacucho / Región Policial Ica / Región Policial Moquegua / Región Policial Arequipa / Región Policial Tacna	010-34: VIII Dirección Territorial de Policía-Huancayo 012-36: X Dirección Territorial de Policía - Cusco 005-29: III DIRTEPOL – Trujillo 003-27: Región Policial Piura 036-1689: Región Policial Ayacucho – Ica 022-1147: XI Dirección Territorial de Policía - Arequipa	007 – Ministerio del Interior	Interior	Nacional

14. Ficha N°14: *Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal.*

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
3.1 Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	3.1.1. Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal.	Ejecución de medidas de prevención y tratamiento Especializado del ACLP	Adolescente	Programa Nacional de Centros Juveniles	001716 - Centros Juveniles	006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Justicia	Nacional

15. Ficha N°15: *Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal*

Lineamiento	Servicio	Actividad Operativa (AO)	Unidad de medida	Responsables				
				Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad Ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de gobierno
3.1 Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	3.1.2. Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescentes en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial	Adolescente	Programa de prevención estratégica del delito fortalecido en beneficio de adolescentes en riesgo infractor y en conflicto con la ley penal	000200 - Ministerio Público-Gerencia General	022 - Ministerio Público	Ministerio Público	Nacional



Anexo 08: Matriz de consistencia

Problema público	Causa directa	Causas indirectas	Intervenciones seleccionadas	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Actividad operativa	Proveedor	Cobertura	Estándar de cumplimiento	Definición breve del estándar	Indicador de calidad	Indicador de cobertura
Persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal.	Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes	1.1 Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad 1.2 Presencia de pares con conductas antisociales 1.3 Consumo problemático de alcohol y otras drogas 1.4 Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes. 1.5 Prevalencia de la deserción escolar 1.6 Adultos responsables con conductas antisociales y/o en delito 1.7 Instituciones educativas con elevados niveles de violencia 1.8 Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia.	1. Programas de intervención focalizados en instituciones educativas 2. Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas. 3. Programas sociales para mejorar el contexto social y comunitario mediante la	OP 1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno en los y las adolescentes en riesgo infractor	1.1. Índice de adolescentes con factores de riesgo para la delincuencia común. 1.2. Promedio de meses de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracciones contra la libertad sexual.	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de	1.1.1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.	Intervención psicosocial para adolescentes con consejería y orientación integral contra el consumo de drogas.	Presidencia del Consejo de Ministros - DEVIDA	Nacional	Calidad – Integralidad	El servicio debe garantizar la entrega de un paquete integral de atención diferenciado para cada nivel de riesgo, especificado en el Programa Presupuestal de prevención y consumo de drogas PP 0051. Por ello, se debe garantizar que el usuario adolescente reciba la atención completa y de este modo prevenir mayores condiciones de riesgo vinculado con el consumo de drogas.	Porcentaje de adolescentes atendidos por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete integral de atención.	
							1.1.2. Servicio de fortalecimiento		Presidencia del Consejo de Ministros - DEVIDA	Nacional	Calidad – Integralidad	El servicio debe entregarse de acuerdo a lo establecido por el	Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan	



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

		<p>1.9 Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria)</p> <p>1.10 Deficiente fortalecimiento de los factores protectores</p> <p>1.11 Desarrollo psicosexual deficiente.</p> <p>1.12 Desigualdad y exclusión social</p> <p>1.13 Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación</p>	<p>priorización de supervisión y protección de adolescente en riesgo para la violencia y delincuencia.</p> <p>4.</p> <p>Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.</p>			<p>vulnerabilidad.</p>	<p>de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes</p>	<p>es de padres de hijos adolescentes en riesgo</p>				<p>programa de fortalecimiento de habilidades parentales cuyas sesiones están orientadas a padres, madres y sus hijos de 12 a 14 años, a lo largo de 7 semanas consecutivas. Cada sesión debe tener una duración de dos horas cada, por ello, es fundamental que el beneficiario culmine las actividades para garantizar su desarrollo psicosocial y prevenir el consumo problemático de drogas.</p>	<p>an habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.</p>	
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

							1.1.3. Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo	Atención preventivo – promocional integral para adolescentes	Ministerio de Salud	Nacional	Calidad – Integridad	El servicio debe entregarse garantizando debe propiciar el desarrollo integral mediante la culminación integral de la atención al adolescente en atenciones de salud, sesiones de entrenamiento, consejería en salud sexual y reproductiva, salud mental y salud física nutricional.	Porcentaje de adolescentes con un paquete de atención integral concluido.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	----------	----------------------	--	---	--



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

							1.1.4. Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas.	Ejecución especializada de tutorías y actividades socioeducativas para adolescentes en riesgo de consumo de drogas.	Presidencia del Consejo de Ministros – DEVIDA	Nacional	Calidad – Integralidad	El servicio se brinda buscando que los usuarios completen un plan temático, buscando que los y las adolescentes puedan recibir el paquete integral de talleres y orientaciones, y como efecto de ello tengan una alta percepción del riesgo sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, reduciendo su vulnerabilidad y disposición.	Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo frecuente de 5 sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y pasta básica de cocaína).	
							1.1.5. Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.	Gestión del currículo - implementación del CNEB de educación secundaria	Ministerio de Educación	Nacional	Calidad – Fiabilidad	El servicio se brinda implementándose acciones de la tutoría y orientación educativa, de acuerdo a los temas y sesiones planificadas en las Instituciones Educativas antes del inicio del año escolar. Solo con ello puede garantizarse el cumplimiento de los	Porcentaje de instituciones educativas de educación básica que no implementan acciones del Plan de tutoría	



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

												objetivos en coherencia con las disposiciones del Minedu, de modo que se logren cambios positivos en la población adolescente escolarizada que presente dificultades sociales y académicas.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

							1.2.1. Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer	Orientación e intervención en acceso a la justicia para mujeres integrantes del grupo familiar	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional	Calidad – Integralidad	El servicio debe entregarse garantizando la atención integral de los servicios legal, psicológico y social, de modo que se concluya con esta prestación especializada.	Porcentaje de mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual que hayan recibido que concluyen la atención integral por parte de los Centros Emergencia Mujer.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------------------------	--	---



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

							1.2.2 Servicio de autorización de trabajo adolescente de carácter oportuno	Orientación laboral en materia de empleo, empleabilidad, emprendimiento y formación profesional para adolescentes.	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Nacional	Calidad - Oportunidad	El servicio debe entregarse de manera oportuna a los y las adolescentes que estén atravesando condiciones de vulnerabilidad vinculadas a actividades laborales de modo que se disminuya el número de adolescentes en condiciones de trabajo precario y vulnerando sus derechos fundamentales.	Porcentaje de solicitudes de autorización laboral previa para adolescentes con resolución de emisión de autorización	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------------------	---	--	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

							1.2.3. Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes	Ejecución de programas de alfabetización. Diseño de modelos de servicio educativo de la modalidad de EBA	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Nacional	Calidad – Accesibilidad	El servicio debe entregarse priorizando y dando oportunidades de desarrollo educativo a una población en condición de vulnerabilidad siendo la población de adolescentes mayores de 14 años en dificultades académicas o que no cuenta con un servicio educativo; con primaria incompleta; con primaria completa y con educación secundaria incompleta (con extrar edad, fuera del rango de atención de la básica regular), con el objetivo de que concluyan con éxito el acceso a la educación básica alternativa.	Tasa de matrícula en la educación básica alternativa para las personas de 14 a 17 años sin educación básica o que no hayan culminado la educación básica.	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	----------	-------------------------	---	---	--



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil	<p>2.1 Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso</p> <p>2.2 Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas</p> <p>2.3 Priorización de medidas socioeducativas de internación</p> <p>2.4 Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial</p> <p>2.5 Bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil</p> <p>2.6 Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas</p> <p>2.7 Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos</p>	<p>1.</p> <p>Implementación progresiva a nivel nacional del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (D.L. N°1348).</p> <p>2.</p> <p>Ejecutar programas de formación permanente para brindar una justicia diferenciada y especializada.</p> <p>3.</p> <p>Fortalecer la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa con la implementación en todos los</p>	OP 2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil	<p>2.1. Porcentaje de distritos judiciales a nivel nacional que cuentan con servicios especializados en justicia penal juvenil</p> <p>2.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no perciben vulneración de derechos.</p>	<p>2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP</p> <p>2.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.</p> <p>2.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas</p>	<p>2.1.1. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal</p>	Atención de casos en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio Público	Nacional	Calidad – Fiable	El estándar mide el error o fallo en la implementación del CRPA ya que el servicio forma parte del proceso de administración de justicia juvenil debe entregarse considerando la protección de los derechos de los y las adolescentes entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume se encuentra en conflicto con la ley penal. De este modo, la no atención en fiscalías especializadas representaría fallas en la provisión del servicio y de la implementación del CRPA.	Porcentaje de ACLP que no son atendidos en fiscalías especializadas donde se viene implementando el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente
--	---	--	--	--	--	---	--	--------------------	----------	------------------	---	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

			distritos fiscales a nivel nacional.				2.1.2. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes	Resolución de casos por procesos judiciales de las salas especializadas de la corte suprema . Resolución de procesos judiciales de las cortes superiores de justicia.	Poder Judicial	Nacional	Calidad – Fiable	El estándar mide el error o fallo en la implementación del CRPA ya que el proceso de administración de justicia juvenil a nivel judicial debe entregarse considerando la protección de los derechos fundamentales de los y las adolescentes entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal. De este modo, el porcentaje de expedientes no resueltos representaría fallas en la provisión del servicio y de la implementación del CRPA.	Porcentaje de expedientes no resueltos en módulos judiciales donde se implemente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.	
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	----------------	----------	------------------	---	--	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

							2.1.3. Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención mediante el patrocinio de defensa pública penal a nivel multidistrital	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Nacional	Calidad – Accesibilidad	El servicio que forma parte del proceso de administración de justicia juvenil a nivel prejudicial y judicial debe entregarse asegurando el alcance a la población de adolescentes entre 14 y 17 años que esté en condición de vulnerabilidad socioeconómica evitando que no acceda a una justicia que garantice sus derechos fundamentales, además, esta población particular se encuentra en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal.	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que reciben consultas y patrocinios de la defensa pública.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	-------------------------	--	---	--



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

							2.1.4. Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal	Conciliación extrajudicial y arbitraje popular para adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Nacional	Calidad – Accesibilidad	El servicio que forma parte del proceso de administración de justicia juvenil debe entregarse asegurando el alcance a la población de adolescentes entre 14 y 17 años que esté en condición de vulnerabilidad socioeconómica evitando que no acceda a una justicia que garantice sus derechos fundamentales, además, esta población particular se encuentra en una condición de riesgo ya que se presume han cometido una conducta contra la ley penal, siendo necesario evitar situaciones más perjudiciales como en el caso de una sentencia con medida socioeducativa.	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en condiciones de vulnerabilidad social que reciben atención por parte de mediadores especializados	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------	-------------------------	---	--	--



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

							2.1.5. Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal	Atención en comisarías con módulos especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal	Ministerio del Interior	Nacional	Calidad – Accesibilidad	El servicio que forma parte fundamental del inicio del proceso de administración de justicia juvenil el cual debe entregarse la población adolescente entre 14 y 17 años que están en una condición de riesgo ya que se presume se encuentra en conflicto con la ley penal y para no afectar su desarrollo social particular debe garantizarse la protección de sus derechos fundamentales y procesales.	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no son atendidos en los módulos especializados de las comisarías	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	----------	-------------------------	--	---	--



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Limitada intervención para la reinserción social	3.1 Limitado personal especializado y de intervención diferenciada 3.2 Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados 3.3 Centros Juveniles al límite de su capacidad 3.4 Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social 3.5 Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado 3.6 Escasas actividades de seguimiento post-egreso 3.7. Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto 3.8 Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado	1. Ejecución de un modelo de intervención diferenciada con enfoque de derechos. 2. Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social. 3.	OP 3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal	3.1. Porcentaje de adolescentes que reingresan a un centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa, por procesos distintos. 3.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que reiteran en infracciones a la ley penal.	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP. 3.2. Establecer redes públicas y privadas para el apoyo a la reinserción de las y los ACLP	3.1.1. Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal	Ejecución de medidas de prevención y tratamiento especializado del ACLP	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Nacional	Calidad – Integralidad	El servicio está orientado a que los y las adolescente en los centros juveniles concluyan efectivamente un plan de tratamiento individual basado en el nuevo Modelo Integral el cual es aplicado por el equipo técnico interdisciplinario permitiendo el desarrollo positivo del adolescente y reintegrarlo constructivamente a la sociedad.	Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos en Centros Juveniles que concluyen planes de tratamiento individual basados en un Modelo Integral.	
--	---	---	---	---	--	---	---	---	----------	------------------------	--	---	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

		<p>3.9 Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo</p> <p>3.10 Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas.</p> <p>3.11 Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado.</p>	<p>Fortalecer la reinserción laboral y educativa por medio de la articulación y coordinación con el sector privado para la inclusión laboral y educativa de los y las ACLP..</p>				<p>3.1.2. Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal</p>	<p>Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescentes en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial</p>	<p>Ministerio Público</p>	Nacional	Calidad – Integralidad	<p>El servicio está orientado a que los y las adolescente en los centros juveniles concluyan efectivamente un plan de tratamiento individual basado en el nuevo Modelo Integral el cual es aplicado por el equipo técnico interdisciplinario permitiendo el desarrollo positivo del adolescente y reintegrarlo constructivamente a la sociedad.</p>	<p>Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos que concluyen el programa de orientación.</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	---------------------------	----------	------------------------	---	---	--



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Asuntos Criminológicos

Dirección de Política
Criminológica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"



X. Bibliografía

Documentos académicos

- Alcázar, L., Balarin, M., Glave, C. & Rodríguez, M. (2017). Más allá de los ninis: los jóvenes urbano-vulnerables en el Perú. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- Andrews, D. y Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct*. LexisNexis.
- Azar, S. y Weinzierl, K. (2005). Child Maltreatment and Childhood Injury Research: A Cognitive Behavioral Approach. *Journal of Pediatric Psychology*. 30 (7), pp. 598–614, Doi: 10.1093/jpepsy/jsi046
- Baratta, A. (1991). Derechos Humanos: entre violencia estructural y violencia penal. *Revista de Ciencias Jurídicas* 68, pp. 17-36.
- Bartolomé, R; Montañés, M; Rechea, C; Montañés, J. (2009) Los Factores de Protección frente a la Conducta Antisocial: ¿Explican las diferencias en violencia entre chicas y chicos? DOI: <https://doi.org/10.46381/reic.v7i0.47>.
- Bermúdez, M. (2007). La fragilidad de la política criminal y los derechos fundamentales en el sistema penitenciario peruano. *Revista latinoamericana de seguridad ciudadana*, FLACSO N° 1, pp. 31-37. ISSN: 1390-3691.
- Berniell, L. (2014). Por qué algunas personas delinquen y otras no. En Ortega, Daniel & Sanguinetti, Pablo (Eds.) *Por una América Latina más segura. Una perspectiva para prevenir y controlar el delito* (pp. 49-92). Bogotá: CAF.
- Caride, J. A. (2005). *Las fronteras de la Pedagogía Social. Perspectivas científica e histórica*. Barcelona: Gedisa.
- Carrion, J., Zárate, P., y Zechmeister, E. (2015) *Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas*. USAID. Recuperado de: http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/769/Carrion-Zarate-Zechmeister_Cultura-politica-resumen-ejecutivo.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2016). *Prevención de La criminalidad y seguridad cotidiana: Las ciudades y la Nueva Agenda Urbana (5to informe internacional)*. Recuperado de: <https://cipc-icpc.org/es/informe/5o-informe-internacional-sobre-la-prevencion-de-la-criminalidad-y-la-seguridad-cotidiana-las-ciudades-y-la-nueva-agenda-urbana/>
- Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (2018). *Homicidios en el Perú, contándolos de uno a uno 2011-2017. Informe estadístico N°6*. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1532/index.html
- Craig, G y Baucum, D. (2009). *Desarrollo Psicológico*. México: Pearson.
- Dammert, L y Lunecke, A. (2004). *Boletín Comunidad + Prevención CESC U. De Chile. La prevención comunitaria del delito; una visión de la comunidad*. Chile: CESC.
- Deborah Gorman-Smith (2004) *Prevention of antisocial behaviour in females*. DOI:10.1017/CBO9780511489259.010



- Farrington y Ttofi (2015). Developmental and Life-Course Theories of Offending. En Morizot, Julien & Kazemian, Lila. (Edts.). The Development of Criminal and Antisocial Behavior.
- Farrington, D. y Ttofi, M. (2015). Developmental and Life-Course Theories of Offending. En Morizot, Julien & Kazemian, Lila. (Edts.). The Development of Criminal and Antisocial Behavior Theory, Research and Practical Applications (pp. 19-38). Switzerland: Springer.
- Gallizo, M. (2007). Reinserción social de drogodependientes ingresados en centros penitenciarios. Salud y drogas, vol. 7, núm. 1, pp. 57-73, Instituto de Investigación de Drogodependencias. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/839/83970105.pdf>
- Galtung, J. (2003). Violencia Cultural. Gernika Gogoratuz. Recuperado de: <https://www.gernikagogoratuz.org/wp-content/uploads/2019/03/doc-14-violencia-cultural.pdf>
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia N.º 183, pp. 147-168. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>
- Goffman, E. (2006). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Heffernan, R. y Ward, T. (2015). The conceptualization of dynamic risk factors in child sex offenders: An agency model. DOI: 10.1016/j.avb.2015.07.001
- Herrera, D., & Morales Córdova, H. (2005). Comportamiento antisocial durante la adolescencia: teoría, investigación y programas de prevención. Revista De Psicología, 23(2), 202-247. <https://doi.org/10.18800/psico.200502.005>
- Krauskopf, D (2011). El desarrollo psicológico en la adolescencia: las transformaciones en una época de cambios. *Adolesc. salud* vol.1 n.2. Recuperado de: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004
- Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber, M., & White, H.R. (2008). Violence and serious theft: Development and prediction from childhood to adulthood. New York: Routledge.
- Loinaz, I. (2017). Manual de evaluación del riesgo de violencia. Metodología y ámbitos de aplicación. Editorial Pirámide: España-
- Macleod, J., Grove, P. G. y Farrington, D. P. (2012). Explaining Criminal Careers. Implications for Justice Policy. Oxford: Clarendon Press
- Martínez-Catena, A. y Redondo, S. (2016). Etiología, prevención y tratamiento de la delincuencia sexual. Anuario de Psicología Jurídica. 26 pp. 19-29. Doi: 10.1016/j.apj.2016.04.003
- Minuchin, S. (1986). *Familias y Terapia Familiar*. Barcelona: Gedisa.
- Moffitt, T (2018). Male antisocial behaviour in adolescence and beyond». *Nature Human Behaviour*, 2, n.º 3: 177-86. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0309-4>.
- Montero, M. (1998). La comunidad como objetivo y sujeto de acción social, en A. Martín González, Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis.



- Morales, H. (2014). *Comportamiento antisocial persistente y limitado a la adolescencia entre infractores institucionalizados*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Recuperado de: <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5102>
- Muggah, R; Garzón, J y Suárez, M. (2018). La "Mano Dura": Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina. Instituto Igarapé. Recuperado de: <https://igarape.org.br>
- Nina, K y Loayza, J. (2017). Comportamiento antisocial precoz y tardío en Adolescentes infractores institucionalizados. Tesis para optar el título profesional de psicólogo. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Recuperado de: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4630>
- Oliva, A; Ríos, M; Antolín-Suárez, L; Parra, A; Hernández, A; Pertega, M. (2010). Más allá del déficit: construyendo un modelo de desarrollo positivo adolescente, 33(2) pp. 1-12. DOI: 10.1174/021037010791114562
- Oliveros, M; Kawashita, D y Barrientos, A. (2008). Aplicación del Test de Moffitt validado en adolescentes mujeres con trastornos de conducta de inicio temprano y en conflicto con la ley. *Diagnóstico*, 47 (3).
- Pérez-Luco, R., Lagos, L., y Baez, C. (2012). Reincidencia y desistimiento en adolescentes infractores: análisis de trayectorias delictivas a partir de autorreporte de delitos, consumo de sustancias y juicio profesional. *Universitas Psychologica*, 11(4), 1209-1225.
- Redondo, S., Martínez, A., y Andrés, A. (2011). Factores de éxito asociados a los programas de intervención con menores infractores. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ESPAÑA.
- Rey, C; Mongui, Z; y Paitan, L. (2015). Diferencias entre adolescentes con trastorno disocial de inicio infantil e inicio adolescente. *Psicología desde el Caribe*, 32 (3) pp. 365-379.
- Román C., Marcela (2013). Factores asociados al abandono y la deserción escolar en América Latina: una mirada en conjunto. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 11(2),33-59. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551/55127024002>
- Ruiz-Hernández, J; García-Jiménez, J; Llor-Estebana, B; Godoy-Fernández, C. (2015). Risk factors for intimate partner violence in prison inmates
- Tanner-Smith, E., Wilson, S., y Lipsey, M. (2012). Risk Factors and Crime. Oxford Handbooks. doi:10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0005
- Wasserman, G; Keenan, K; Tremblay, R; Coie, J; Herrenkohl, T; Loeber, R; y Petechuk, D. (2003). Risk and protective factors of child delinquency. *Child Delinquency*, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs. Recuperado de: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojdp/193409.pdf>
- Weerman, F; Hoeve, M. (2012). Peers and delinquency among girls and boys: Are sex differences in delinquency explained by peer factors? Doi: [org/10.1177/1477370811435736](https://doi.org/10.1177/1477370811435736)
- Werth, F. (2006). Prevención social del delito: pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.



Wikström, P. (2009). Crime propensity, criminogenic exposure and crime involvement in early to mid adolescence. *Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform (Journal of Criminology and Law Reform)*, 92, 253–266.

Informes de instituciones nacionales e internacionales

Banco Interamericano de Desarrollo (2018). Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>

Banco Mundial (2019). Índice de GINI-Perú. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=PE>.

Bando de Desarrollo de América Latina – CAF (2014). Por una América Latina más segura. Una perspectiva para prevenir y controlar el delito. Bogotá: CAF.

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – CEDRO. (2018). El problema de las drogas en el Perú. Lima: CEDRO

CEPLAN (2019). Perú 2030: Tendencias globales y regionales. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1057132/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%A9-AL-2030-sello-de-agua-29-05-201720200728-16199-13m9bxbp.pdf>

DEVIDA. (2017) Estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria. DEVIDA: Lima-Perú.

Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES (2015) Violencia hacia las y los adolescente en el entorno familiar. INEI: Lima-Perú

Instituto Nacional de Estadística (2022). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las instituciones. INEI: Lima-Perú

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017). II Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas o Censo peruano. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2019). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. – INEI (2016). Censo Nacional de Población en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Ministerio de Educación (2019) Unidad de Estadística Educativa: Sistema de información a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (2019). Portal Estadístico. Programa Nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - Aurora. De enero a setiembre del 2019.

Ministerio Publico (2019). Informe anual del Programa de Prevención Estratégica del Delito. Lima-Perú.



- Ministerio Público (2021). Informe anual del Programa de Prevención Estratégica del Delito. Lima-Perú.
- Ministerio Público (2022). Informe anual del Programa de Prevención Estratégica del Delito. Lima-Perú.
- Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA (2019a). *Agresiones sexuales en el Perú. Factores de riesgo en adolescentes en conflicto con la ley penal por agresiones sexuales*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA (2019b). Víctimas y victimarios del feminicidio. Un estudio desde los perpetradores del delito. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA (2020a). Hacia una medición de la seguridad en los barrios seguros de Lima y Callao. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA (2020b). El fenómeno del sicariato en el Perú. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Observatorio Nacional de Política Criminal (2016) *¿Cómo son los Adolescentes Infractores en el Perú?* Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Lima.
- Programa Nacional de Centros Juveniles (2019). Informes estadísticos. Lima-Perú. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/pronacej/informes-publicaciones/tipos/2-boletin>
- Programa Nacional de Centros Juveniles (2020). Informes estadísticos. Lima-Perú. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/pronacej/informes-publicaciones/tipos/2-boletin>
- Programa Nacional de Centros Juveniles (2021). Informes estadísticos. Lima-Perú. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/pronacej/informes-publicaciones/tipos/2-boletin>
- Programa Nacional de Centros Juveniles (2022). Informes estadísticos. Lima-Perú. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/pronacej/informes-publicaciones/tipos/2-boletin>
- SISEVE Contra la Violencia Escolar (2019). Ministerio de Educación. MINEDU: Lima.
- UNICEF (2011). *La adolescencia Una época de oportunidades*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: New York.
- Unidades de Protección Especial de la Dirección de Protección Especial. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables UPE- MIMP (2018). Reporte estadístico. MIMP: Lima-Perú.
- Young Voice Perú. Save the Children, 2018. Reporte estadístico. Save the Children: Lima-Perú. Recuperado de: <https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-YOUNG-VOICE-PER%C3%9A.pdf>



XI. Resumen ejecutivo

Presentación

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, de fecha 21 de julio de 2017, tiene la función rectora de formular las políticas nacionales que le son propias de sus competencias, así como la función específica de orientar y contribuir con el establecimiento de la política criminológica. Asimismo, establece que la Dirección General de Asuntos Criminológicos es el órgano de línea encargado de diseñar, formular y evaluar las Políticas del Estado en materia criminológica, y, a su vez, que la Dirección de Política Criminológica tiene la función de diseñar, desarrollar, implementar, ejecutar y evaluar la política criminológica del Estado.

Conforme se precisa en la Ley Orgánica del MINJUSDH, Ley N° 29809, este tiene función rectora de formular, ejecutar y supervisar las políticas nacionales que le son propias por su ámbito de competencia, realizar el seguimiento del desempeño y logros alcanzados por las políticas, planes y programas en las materias de su competencia, en los niveles nacional, regional y local, así como tomar las medidas correspondientes, así como la función de orientar, dirigir, formular, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales del sector Justicia y Derechos Humanos a su cargo.

En el 2013, mediante Decreto Supremo N°014-2013-JUS, su artículo primero, aprobó la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (2013-2018) cuyo objetivo es la disminución del involucramiento de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de prevención, una administración de justicia eficaz y garantista, y la resocialización del adolescente.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, se realizaron acciones para la actualización de la referida política incorporando más de 10 sectores públicos, asociaciones sin fines de lucro a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes “Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, expertos nacionales e internacionales, y la participación de los y las adolescentes a nivel nacional en dos espacios de opinión: 1. Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y 2. Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa – Ministerio Público. Finalmente, en la XIX sesión de mayo de 2021 el Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC aprueba la versión final de la política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal.

Base legal

Normas e instrumentos internacionales

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1969) (Artículo 1 inciso 1; artículo 2; artículo 5 inciso 1,5; artículo 8; artículo 19; artículo 25). Ratificada el año 1978.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones Unidas). Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. La Resolución A/Res/70/L1 (Párrafo 3; párrafo 7; párrafo 23; párrafo 24).

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2



de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. (Artículo 1; Artículo 2, inciso 1.2, Artículo 40). Ratificada el año 1990.

Nueva Agenda Urbana - Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2016. (Párrafo 20; párrafo 39; párrafo 57, párrafo 61; párrafo 155).

Reglas de Naciones Unidas sobre la administración de Justicia de Menores. Reglas de Beijing. (1. Primera parte. Orientaciones 1 numeral 1.2 – 1.4; 5 Objetivos de la justicia de menores; 7 Derechos de los menores, numeral 7.1; Clausulas de salvedad 9 numeral 9.1). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los días 4 a 6 de marzo de 2008.

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). (Párrafo 1; párrafo2; párrafo 3; párrafo 4; párrafo 5-a-c; párrafo 52). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Reglas de La Habana. (párrafo 1; párrafo 3; párrafo 11; párrafo 66; párrafo 67). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 24 (2019) CRC/C/GC/24. Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil.

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/65/229. (Regla 36 al 39; Regla 61).

Directrices sobre la Administración de Justicia de Menores (Directrices de Viena). Celebrada en Viena del 23 al 25 de febrero de 1997. (Párrafo 15; párrafo 21; párrafo 36).

Normas nacionales

Constitución Política del Perú (artículo 1°, artículo 2 incisos 1, 2, 7, 22, 24 h; artículo 4, artículo 7, artículo 14, artículo 44).

Ley N°27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de Niños y Adolescentes.

Ley N° 30466 - Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño.

Decreto Supremo N°002-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño.

Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 4, artículo 5, artículo 6, Capítulo II artículo 17; Capítulo III artículo 23 inciso 23.3 a y c).

Ley N°29807, Ley de Creación del Consejo Nacional de Política Criminal. (Artículo 1; artículo 4, incisos 1.2.6).



Ley N°29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Artículo 5, artículo 6 b-c).

Decreto legislativo N.º 1266, Ley de organización y Funciones del Ministerio del Interior.

Decreto Supremo N.º 026-2017-IN. - Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú

Decreto Legislativo N°1299, Decreto que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (artículo1, artículo 4-h, artículo 7- e).

Decreto Legislativo N.º 1350, Decreto Legislativo de Migraciones (Título Preliminar, artículo VI; artículo 11; artículo 53).

Ley N° 27891, Ley del Refugiado (Capítulo II. Del Refugiado, Artículo 5; Capítulo VI. De las Sanciones, Artículo 32).

Decreto Legislativo N°1348, Decreto que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. (Título Preliminar. Artículo I inciso 1 y 2, artículo II inciso 1, artículo V incisos 1 y 2, Sección I numeral 1.1, artículo 1. Artículo 5).

Decreto Supremo N°008-2012-JUS, que aprueba el Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal.

Decreto Supremo N°092-2017-JUS, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Decreto Supremo N°011-2020-JUS, que aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030

Decreto Supremo N°013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Decreto Supremo N°029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N°038-2018-PCM, Decreto Supremo N°023-2019-PCM, Decreto Supremo N°168-2020-PCM, Decreto Supremo N°031-2021-PCM, y Decreto Supremo N°064-2021-PCM.

Decreto Supremo N°042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente periodo presidencial.

Decreto Supremo N°042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente periodo presidencial

Decreto Supremo N°006-2022-IN, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030

Resolución Ministerial N°0290-2019-JUS, que aprueba la lista de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, modificado mediante Resolución Ministerial N°0286-2022-JUS en su artículo 1.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00030-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la actualización de la Guía de Políticas Nacionales.



Enunciado del problema público.

El problema público que debe atender la presente Política Nacional es la *“Persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal”* el cual se ha determinado considerando información estadística, investigación académica y las posturas de los principales actores a nivel privado y público, así como a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

La variable principal del problema público es el contexto criminógeno el cual se define como la exposición continua a entornos de riesgo delictivo los cuales no son inherentes al individuo, sino que forman parte de su ambiente físico y social en el cual se desarrolla y son la fuente principal de su proceso de socialización a lo largo de su vida, todo ello en el marco del paradigma de los factores de riesgo conceptualizado como el correlato que precede al comportamiento antisocial y predice aumento u ocurrencia de comportamiento antisocial a través de un efecto directo o principal, así como los factores protectores los cuales actúan como moderadores que disminuyen la magnitud de un predictivo relacionado a un factor de riesgo y el comportamiento antisocial.

En este sentido, a nivel nacional, determinada población adolescente en situación de vulnerabilidad compleja habita en contextos de socialización violenta y en delincuencia ocasionando que, siendo una de las etapas del desarrollo humano más sensibles para su bienestar futuro, haya una presencia constante de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de involucrarse en infracciones a la ley penal; de igual modo, cuando un/una adolescente ingresa a un proceso dentro del sistema de justicia penal juvenil se enfrenta con insuficientes espacios para su resocialización o integración a la vida familiar, educativa y social.

Estructuración del problema público.

El involucramiento en conductas infractoras a la ley por parte de los y las adolescentes se origina y consolida por la presencia de múltiples factores de riesgo criminógenos social, individual y familiar los cuales acompañan al adolescente desde su niñez favoreciendo la construcción de un trayecto de vida vinculado al crimen principalmente a las infracciones a la ley penal vinculadas a los delitos patrimoniales, tráfico ilícito de drogas, violencia sexual, homicidio y otros delitos violentos; asimismo, los factores varían de forma significativa para los casos de violencia sexual priorizándose los riesgos a nivel de la formación psicosexual toda vez que esta población adolescente no necesariamente presenta condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

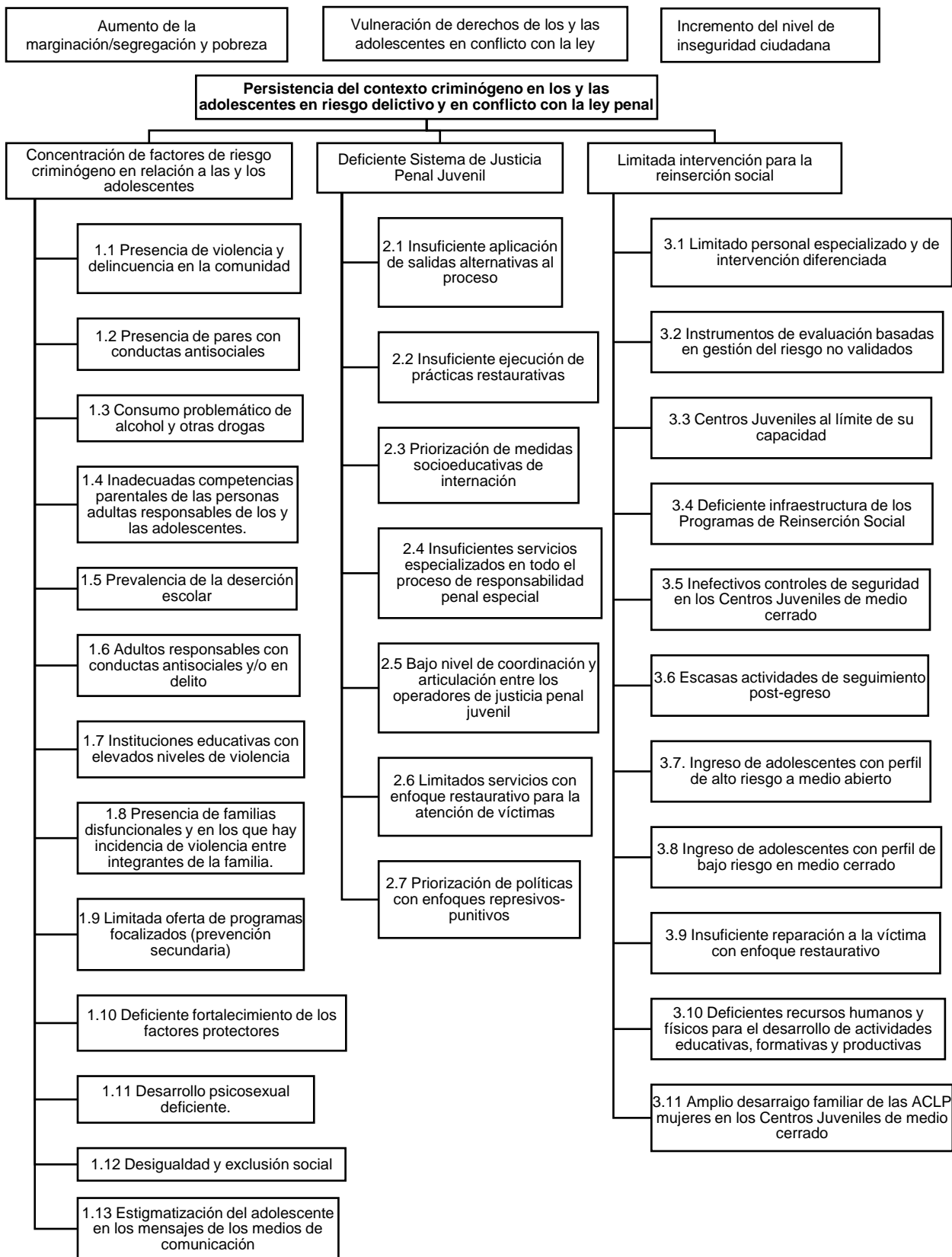
Cabe resaltar que, todas estas condiciones de riesgo a nivel de la delincuencia se desarrollan en un espacio urbano en condiciones de desigualdad social y económica, provocando el incremento de la violencia y delincuencia general en todas las regiones del Perú, particularmente en los núcleos urbanos. A nivel nacional, múltiples factores de riesgo criminógeno se agrupan reproduciendo escenarios o contextos criminógenos los cuales conllevan a que un número importante de adolescentes realicen conductas antisociales y violentas. Al mismo tiempo, ello conlleva a que en algunos casos ingresen al sistema de justicia penal juvenil el cual presenta diversas limitaciones para garantizar los derechos fundamentales; asimismo, estas personas vulnerables pueden llegar a los servicios de los Centros Juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, los cuales no tienen las condiciones suficientes para garantizar la reinserción social efectiva o menguar las condiciones de riesgo criminógeno, entre diversas razones por la falta de cobertura nacional de dichas estrategias y mejora en la efectividad de su intervención. En consecuencia, un



número importante de adolescentes transitan por los contextos en riesgo delictivo de desarrollo social primario y secundario, sistema de justicia penal juvenil, y centros juveniles o la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa manteniendo, en diversos casos, una trayectoria orientada a continuar con actividades criminales durante su juventud y adultez en las diversas modalidades de conducta delictiva o infracción a la ley penal: delincuencia común, y violencia sexual.

Bajo este marco de comprensión del problema público, y tal como se describe en la Figura 1, la estructuración de dicho problema público obedece a la interacción entre tres causas directas: Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes, deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil y limitada intervención para la reinserción social.

Por tanto, el problema general posee tres dimensiones: 1) Los sistemas de socialización más importantes del sujeto no cumplen su función generando factores de riesgo criminógeno y no promoviendo factores protectores; 2) El sistema de justicia penal juvenil tiene un carácter sancionador y no orientado hacia la resocialización vulnerando derechos fundamentales; y 3) Los servicios de reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal poseen diversas limitaciones a nivel de las estrategias y recursos humanos-materiales conllevando a la debilidad en la efectividad de sus intervenciones en los centros juveniles, así como en la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. Todo ello estructurado en el siguiente árbol del problema público:





Causas directas del problema público

La presente Política Nacional identificó cinco causas directas las cuales se detallan a continuación:

1. Causa directa 1: Concentración de factores de riesgo criminógeno en relación a las y los adolescentes.

Las condiciones desfavorables para el desarrollo de los y las adolescentes, en el Perú, están influenciadas por un entorno de elevada violencia caracterizada prioritariamente por la presencia de diversos factores de riesgo criminógenos en los primordiales contextos de desarrollo social (familia, institución educativa y comunidad), los cuales están en interacción con las particularidades de la etapa evolutiva adolescente. Ello implica que la intervención social desde el Estado en los contextos de desarrollo de riesgo no ha provocado una disminución significativa de los factores de riesgo criminógeno a lo largo de la vida del sujeto, contribuyendo en el incremento de la conducta violenta y antisocial.

Siendo sus correspondientes causas indirectas las siguientes:

- 1.1 Presencia de violencia y delincuencia en la comunidad
 - 1.2 Presencia de pares con conductas antisociales
 - 1.3 Consumo problemático de alcohol y otras drogas
 - 1.4 Inadecuadas competencias parentales de las personas adultas responsables de los y las adolescentes.
 - 1.5 Prevalencia de la deserción escolar
 - 1.6 Adultos responsables con conductas antisociales y/o en delito
 - 1.7 Instituciones educativas con elevados niveles de violencia
 - 1.8 Presencia de familias disfuncionales y en los que hay incidencia de violencia entre integrantes de la familia.
 - 1.9 Limitada oferta de programas focalizados (prevención secundaria)
 - 1.10 Deficiente fortalecimiento de los factores protectores
 - 1.11 Desarrollo psicosexual deficiente.
 - 1.12 Desigualdad y exclusión social
 - 1.13 Estigmatización del adolescente en los mensajes de los medios de comunicación
2. Causa directa 2: Deficiente Sistema de Justicia Penal Juvenil

Durante los últimos años, se ha evidenciado un incremento gradual de los y las adolescentes involucrados en infracciones a la ley penal, de igual modo, se evidencia un aumento gradual del número de ACLP con sentencias o quienes son atendidos en los Centros Juveniles (de medio abierto y cerrado) entre los años 1992 y 2017, finalmente, se promovió la reforma de la administración de justicia penal juvenil mediante la aprobación del Nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes - CRPA (Decreto Legislativo N°1348), es así que la implementación del CRPA en los próximos años asegurarán el cumplimiento de los logros establecidos en este eje de intervención.

Siendo sus correspondientes causas indirectas las siguientes:



- 2.1 Insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso
 - 2.2 Insuficiente ejecución de prácticas restaurativas
 - 2.3 Priorización de medidas socioeducativas de internación
 - 2.4 Insuficientes servicios especializados en todo el proceso de responsabilidad penal especial
 - 2.5 Bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil
 - 2.6 Limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas
 - 2.7 Priorización de políticas con enfoques represivos-punitivos
3. Causa directa 3: Limitada intervención para la reinserción social

La condición de los Centros Juveniles cuando se realizó la transferencia a cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, durante noviembre de 2018, incluye la atención total de 3,745 adolescentes mujeres y varones en todo el Perú bajo un total de 856 trabajadores teniendo un déficit o brecha de -72%. En este sentido, respecto a los niveles de sobrepoblación los Centros Juveniles de medio cerrado presentaban un total de 40% y 80% para los Centros Juveniles de medio abierto. Asimismo, los ambientes y equipamiento de gran parte de los Centros Juveniles relacionadas con la salud, educación y seguridad mostraban diversos déficits y falta de mantenimiento lo que dificultaba sus niveles adecuados de operatividad. En relación con la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, 892 adolescentes en conflicto con la ley penal han concluido su Programa de Orientación durante el año 2019; de los cuales 569 adolescentes en conflicto con la ley penal corresponden al registro de la Base de Datos 2018 y 323 adolescentes en conflicto con la ley penal corresponden al registro de la Base de Datos 2019.

Siendo sus correspondientes causas indirectas las siguientes:

- 3.1 Limitado personal especializado y de intervención diferenciada
- 3.2 Instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo no validados
- 3.3 Centros Juveniles al límite de su capacidad
- 3.4 Deficiente infraestructura de los Programas de Reinserción Social
- 3.5 Inefectivos controles de seguridad en los Centros Juveniles de medio cerrado
- 3.6 Escasas actividades de seguimiento post-egreso
- 3.7. Ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto
- 3.8 Ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado
- 3.9 Insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo
- 3.10 Deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas.
- 3.11 Amplio desarraigo familiar de las ACLP mujeres en los Centros Juveniles de medio cerrado

Situación futura deseada al 2030

La situación futura deseada es la siguiente:

Con las intervenciones que plantea la política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal, al año 2030, el contexto criminógeno de los y las



adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal habrá decrecido en un 11% en relación con los factores riesgos asociados a los delitos comunes (de 31% a un 20%) y el nivel de gravedad para las infracciones contra la libertad sexual disminuirá en 7 puntos (16 al 9), entendida esta última como la reducción significativa del número y nivel de gravedad de adolescentes que cometen infracciones contra la libertad sexual, conforme se puede apreciar en las fichas de indicadores del Anexo 05 al presente documento. Cabe resaltar que, estos delitos son los más frecuentes y con mayor impacto en la criminalidad que se producen entre los y las adolescentes de 14 y menos de 18 años. La aplicación focalizada de programas especializados, y multisectoriales por parte del Estado, permitirán fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo criminógeno, evitando una activa vinculación a contextos criminógenos en las instancias más nucleares de socialización: instituciones educativas, familias y comunidades

De igual modo, al año 2030, el contexto criminógeno en los y las adolescentes en conflicto con la ley penal se habrá reducido por medio de la atención en un 60% de servicios especializados a nivel del sistema penal juvenil, es decir, se buscará garantizar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo N°1348) al 2027 aprobado mediante Decreto Supremo N°003-2023-JUS y la puesta en marcha de estrategias presupuestales en las instituciones de la administración de justicia juvenil y la generación de herramientas como el programa presupuestal orientado por resultados.

Como resultado del análisis de los escenarios contextuales y sus riesgos y oportunidades se ha identificado que la proyección de las condiciones sociales y económicas en el Perú al 2030 impactan en el problema público relacionado con los contextos de violencia y delincuencia entorno al desarrollo del adolescente peruano, siendo la siguiente:

- *Se espera que el mayor acceso a una educación superior permita que los y las adolescentes puedan asegurar el ingreso a condiciones de trabajo cada vez más elevados, sin embargo, la desigualdad general se mantendrá permitiendo el mantenimiento de comunidades con violencia.*
- *A pesar de que la inestabilidad económica global afecte al Perú, el mantenimiento de un presupuesto suficiente para ejecutar problemas en beneficio de la niñez y adolescencia es posible. También se presentará un mantenimiento en la desconfianza y crisis de las instituciones públicas, no obstante, la agenda a favor de la niñez y adolescencia será una línea de mayor consenso para ejecutar política en pro de su desarrollo.*
- *La exigencia del mercado laboral será más sofisticada y especializada lo cual obliga al Estado a brindar mayores oportunidades de desarrollo educativo en los y las adolescentes. Asimismo, la disminución del crecimiento económico acompañado de desigualdad mantendrá el surgimiento de comunidades urbano-marginales donde se establezcan grupos de delincuencia-violencia común cercanos al desarrollo adolescente.*
- *La presencia de catástrofes naturales afecta de forma más intensa a la niñez y adolescencia, ello implica mayores limitaciones y barreras para su desarrollo y logro de objetivos de vida a nivel educativo, familiar y comunitario.*
- *Los espacios de socialización con violencia, desigualdad e inseguridad, según las*



proyecciones al 2030, tenderán a mantenerse, no obstante la capacidad presupuestal y la agenda pública a favor del bienestar del desarrollo del adolescente permitirán ejecutar políticas a favor del desarrollo adolescente que permita eliminar las actuales condiciones o contextos criminógenos en los cuales viven muchos adolescentes en el Perú evidenciados en diversos factores de riesgo a nivel familiar, educativo y comunitario.

- *En este contexto de mantenimiento de las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y violencia donde viven los y las adolescentes a lo largo de todas las regiones en los siguientes años, al año 2050, el Estado peruano busca ser un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional, además, busca que la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y la violencia; sin corrupción y discriminación y con igualdad de oportunidades; asimismo, todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro .*

Alternativas de solución seleccionadas

Se han identificado tres causas principales (dimensión preventiva, justicia penal juvenil y reinserción social) que convergen en el problema principal el cual determina la condición actual de muchos adolescentes y ACLP. En tal sentido, se han determinado un conjunto de intervenciones utilizadas para enfrentar las causas del problema público.

De este modo, en el análisis sobre los factores de riesgo criminógeno y protección, la experiencia y la evidencia sobre los programas y servicios sociales que se centran en niños, niñas y adolescentes han identificado como mejor estrategia a la prevención (Loeber et al., 2003)²⁶. Las estrategias con enfoque preventivo (primario, secundario y terciario), a nivel global, se han posicionado como prioritarias debido a que se consideran un aspecto nuclear de política e inversión pública, y la mayor evidencia por el análisis e intervención en factores protectores y de riesgo; además, estas actuaciones guardan coherencia con aspectos fundamentales como el interés superior del menor y el principio de intervención mínima (Muggah, Garzón y Suárez, 2018; Macleod, Grove y Farrington, 2012)²⁷.

Clasificación	Alternativas de solución
Económicos Aquellos programas sociales a nivel educativo, familiar y social que permitan generar servicios de protección y restitución de derechos de los y las adolescentes particularmente los que están en riesgo o en contacto con la ley penal.	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de intervención focalizados en instituciones educativas de alto riesgo. • Programas para brindar lecciones en el aula contra la violencia y para prevenir el abuso escolar. • Programas de intervención multisectorial que fomenten un adecuado desarrollo familiar en zonas priorizadas. • Programas comunitarios para mejorar el contexto social y comunitario. • Programas de intervención multisistémica para fortalecer el desarrollo psicosexual positivo.

²⁶ Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber, M., & White, H.R. (2008). Violence and serious theft: Development and prediction from childhood to adulthood. New York: Routledge.

²⁷ Muggah, R; Garzón, J y Suárez, M. (2018). La "Mano Dura": Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina. Instituto Igarapé. Recuperado de: <https://igarape.org.br>; y, Macleod, J., Grove, P. G. y Farrington, D. P. (2012). Explaining Criminal Careers. Implications for Justice Policy. Oxford: Clarendon Pres.



<p>Informativas En el marco de la reforma de la justicia penal dirigido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el principal instrumento informativo es la capacitación y especialización en el marco del D.L. 1348 y su reglamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Priorización de formación en la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal para la reforma de la administración de justicia juvenil. • Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social. • Programas de intervención basados en comunidades terapéuticas. • Implementar programa para la inclusión laboral mediante vínculos con el sector privado.
<p>Reguladoras En el marco de la implementación del D.L. 1348 se buscan desarrollar reformas normativas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de cuerpos normativos a nivel sustantivo y adjetivos para la aplicación de justicia penal juvenil. • Establecer una red de programas y servicios comunitarios para la reinserción de ACLP conformado por instituciones públicas, privadas para articular los procesos de reinserción social • Implementación de modelos de reinserción social con enfoque de criminología del desarrollo y RNR. • Priorizar medidas alternativas al proceso judicial para el fortalecimiento de la justicia juvenil bajo modelos restaurativos.

Objetivos prioritarios

Los objetivos prioritarios representan el aspecto central de la política nacional multisectorial en tanto que describen los cambios específicos que se desea alcanzar en materia de la política criminológica para prevenir el crimen y la reforma de la justicia penal juvenil, de modo que, orientan las acciones del Estado para alcanzar la situación futura deseada. En este sentido, para lograr enfrentar este problema público se ha determinado tres objetivos prioritarios los cuales incluyen lineamientos de trabajo.

Objetivo prioritario 1 (OP1): Reducir la concentración de condiciones de riesgo de los y las adolescentes en riesgo infractor

Este objetivo, pretende que los y las adolescentes se desarrollen de forma integral para evitar la inclusión en proyectos de vida en criminalidad a través de la disminución de los factores de riesgo criminógenos que la evidencia ha relacionado y fortalecer los principales sistemas de socialización como la familia, la comunidad y la institución educativa, de modo que, sean espacios de protección y promoción de los factores protectores específicos.

El OP1 responde a la causa directa 1 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones para disminuir factores de riesgo criminógeno en general e impulsar los factores protectores que contribuyan en la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno. Dicha causa describe la realidad de un grupo significativo de adolescentes a nivel nacional cuyo contexto de desarrollo psicosocial perjudica su desarrollo en la medida que hay presencia de delincuencia en su comunidad, grupos de iguales con conductas antisociales, consumo problemático de drogas, familias con deficientes competencias parentales, familias que presentan incidencia de violencia, deserción escolar, familias en delito o conductas antisociales, violencia en las instituciones educativas, muy limitada presencia de programas de prevención social del crimen, desarrollo psicosocial deficiente, desigualdad y estigmatización de la adolescencia.



Objetivo prioritario 2 (OP2): Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil

Este objetivo pretende asegurar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal alineados al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. Así como, el fortalecimiento de las estrategias y programas vinculados a las salidas alternativas al proceso judicial, y los enfoques como la justicia juvenil restaurativa y la justicia terapéutica.

El OP2 responde a la causa directa 2 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones desde el sistema de justicia penal juvenil para priorizar las medidas alternativas al proceso y la reinserción social, así como la reparación a la víctima. En este sentido, a lo largo de todo el proceso de atención al adolescente en conflicto con la ley penal, desde la Policía Nacional del Perú hasta el Poder Judicial, se han identificado diversas dificultades para brindar los servicios. Es así que, hay insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso y ejecución de prácticas restaurativas, excesivas medidas de internación, insuficientes servicios especializados, bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil, limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas y aplicación de múltiples políticas con enfoques represivos-punitivos.

Objetivo prioritario 3 (OP3): Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal

Este objetivo dispone alcanzar los niveles más altos de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal durante la ejecución de las medidas socioeducativas en los Centros Juveniles, así como durante la intervención de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa y su programa de orientación en el marco de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

El OP3 responde a la causa directa 3 en cuanto establece como lineamiento el ejecutar acciones desde los servicios de reinserción social basados en los modelos de gestión de riesgo de violencia y la justicia juvenil restaurativa. En efecto, el OP3 surge ante la situación actual de limitada reinserción social representada por la falta de personal especializado y de instrumentos de evaluación basadas en gestión del riesgo, existencia de centros juveniles al límite de su capacidad, deficiente infraestructura, inefectivos controles de seguridad en los centros juveniles, escasas actividades de seguimiento post-egreso, ingreso de adolescentes con perfil de alto riesgo a medio abierto, ingreso de adolescentes con perfil de bajo riesgo en medio cerrado, insuficiente reparación a la víctima con enfoque restaurativo, deficientes recursos humanos y físicos para el desarrollo de actividades educativas, formativas y productivas y el amplio desarraigo familiar de las adolescentes en conflicto con la ley penal en los Centros Juveniles de medio cerrado. Todo ello conlleva a que las actividades dirigidas a la reintegración del o la adolescente a su familia y comunidad se vean afectadas.



Código	Objetivos Prioritarios	Indicadores	Logro al 2030	Lineamientos	Responsables del objetivo
OP1	Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.	1.1. Índice de adolescentes con factores de riesgo para la delincuencia común.	20%	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	MINJUSDH, MIMP, MINSA, MINEDU, MTPE y DEVIDA.
		1.2. Promedio de meses de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal por infracciones contra la libertad sexual.	9	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo. 1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios de comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	
OP2	Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil	2.1. Porcentaje de distritos judiciales a nivel nacional que cuentan con	100%	2.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior-Policía



Código	Objetivos Prioritarios	Indicadores	Logro al 2030	Lineamientos	Responsables del objetivo
		servicios especializados en justicia penal juvenil		2.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.	Nacional del Perú y MINJUSDH.
		2.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal que no perciben vulneración de derechos.	75%	2.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas	
OP3	Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal.	3.1. Porcentaje de adolescentes que reingresan a un centro juvenil para el cumplimiento de una medida socioeducativa, por procesos distintos.	4.5%	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	MINJUSDH y Ministerio Público
		3.2. Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal con remisión fiscal que reiteran en infracciones a la ley penal.	5%	3.2. Establecer redes públicas y privadas para el apoyo a la reinserción de las y los ACLP	

Prestación de servicios

La población objetivo quienes son los receptores de las acciones del Estado buscan generar cambios en los y las adolescentes que se encuentran en contextos de socialización con factores de riesgo criminógeno, pero que no han ingresado en la administración de justicia penal juvenil, así como aquellos que ya se encuentran en conflicto con la ley penal. En cualquiera de los dos casos, se espera que los y las adolescentes no ingresen o continúen una trayectoria criminal por medio de un enfoque que prioriza la acción preventivo social y de justicia penal juvenil especializada y restaurativa.

Para lograr dichos objetivos se han determinado 17 servicios a cargo de los sectores del poder ejecutivo, Ministerio Público y el Poder Judicial, los cuales están vinculados directa e indirectamente con la población de adolescentes que presentan factores de riesgo delictivos a nivel educativo, familiar o comunitario, así como, todos los servicios dirigidos a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal y su correspondiente atención en una medida socioeducativa o programa de orientación.



Objetivo Prioritario	Lineamiento	Servicio
Reducir la concentración de condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes en riesgo infractor.	1.1. Ejecutar estrategias de prevención social-comunitaria para la disminución de las condiciones de riesgo criminógeno de los y las adolescentes y su entorno, prestando especial atención en aquellas en condición de alta vulnerabilidad basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la clase social, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de vulnerabilidad.	1.1.1. Servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas.
		1.1.2. Servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral dirigido a padres de familia e hijos adolescentes
		1.1.3. Servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo
		1.1.4. Servicio de actividades socioeducativas en colegios de carácter integral para adolescentes en riesgo de consumo de drogas
		1.1.5. Servicio de tutoría y orientación educativa de carácter fiable para promover el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.
	1.2. Fortalecer la intervención de los ámbitos de protección en beneficio de los y las adolescentes en riesgo.	1.2.1. Servicio de atención integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual a través de los Centros Emergencia Mujer
		1.2.2. Servicio de autorización de trabajo adolescente de carácter oportuno.
		1.2.3. Servicio de Educación Básica Alternativa de carácter accesible para adolescentes
	1.3. Ejecutar acciones de concientización en los medios comunicación y la comunidad sobre los y las ACLP	Lineamiento sin servicios



Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil	1.1. Garantizar la reforma de la justicia penal juvenil de los ACLP	1.1.1. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable garantizando los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
		1.1.2. Servicio de acceso a la justicia penal juvenil fiable en el proceso judicial por infracciones a la ley penal para adolescentes
		1.1.3. Servicio de defensa pública penal de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal
		1.1.4. Servicio de mediación de carácter accesible para adolescentes en conflicto con la ley penal
		1.1.5. Servicio de acceso a atención policial en módulos especializado en comisarías para adolescentes en conflicto con la ley penal
	1.2. Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las ACLP.	Lineamiento sin servicios
1.3. Implementar estrategias a nivel de la Justicia Terapéutica para los y las ACLP con consumo problemático de drogas	Lineamiento sin servicios	
Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal.	3.1. Implementar estrategias de gestión del riesgo criminógeno a nivel prejudicial y judicial para los y las ACLP.	3.1.1. Servicio de tratamiento socioeducativo de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal.
		3.1.2. Servicio de ejecución del programa de orientación de carácter integral para adolescentes en conflicto con la ley penal
	3.2. Establecer redes públicas y privadas para el apoyo a la	Lineamiento sin servicios



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Asuntos Criminológicos

Dirección de Política Criminológica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

	reinserción de las y los ACLP	
--	-------------------------------	--

Seguimiento y evaluación

El seguimiento de la política nacional estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de su Dirección General de Asuntos Criminológicos (DGAC), acompañado y asistido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM), en su condición de integrante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en conformidad con los mecanismos establecidos por CEPLAN, y mediante el registro a través del Aplicativo CEPLAN V.01. Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Política Criminológica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos se encargará de la evaluación, la cual se realizará en coordinación con las entidades proveedoras de servicios de la Política Nacional, y siguiendo las pautas y programación establecida por CEPLAN, como órgano rector en la materia.